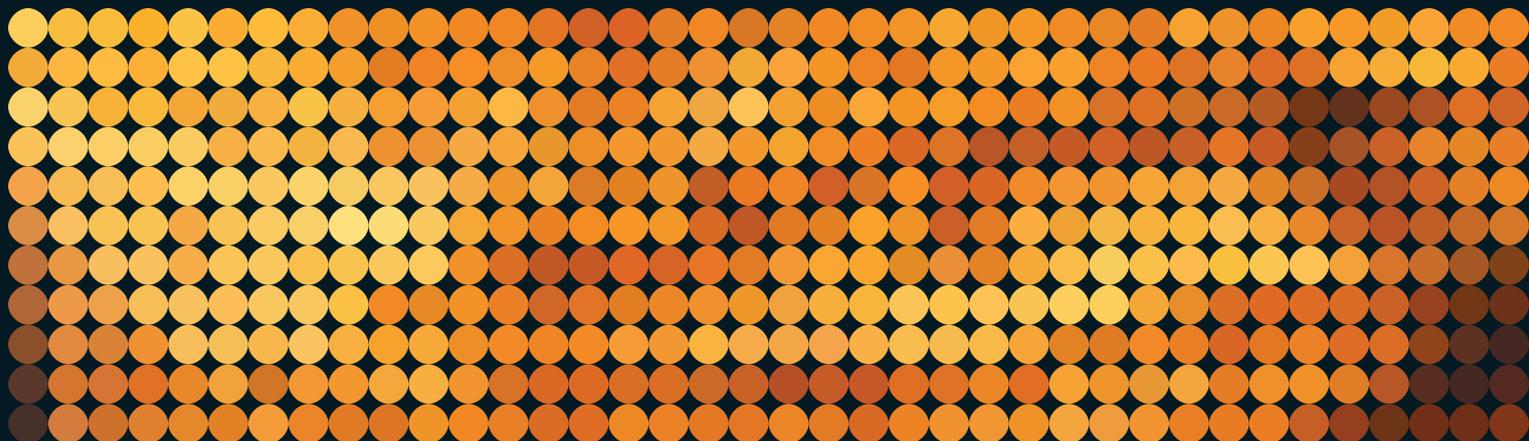




GOBIERNO DEL PRINCIPAU D'ASTURIAS
CONSEYERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA



VII INFORME DE LA DELEGACIÓN ASTURIANA DE VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 2011



VII INFORME DE LA DELEGACIÓN
ASTURIANA DE VERIFICACIÓN
DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN **COLOMBIA** 2011

VII INFORME DE LA DELEGACIÓN ASTURIANA DE VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN **COLOMBIA** 2011

ÍNDICE

■ Presentación	5
La VII Delegación asturiana	7
■ Introducción	8
Colombia, datos generales.....	8
Metodología	8
Objetivos	8
Regiones visitadas	9
■ Violaciones de los derechos humanos	10
1. Ejecuciones extrajudiciales y masacres	27
2. Amenazas	30
3. Desaparición forzada.....	36
4. Torturas, trato cruel o degradante	37
5. Detenciones arbitrarias y situación carcelaria.....	38
6. Violencia sexual, niños/as	41
7. Impunidad	43
8. Desplazamiento forzado	49
■ Violaciones del Derecho Internacional Humanitario, minas antipersonal	54
■ Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales	58
■ Pueblos indígenas y afrocolombianos	61
■ Conclusiones	64
■ Recomendaciones	66
Al Gobierno de Colombia.....	66
Al Gobierno de España.....	66
A los grupos armados ilegales.....	67
A los gobiernos del mundo	67
■ Anexos	68
Instituciones y organizaciones sociales entrevistadas	68
Siglas utilizadas	69

■ Presentación

La solidaridad internacional y la defensa y promoción de los Derechos Humanos han estado presentes desde el principio y constituyen, a día de hoy, los elementos fundamentales de la acción en las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu y de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Tal es este compromiso que, para seguir progresando firmemente en esta línea, se han ido configurando herramientas específicas que garanticen un avance cuantitativo y cualitativo.

Por un lado, hay que destacar la «Comisión Asturiana de Derechos Humanos», cuyo trabajo se centra en prestar asesoramiento y el soporte técnico correspondiente a la propia Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu. Y, por otro, la «Estrategia Asturiana de Derechos Humanos», un mecanismo de orientación y evaluación de las políticas públicas de Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un ideal común por el que todos los pueblos y naciones debemos esforzarnos para que tanto los individuos como las instituciones los promovamos y los respetemos. Pero, dicho esto, también es preciso constatar que la realidad actual en muchísimas partes de este mundo globalizado, donde los intereses políticos, económicos y belicistas prevalecen por encima de los valores colectivos e individuales de libertad, igualdad, justicia y solidaridad, dista mucho a la hora de consolidarse como una promesa universal de obligado acatamiento para todos y todas.

La vulneración de los derechos humanos causa y agudiza el empobrecimiento e impide el desarrollo de individuos y poblaciones. Al mismo tiempo, la situación de injusticia social y pobreza conduce a nuevas

violaciones de los derechos humanos, provocando un círculo vicioso.

Millones de personas están privadas del acceso a los derechos básicos y necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado. Las condiciones de insalubridad, falta de acceso a agua potable, saneamiento, atención médica, seguridad o educación que padecen decenas de millones de personas son, en la mayor parte de las ocasiones, fruto de decisiones de gobiernos, empresas y otros agentes con intereses espurios. Por eso, quienes ostentamos responsabilidades públicas y nos sentimos herederos de los valores más nobles que deben estar presentes en cualquier sociedad y democracia avanzada, debemos tener los ojos puestos en aquellos conflictos sobre los que es preciso llamar la atención y evitar que se silencien, que queden abandonadas a su suerte o condenadas al ostracismo.

Colombia es un buen ejemplo. Un país inmerso en un conflicto político, social y militar, con más de cincuenta años de historia, cuyas consecuencias le han condenado a ocupar un lugar destacado en el ámbito de las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El cambio gubernamental de discurso unido por el nuevo presidente Santos no se acompaña aún con hechos tangibles que demuestren ese compromiso firme del Gobierno colombiano para instaurar un verdadero Estado de Derecho que ponga fin a las desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes sociales. Ésta es una cuestión objetiva que puede visualizarse en las conclusiones extraídas de determinados informes de organismos y organizaciones internacionales, algunas de ellas agencias dependientes directamente de las mismas Naciones Unidas.

Con la VII visita de la Delegación Asturiana a Colombia, en la que por primera vez ha participado una representación del Gobierno Vasco personalizada en la

directora general de Derechos Humanos, ha quedado demostrada una vez más la implicación política y la solidaridad institucional de la que goza el problema colombiano en nuestro Estado. Este trabajo se enmarca en la línea de acompañamiento y denuncia internacional de la vulneración de los derechos individuales y colectivos más elementales que recoge el Plan Director de la Cooperación Asturiana (2009-2012).

Aquí también es preciso resaltar los resultados del Programa de atención temporal a activistas y defensores de Derechos Humanos que, desde hace once años, venimos desarrollando desde el Gobierno de Asturias y que ha garantizado protección a un total de 76 personas. Estos ejemplos demuestran que la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu no permanece neutral ni impasible ante situaciones de vulneración de derechos humanos.

Este informe pretende ser un instrumento más al servicio de la sociedad asturiana y la comunidad internacional. Un espejo de las diferentes expresiones y facetas que son consecuencia directa de la hostilidad recíproca que mantienen entre sí los diferentes actores de este execrable conflicto. A lo largo de los días que estuvimos viviendo en carne propia la mismísima realidad colombiana fuimos testigos directos de determinados contextos, ambientes o situaciones que conducen a reafirmar esa inexplicable degradación política, social y humana que también forma parte de esta sociedad imperfecta en la que vivimos.

Decía el filósofo que «el hombre es un lobo para el hombre», y en algunos momentos, a tenor de lo vivido, no le faltaba razón alguna: asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, vejaciones y violaciones, amenazas, presiones, hostigamientos y controles férreos sobre comunidades... forman parte de esa idiosincrasia particular que se vive en esas tierras de la otra parte del océano.

Me siento en la obligación de revelar y desvelar ante la opinión pública algunos de los hechos que causaron estupor durante nuestra visita. Uno de ellos, lo acontecido días antes de nuestra visita en el Corregimiento de la Marina (municipio de Chaparral), con un balance de tres militares y un civil muerto y otro herido. El otro, la aparente división existente entre varios departamentos del Gobierno colombiano actual a la hora de esclarecer y/o depurar responsabilidades imputadas a determinadas estructuras jerárquicas del Ejército que, en lugar de caminar hacia la búsqueda de una salida definitiva del laberinto, dificulta aún más dicho objetivo.

A modo de conclusión, sí me gustaría hacer especial hincapié sobre tres cuestiones finales. La primera de ellas animar a todas las partes armadas (fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros) para que depongan el uso de las armas y se comprometan con el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La segunda de ellas que el Gobierno colombiano sea quien lidere un auténtico proceso de paz que ponga fin a este conflicto actuando con todo el peso de la ley y la justicia contra quien corresponda y sea quien sea. La tercera y última hacer un llamamiento a la Comunidad Internacional, incluida la española y la asturiana, para que permanezca atenta al devenir de los acontecimientos que se vayan produciendo en Colombia, exigiendo el compromiso firme y serio de las autoridades colombianas para liderar la puesta en marcha de un mecanismo que conlleve a un final dialogado y negociado entre todas las partes implicadas.

❖ **Marcos Cienfuegos Marqués**

Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

La VII Delegación Asturiana

La visita de la VII Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia se realizó entre el 6 de marzo y el 12 de marzo del 2011.

La Delegación estuvo conformada por:

- **Marcos Cienfuegos Marqués**, Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
- **Inés Ibáñez de Maeztu**, Directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
- **Leire Lasa Fernández**, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Euskadi, CEAR-Euskadi.
- **Javier Arjona Muñoz**, de SOLdePAZ PACHAKU-TI.
- **Javier Orozco Peñaranda**, coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia.



■ Introducción

Colombia, datos generales

Jefe del Estado y del gobierno: Juan Manuel Santos Calderón (7 de agosto 2010-2014).

Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos.

Población: 45,7 millones.

Esperanza de vida: 72,7 años.

Mortalidad infantil (<5 años) (h/m): 30/22 por cada 1.000.

Población adulta alfabetizada: 92,7 por ciento.

Población afro descendiente: aprox. 11%.

Población indígena: 102 pueblos, aprox. 1,5 millones de personas.

Pueblo Rom o gitano: aprox. 5.000 personas.

Idioma oficial: el castellano en todo el país y las 64 lenguas indígenas en sus territorios, además del bandé, el palenquero y el romaní.

El salario mínimo mensual legal en el 2010 fue de 200 euros.

Colombia formalmente es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Art. 1º de la Constitución Política del 2001).

El Estado colombiano ha ratificado: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Hu-

manos, las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicionales, la Convención de la ONU sobre la Mujer, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.

Según la Constitución de Colombia estos Pactos y Convenciones ratificadas son de obligatorio cumplimiento, incluso bajo estados de excepción deberían prevalecer en el orden interno.

En el contexto del conflicto armado se aplican también las normas consuetudinarias y Convencionales del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Metodología

El presente informe es producto del trabajo de campo de la Delegación Asturiana en cinco regiones del país, que abarca la recepción de testimonios de las víctimas y/o sus familiares, reuniones con organizaciones de derechos humanos y con las autoridades civiles y militares, documentos e informes de organizaciones especializadas en derechos humanos y registros de los medios de comunicación.

Objetivos

1. Conocer la situación de los Derechos Humanos en cinco departamentos.
2. Informar de sus constataciones a las instancias pertinentes en el Estado español, Unión Europea, ONU, OEA y OIT.
3. Coadyuvar a la difusión y protección de los Derechos Humanos en Colombia.

Regiones visitadas

Atlántico

Corregimiento Pital de Megua, municipio de Baranoa.

Municipio de Galapa.

Municipio de Barranquilla.

Sucre

Municipio de Ovejas.

Municipio de Sincelejo.

Tolima

Ibagué.

Corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca.

Corregimiento de La Marina, municipio de Chaparral.

Huila

Neiva.

Algeciras.

Valle del Cauca

Municipio de Trujillo.



■ Violaciones de los derechos humanos

Se consideran violaciones de los derechos humanos las acciones y omisiones que afectan a derechos reconocidos internacionalmente, cuando la autoría es de servidores públicos o de agentes no estatales cuyas acciones el Estado promueve, tolera o no tiene capacidad de dar respuesta.

«En Colombia ha habido gravísimos crímenes cometidos por agentes del Estado. La doctrina militar colombiana favorece las alianzas criminales para el control de los territorios. La guerra civil de cuarenta años no ha terminado y en ella el Estado perdió el control de diferentes regiones. En los setenta, los campesinos lograron recuperar tierras y asustaron a los latifundistas, que crearon a los paramilitares en alianza con los empresarios y los narcotraficantes, y para hacer retroceder a los campesinos hicieron masacres como las de los Montes de María...».¹

«Si bien hay un cambio de actitud y tono por parte del gobierno Santos, no hemos visto cambios en la trayectoria de abusos en Colombia, que siguen siendo muy graves». José Miguel Vivanco, Director de Human Rights Watch, 17 de marzo de 2011.

1. Colombia continúa inmersa en un álgido conflicto social y armado para el que no se vislumbra por ahora una salida distinta a la continuidad de la confrontación.

¹ Germán Reyes, Asesor del Ministerio de Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

2. Durante el 2010 en Colombia se profundizó la exclusión, la inequidad y se incrementaron las tasas de ganancia de las empresas extranjeras y la concentración de la propiedad de las tierras, la renta y el ingreso en pocas manos.

3. En Colombia «el coeficiente de Gini alcanzó en 2010 un valor de 0,585, lo que sitúa al país entre los siete más desiguales del planeta».²

4. Continuaron las violaciones impunes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos, los homicidios, la desaparición forzada de personas, las detenciones arbitrarias, las amenazas de muerte y el desplazamiento forzado, al tiempo que se comienza a conocer la dimensión de la violencia contra las mujeres en la sociedad y dentro del conflicto armado.

5. «Todas las partes implicadas en el conflicto —fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros— fueron responsables de graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario».³

6. Los militares han asumido de facto funciones de policía judicial en muchas regiones del país donde es habitual que realicen actividades ilegales, como empadronamientos, allanamientos sin orden judicial, capturas, interceptación de comunicaciones, entre otras atribuciones, a pesar de que el 30 de agosto de 2004 la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-816/04, declaró inexecutable el Acto Legislativo 02 del 18 de diciembre de 2003 llamado «Estatuto anti-terrorista» que lo posibilitaba.

² Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22. Febrero de 2011.

³ Informe 2010 Amnistía Internacional. Estado de los Derechos Humanos en el Mundo.

7. Colombia continuó recibiendo ayuda militar de Estados Unidos y otros países le venden armas a pesar de tener conflicto interno y antecedentes de violaciones masivas de los derechos humanos con responsabilidad de la fuerza pública. «Estados Unidos ha entregado a Bogotá cerca de 6.000 millones de dólares desde el año 2000, cuando se aprobó el Plan Colombia de lucha contra las guerrillas y el narcotráfico».⁴

8. Las partes en conflicto no distinguieron entre civiles y combatientes. Algunas de las ciudades más grandes del país registran un incremento de la violencia atribuible al conflicto armado, a los delitos relacionados con el narcotráfico y a los actos de «limpieza social».

9. «Tradicionalmente entre las personas elegidas como blanco de homicidios por las fuerzas estatales y los grupos armados ilegales de Colombia figuran de manera prominente defensores de los derechos humanos; sindicalistas; defensores de los derechos de las mujeres, las víctimas y las minorías; lesbianas, gays, bisexuales y transexuales; o personas con discapacidad física o mental».⁵

10. El Gobierno colombiano informa que hace un esfuerzo importante al prestar seguridad a cerca de 10.500 personas mediante el Programa de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio del Interior y Jus-



ticia, consistente en escoltas, coches, armas, 6.000 líneas de comunicación, que se suman al trabajo por ejes temáticos como la Mesa Nacional de Garantías para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la mesa de Justicia e Impunidad, la mesa de Defensa, la mesa de Mujer, la mesa de Tierras.⁶

11. El conflicto social sigue recibiendo tratamiento militar, siendo frecuente el uso desproporcionado de la fuerza y el uso ilegal y clandestino de los servicios de inteligencia del Estado para perseguir o intimidar a opositores sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos.

12. «Entre 1986 y 2009 una docena de trabajadores y sindicalistas de la NESTLÉ en Colombia fueron asesinados por los paramilitares, que actuaron junto

⁴ «El Espectador», 15 de septiembre de 2010.

⁵ Informe A/HRC/14/24 del Relator Especial Philip Alston sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 31 de marzo de 2010.

⁶ Entrevista con *María Paulina Riveros*, Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia.

con miembros de las fuerzas armadas. Las amenazas de muerte generan una situación muy grave para Sinaltrainal y sus afiliados, ya que no es la primera vez que lo hacen, desplazan, torturan y terminan asesinando a nuestros compañeros. Entre 1986 y 2009 varios trabajadores y ex trabajadores de Nestlé fueron asesinados: Luciano Enrique Romero Molina, Héctor Daniel Useche Beron, Víctor Eloy Mieles Opino y su esposa Rosa Ramírez, Alejandro Matías Hernández V., Harry Laguna Triana, Toribio de la Hoz Escorcia, Omar Darío Rodríguez, Hernando Cuartas, Luis Alfonso Vélez Vinazco, José Manuel Becerra Pacheco, José de Jesús Marín y Gustavo Gómez. Sin contar los desplazados y desterrados del país para evitar ser asesinados... Las trasnacionales nos han declarado la guerra, Colombia posee muchas riquezas naturales que, desafortunadamente, no nos pertenecen. Pero se ha demostrado que donde hay riquezas hay trasnacionales, y donde hay trasnacionales hay grupos paramilitares y, por ende, hay violencia».⁷

13. Durante el 2010 se demostró judicialmente la práctica de las ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos» de al menos 2.547⁸ personas asesinadas por la fuerza pública en diferentes regiones y épocas y con similares modos de operación, lo que hace dudar de que se trate de «casos aislados» como afirma el alto mando militar.

14. «Los grupos guerrilleros siguen dando muerte a civiles, especialmente los que están atrapados en una situación de neutralidad imposible entre la guerrilla y las fuerzas armadas del Estado. También se producen muertes de civiles a causa del uso indiscriminado

⁷ Alfonso Barón, Vicepresidente del Sindicato Sinaltrainal - CUT. Ginebra, Suiza, diciembre de 2010.

⁸ La Fiscalía, en su Unidad Nacional de Derechos Humanos, investiga actualmente 1.488 casos con 2.547 víctimas.

minado de la fuerza y la utilización ilegal de minas terrestres por la guerrilla».⁹

15. En el 2010 hubo un incremento de las acciones delictivas de los grupos paramilitares, que según el Gobierno habían dejado de existir. Los paramilitares son los principales autores del incremento del número de masacres y amenazas de muerte durante el 2010.

16. «En medio de los combates queda la gente del común. Ninguna de la partes en conflicto respeta a la población civil, ni los derechos humanos, ni el derecho internacional humanitario, con el agravante de que el Gobierno sí debiera hacerlo, pero es precisamente el ejército el que más los viola».¹⁰

17. «El gobierno de JUAN MANUEL SANTOS es la continuidad del gobierno anterior; los cambios de estilo han sido sobrevalorados y presentados como si fueran cambios de fondo, pero continúa con las mismas políticas antipopulares y antinacionales de Uribe, y aunque dice que «las puertas del diálogo no están cerradas» a diario se contradice por su intransigencia imponiendo a la guerrilla condiciones de rendición que resultan inaceptables y que prolongan el conflicto».¹¹

18. El gobierno de JUAN MANUEL SANTOS, a diferencia de su antecesor Álvaro Uribe Vélez, usa un tono conciliador al referirse a la legítima actividad desarrollada por sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, pero esa actitud aún no se refleja en disminuciones de las graves violaciones de los derechos humanos que se comenten en su mayoría con

⁹ Informe A/HRC/14/24 del Relator Especial Philip Alston sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 31 de marzo de 2010.

¹⁰ Testimonio Re de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes. V Encuentro del MOVICE, Bogotá, 10 de marzo de 2011.

¹¹ Gloria Inés Ramírez, Senadora de la República. Intervención ante el V Encuentro del MOVICE, Bogotá, 10 de marzo de 2011.

la complicidad o aquiescencia de la fuerza pública. «El cambio en el lenguaje del discurso gubernamental de Seguridad Democrática a Prosperidad Democrática, de supuesta concertación y respeto a los derechos humanos, no ha trascendido a los hechos y se mantiene la violencia sociopolítica, impunidad y el conflicto social y armado».¹²

19. El gobierno de JUAN MANUEL SANTOS anunció que trabajará cinco ejes prioritarios para superar la crisis de los derechos humanos: lucha contra la impunidad; la Ley de Víctimas; la lucha contra los grupos armados ilegales; la realización de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, y el desarrollo de una política a favor de la promoción y difusión del respeto integral de los Derechos Humanos y de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

20. «Si bien el gobierno de Santos ha impulsado iniciativas importantes de derechos humanos, las medidas aún deben ser implementadas y los resultados aún no son visibles... Es crucial que Colombia reduzca la cantidad de asesinatos y ataques contra sindicalistas y lleve a los responsables de estos delitos ante la justicia. Estos estándares incluyen medidas concretas y viables que debe adoptar el gobierno colombiano».¹³

21. «Colombia tuvo innegables avances en derechos humanos entre el 2010 y el 2011, hay un discurso diferente y desafíos antiguos. Los avances se refieren al desarme de la palabra, acercamientos con los defensores de derechos humanos, disminución del enfrentamiento entre el gobierno y la fiscalía, reactivación de las mesas temáticas de garantías; la

preparación de una conferencia nacional de derechos humanos hacia una política integral, y consolidar los avances en una agenda de derechos humanos. En derechos humanos hay que reconocer la existencia de ataques sistemáticos, amenazas de muerte, robos de información, montajes judiciales, detenciones arbitrarias, asesinato de líderes, los procesos de restitución de tierras y defensores de derechos humanos. Y es un avance y una oportunidad el que esté en discusión una ley para las víctimas, con la asesoría de la OACNUDH, en la que se debieran incluir a los agentes del Estado como responsables de violar los derechos humanos, y no excluir víctimas por serlo de actores irregulares: la ley de tierras además es una apuesta audaz hacia una política integral de protección a la restitución de tierras».¹⁴

22. «Consideramos que el proyecto de ley que próximamente se discutirá en el Senado es un avance en relación con la actitud política del gobierno de Uribe, en cuanto reconoce algunas de las demandas históricas que víctimas, sectores sociales y políticos han realizado, y reconoce la crítica situación de derechos humanos que atraviesa el país, expresando que la violencia es dramática, generalizada y sistemática, y que ha existido un despojo violento de tierras... Por esa razón, vemos con gran preocupación que el proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras carezca de un enfoque integral de la política de reparación y produzca retrocesos sustanciales en cuanto a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de las víctimas».¹⁵

¹² Declaración Política del V Encuentro Nacional del MOVICE. Bogotá, 10, 11 y 12 de marzo de 2011.

¹³ José Miguel Vivanco, Director para las Américas de «Human Rights Watch». 17 de marzo de 2011.

¹⁴ Portavoz de la OACNUDH en Colombia. V Encuentro Nacional del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

¹⁵ Iván Cepeda, Diputado en la Cámara de Representantes. Intervención en el V Encuentro del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.



23. «Si bien hay un cambio de actitud y tono por parte del gobierno Santos, no hemos visto cambios en la trayectoria de abusos en Colombia, que siguen siendo muy graves».¹⁶

24. El aumento de las masacres da cuenta del agravamiento de la situación de los derechos humanos en varias regiones del país. «Las 38 masacres ocurridas entre enero y noviembre de 2010 representan un incremento del 41 por ciento respecto del mismo período del año anterior».¹⁷

25. «Valoramos la disposición de la guerrilla de las FARC-EP de realizar la entrega unilateral de cinco personas en su poder y la respuesta del presidente Santos de crear condiciones propicias para que esta

¹⁶ «Human Rights Watch», José Miguel Vivanco. «El Tiempo», 25 de enero de 11.

¹⁷ José Miguel Vivanco, Director de «Human Rights Watch».

decisión humanitaria se concrete. Dicha decisión, sumada a las expresiones públicas de las comandancias de las FARC-EP y del ELN de estar en disposición para iniciar diálogos en la búsqueda de la terminación del conflicto social y armado, es un signo importante que debería ser tratado con responsabilidad por parte de la administración Santos. Se debe avanzar en el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, el cese en la militarización territorial y social, y la creación de un mecanismo que facilite estas conversaciones hacia la solución política y negociada, con la participación amplia de la sociedad civil».¹⁸

26. Continuaron los ataques contra las víctimas de violaciones de los derechos humanos. «Acabo de salir del juzgado 6° de dar testimonio contra el DAS por su espionaje ilegal. El DAS saboteó el II Encuentro del MOVICE y asesinó a LUCIANO ROMERO; el DAS amenazó y hostigó el III Encuentro junto con los paramilitares; y en el IV Encuentro, que hubo movilizaciones por todo el país, se dieron a hacer apresamientos ilegales y asesinatos. Este V Encuentro ha estado precedido de amenazas de muerte; pretenden que sea más difícil reconocer la criminalidad del Estado. El Presidente Santos a regañadientes lo reconoce parcialmente».¹⁹

27. «ALEXANDER QUINTERO MARTINEZ, líder campesino, miembro de la Unión Territorial Interétnica del

¹⁸ MOVICE, Declaración Pública «Frente a las políticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos». Bogotá 30 de enero de 11.

¹⁹ Ibídem.

Naya-UTINAYA, y presidente de la Asociación de Juntas Comunales del Alto Naya —organización miembro de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base—, fue asesinado el 23 de mayo de 2010, cuando regresaba hacia su residencia... fue atacado con arma de fuego por cuatro hombres que se movilizaban en dos motos».²⁰

28. Continúan los ataques contra el movimiento sindical colombiano. «La violencia contra el movimiento sindical ha costado más de tres mil asesinados. En el 2009 el 50% de los sindicalistas asesinados en el mundo eran colombianos, en el 2010 asesinaron a 52 sindicalistas, que es el 51%. La campaña para acabar con la CUT y arrasar con la acción y la libertad sindical se refleja al ver que en poco más de veinte años pasamos de tener un millón de afiliados a menos de quinientos mil. Un sindicalista de esta región del Tolima, HENRY RAMÍREZ DAZA, pensionado y dirigente comunitario de Ambalema que aspiraba a ser su alcalde, fue asesinado hace menos de un año en su casa, delante de su hijo, luego de que el Gobierno le quitara el esquema de seguridad sin estudio previo de riesgo. En el sector agrario han arrasado a FENSUAGRO en el Tolima. ASTRACATOL lleva 3 asesinados. HENRY MOYA, asesinado el 22 de enero del 2010; ADOLFO TIQUE, asesinado el 1 de enero del 2009; e IVÁN TOVAR, asesinado el 25 de octubre del 2009, y van 25 profesores asesinados. Hay un persistente hostigamiento en el Tolima desde aparatos de seguridad del Estado contra el movimiento sindical como parte de un plan de exterminio selectivo contra las organizaciones sindicales como ANTHOC, SIMATOL, con impunidad del 100% en asesinatos de sindicalistas. El Gobierno vie-

²⁰ Comunicado de la RED DE INICIATIVAS Y COMUNIDADES DE PAZ DESDE LA BASE: «Un Camino hacia la Paz». Santander de Quilichao, Cauca, Colombia.

ne construyendo un discurso falso que afirma que los derechos humanos mejoraron. Pretenden lavar la cara para la llegada de la inversión internacional, por eso han incrementado la presión diplomática, para que se firme el TLC con la UE y EUA. En la 99ª asamblea de la OIT las presiones de los empresarios lograron que Colombia no fuese sancionada y, a cambio, le enviaron una comisión permanente».²¹

29. Las medidas de protección para los y las sindicalistas resultan insuficientes si nos atenemos al número de asesinatos, pero el Gobierno tiene otra opinión». La materialización de la voluntad del Gobierno se ha reflejado en una amplia cobertura para los dirigentes sindicales y además, en la adopción de medidas idóneas de protección como esquemas móviles compuestos por vehículos, personal escolta y medios de comunicación, así como blindaje de sedes, entre otros».²²

30. Hay una persecución contra MARCO REINERIO MONTEALEGRE, Presidente de la Seccional Rovira de ASTRACATOL, a quien le enviaron «un emisario» para amenazarlo mientras hostigan también a la tesorera de la asociación, FENY JULIETH VELEZ, por parte de un grupo de hombres que actúan con la complicidad de las fuerzas militares en la región.²³

31. «El día 30 de marzo de 2011, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, los campesinos Héctor Orozco y Gildardo García se dirigían a su casa en moto por la carretera que comunica el casco urbano de Charral con el corregimiento La Marina, siendo asesinados a la altura de la vereda Espíritu Santo-Albania,

²¹ Luis Alberto Vanegas, Director del Depto. de Derechos Humanos de CUT Colombia. Ibagué, 7 de marzo de 2011.

²² Comunicado del Ministerio del Interior, 9 de junio de 2010.

²³ Testimonio en Ibagué, 7 de marzo de 2011.

con armas de fuego. No existen testigos presenciales de los hechos, sin embargo es preciso mencionar que esta zona se encuentra plenamente militarizada y a menos de 400 metros del lugar de los hechos hacen presencia permanente tropas del Ejército Nacional a la altura del denominado cruce del Espíritu Santo. Héctor Orozco era un campesino de la vereda San Fernando, del corregimiento de La Marina, como destacado dirigente de la comunidad ejercía como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda y vicepresidente de la Seccional Chaparral de ASTRACATOL. Tenía 35 años de edad, era padre de 3 hijos menores. Gildardo García era un campesino de la vereda Florestal - Ambeima, del corregimiento de La Marina, socio de la Junta de Acción Comunal de su vereda. Tenía 32 años de edad, era padre de 4 hijos menores».

32. Continúa la persecución impune contra la población LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales) y contra quienes reivindican y defienden los derechos humanos de estas personas. Durante el 2010 se reportaron 50 homicidios y numerosas amenazas de muerte.

33. Se constató el incremento de las amenazas de muerte contra defensores y defensoras de los derechos humanos. «Normalmente, los autores de las amenazas, incluidas las amenazas de muerte, los intentos de asesinatos y las agresiones físicas son desconocidos o personas no identificadas, si bien se ha denunciado que se trata de personas o grupos que se ven afectados de alguna forma por la labor realizada por sus víctimas, o que tienen algún tipo de relación con ellas».

34. «A ese respecto, los grupos paramilitares y otros grupos armados, especialmente en Colombia, suelen ser los autores de los asesinatos y de las ame-

nazas de muerte, que pueden ir dirigidos a personas pertenecientes a amplios sectores de la sociedad civil, y que, a menudo, van acompañados de la estigmatización de la labor que realizan los defensores, a los que se declara «objetivos militares». En varios casos ocurridos en América se identificó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o a militares como responsables de asesinatos y amenazas, incluidas amenazas de muerte. En esos casos, las defensoras en cuestión se dedicaban por lo general a cuestiones relativas a la impunidad por presuntas violaciones cometidas por agentes estatales».²⁴

35. Continuaron los ataques contra los pueblos indígenas. Son especialmente numerosos los ataques en municipios del Cauca, como Toribío, Jambaló, Caloto, Santander de Quilichao, Corinto, Caldono, Miranda, Paéz, Morales, Coconuco, Puracé, Popayán, Suárez, Silvia, Inzá, Bolívar, Piendamó, La Vega, San Juan, Silvia y Tororó.²⁵

36. Especialmente grave es la revictimización por amenazas de muerte y los asesinatos de líderes y lideresas campesinas que vienen reclamando la restitución de sus tierras, luego de sufrir el despojo violento de sus propiedades.

37. La violencia y la impunidad en Trujillo, Valle, continúan desde hace 23 años, ahora con la presencia de los grupos paramilitares Los Machos y Los Rastrojos.²⁶

38. «Los desplazados de los Montes de María nos hemos organizado en ASOCARE, Asociación de Campe-

²⁴ Informe A/HRC/16/44 de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 16º período de sesiones 20 de diciembre de 2010.

²⁵ Programa de Derechos Humanos del CRIC. Informe de julio de 2010.

²⁶ Reunión con ASFAVIT en Trujillo, 12 de marzo de 2011.



sinos Retornados, pero nos amenazaron y nos volvieron a convertir en víctimas. Tenemos varios muertos, como el secretario NAZID JIMENEZ, asesinado el 28 de enero de 2006, y su reemplazo VÍCTOR OLIVERA, asesinado el 4 de abril; EUCLIDES CAUSADO, asesinado el 3 de marzo, y MARCIAL SALAZAR, asesinado el 23 de febrero, lo que provocó otro desplazamiento masivo de 22 familias».²⁷

39. En medio del conflicto armado la población civil continúa siendo la principal víctima. «Así es como viene funcionando el negocio de la guerra en Colombia. Los grupos armados desplazando con terror y con mentiras. Las multinacionales sirviéndose de esto y ocupando la tierra con proyectos productivos que empobrecen aún más a la gente. La población civil, que pone los muertos, es obligada a tomar partido

²⁷ Testimonio en Ovejas, Sucre, 5 de marzo de 2011.

por un grupo armado, lo que conlleva a convertirse en objetivo militar del otro bando».²⁸

40. «Que con gran indignación nos vemos obligados a denunciar ante los medios nacionales e internacionales el accionar del Ejército colombiano, que a pesar de las concertaciones hechas en la Gobernación con los Pueblos Indígenas Vallecaucanos, continúa poniendo en grave riesgo a los habitantes del Resguardo Indígena «NASA KWE'SX KIWE», ubicado en la parte alta de la vereda Las Brisas y Los Alpes del municipio de Florida. En efecto, en el día de ayer, a escasas dos horas de terminar la gran asamblea NASA, cuando NOVENTA Y SEIS (96) indígenas de las comunidades de Altamira y Granates se disponían

a regresar a sus viviendas, en el sitio conocido como Los Alpes, se inició un tiroteo entre el EJÉRCITO NACIONAL y guerrillas de las FARC, quedando los NOVENTA Y SEIS (96) indígenas en medio del fuego cruzado. A los actores en conflicto no les importó disparar por encima de las cabezas de los niños, ancianos, mujeres y demás indígenas que pasaban por el lugar. Para proteger sus vidas nuestros hermanos NASAS tuvieron que permanecer tendidos en el suelo durante dos horas, expuestos a las balas de parte y parte, bombas y demás artefactos de guerra».²⁹

41. El Gobierno colombiano niega la existencia de los grupos paramilitares, pero es notoria su presen-

²⁸ Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN. Tejido de Comunicación y de relaciones externas para la verdad y la Vida. Comunicado «El terror a gran escala». 17 de marzo de 2011.

²⁹ Comunicado del Comité Ejecutivo de la ORIVAC.

cia, influencia, creciente actividad y articulación con agentes del Estado y del narcotráfico en los poderes públicos, como el Congreso de la República, la fuerza pública, el poder judicial y el ejecutivo en varias localidades, incluidas las llamadas zonas de consolidación en las que se supone que el Estado acabó con el paramilitarismo y retomó el control del orden público. Sin embargo, «estos grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional».³⁰

42. En las zonas de Consolidación creadas por el Gobierno en marzo de 2009, que cubren 86 municipios de 11 departamentos con 200.000 kilómetros de extensión y cuatro millones de habitantes, se siguen violando los derechos humanos, a pesar de que se supone que en esas áreas el conflicto ya terminó. En esas zonas los militares —para legitimarse ante las comunidades que han sido sus víctimas— hacen la gestión de los proyectos sociales de la cooperación de los Estados Unidos y de Holanda.³¹

43. La acción coordinada de los paramilitares, el GAULA del ejército y la policía es la retención, desaparición, tortura y posterior asesinato el 28 de agosto de 2001 del profesor de la Universidad del Atlántico JORGE ADOLFO FREYTER.

44. La influencia del narcotráfico y los paramilitares en las instituciones continúa. «De los 268 congresistas electos, 13, que habían sido reelegidos, están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema. Además, se han recibido informaciones de posibles casos de «testaferrato político» entre congresistas

³⁰ Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. A/HRC/16/22, numeral 36, p. 8, febrero de 2011.

³¹ Encuentro del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de «parapolítica».³²

45. Grupos armados conocidos oficialmente como Bandas Criminales Emergentes, BACRIM, delinquen con impunidad en todos los departamentos del país y de manera más notoria en Antioquia, Cauca, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle y Sucre.³³

46. «Lo que el Gobierno llama «BACRIM» no son simples grupos mafiosos, son la expresión de unas actitudes políticas y económicas criminales».³⁴

47. «Los paramilitares Machos y Rastrojos se mueven libremente por Trujillo, Valle. El año pasado y en el presente han sido asesinadas varias personas, las pican y las botan en costales, con la complicidad de la policía local y del ejército, que los protege. Esto sigue igual que hace años. En la finca La Mina hay una base del ejército y hay un cementerio clandestino».³⁵

48. «Los paramilitares entraron a la región a cobrarle a los campesinos el paro cafetero de 1995, lo hicieron amenazando, desplazando, asesinando. Era el grupo paramilitar de RAMÓN ISAZA que montó campamentos en Fresno, Hatillo, Palocabildo y San Gerónimo. El Estado lo sabía y no hizo nada mientras asesinaban dirigentes campesinos y aspirantes opositores a alcaldías como la de San Luis. Asesinaron a más de 100 personas en poco tiempo, la familia ARREDONDO, LEONEL ARBELAEZ, los hermanos AMÉZQUITA, los her-

³² Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011.

³³ Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. V Informe sobre Narcoparamilitares en el 2010. Bogotá, 16 de marzo de 2011.

³⁴ Iván Cepeda, Diputado en la Cámara de Representantes. Intervención en el V Encuentro del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

³⁵ Testimonio en Trujillo, Vale. ASFAVIT. 12 de marzo de 2011.

manos ECHEVERRY, presidentes de juntas de acción comunal como GONZALO GARCÍA y GUILLERMO GARCÍA que era concejal, a ellos los descuartizaron, HERNANDO MORENO y muchos otros. La región del Norte del Tolima era un corredor de las guerrillas y eso se lo cobraron a la población civil. Por ahí pasaba el frente Tulio Barón y el Bloque José María Córdoba de las FARC y los Bolcheviques del Líbano del ELN. A la fecha, hay paramilitares en la región y el Estado sigue sin hacer nada».³⁶

49. El gobierno de JUAN MANUEL SANTOS afirma que las BACRIM son estructuras que se combaten en el marco de la lucha contra las drogas. Es decir, se las trata como un asunto de policía y no como un tema de seguridad nacional, como sí lo es la lucha contra las guerrillas. Esta distorsión, que fue advertida por Human Rights Watch, explicaría en parte el descuido o falta de voluntad para combatir y erradicar las estructuras políticas y económicas del paramilitarismo.

50. La presencia de los grupos paramilitares afecta a la vida de las personas, el funcionamiento de las organizaciones sociales y a las mismas instituciones públicas al eliminar de facto el estado de derecho. «En desarrollo de la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales —BACRIM—, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones, persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares».³⁷

³⁶ Entrevista con el ex alcalde de Casabianca Luis E. Rodríguez Rivera. Ibagué, 7 de marzo de 2011.

³⁷ Declaración Política del V Encuentro Nacional del MOVICE. Bogotá, 10, 11 y 12 de marzo de 2011.

51. La persistencia del accionar de los grupos paramilitares desdice el éxito de los procesos de desmovilización y los comunicados de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, MAPP/OEA. «... el destape de las falsas desmovilizaciones realizadas con la complicidad de las autoridades civiles y militares, más las declaraciones de varios ex narcoparamilitares que muestran el engaño no solo de desmovilizaciones montadas, como la del supuesto frente Cacica La Gaitana de las FARC, sino de todas las realizadas que presentaron 32.000 combatientes de las AUC y otros, cuando en realidad no eran más de 14.000. Según ha declarado «Don Berna» e Iván Duque, se reclutaron desempleados para inflar las cifras y dejaron vivas estructuras encabezadas por mandos medios para que continuaran con los negocios legales e ilegales y las relaciones con los parapolíticos en los departamentos, municipios e instituciones centrales del Estado».³⁸

52. «En El Tolima se montaron dos falsas desmovilizaciones. La del llamado Bloque Tolima de los paramilitares AUC, comandados por EDUARDO RESTREPO VICTORIA, alias «El Socio», en la cual reclutaron en Ambalema a muchos vagos y les pagaron \$400.000 pesos (€ 160 euros) para que aparecieran como combatientes desmovilizados, y la farsa de la desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC, organizada por «Olivo Saldaña», donde el Gobierno pagó a personas sin empleo para que aparecieran como guerrilleros arrepentidos».³⁹

53. «Un grupo de 50 paramilitares anda por la vereda Las Pavas de Dolores asesinando gente por Coyaima,

³⁸ Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. V Informe sobre Narcoparamilitares en el 2010. Bogotá, 16 de marzo de 2011.

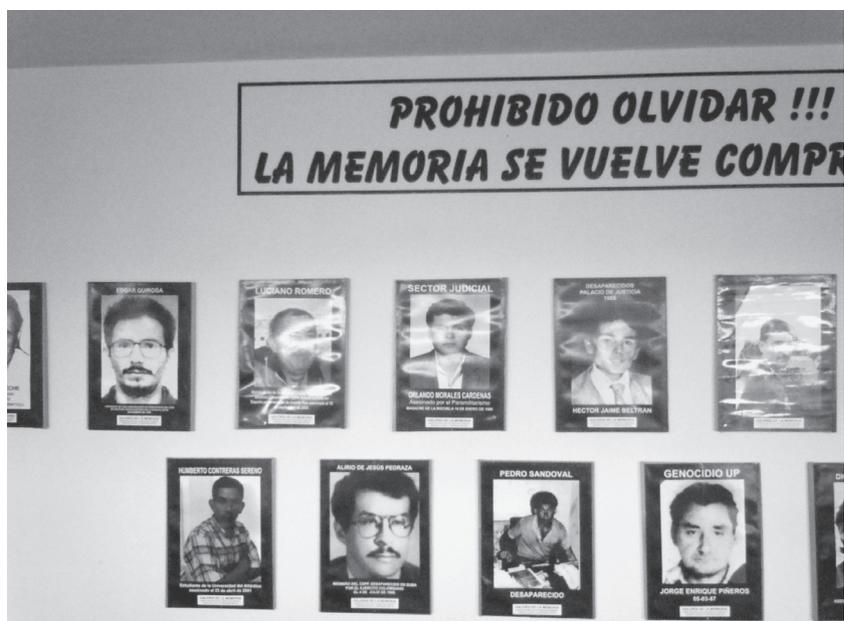
³⁹ Testimonio en Ibagué, 7 de marzo de 2011.

Natagaima y Purificación, persiguen a los que denuncian los atropellos y dicen que «no quedará ni uno vivo».⁴⁰

54. «El grupo paramilitar de La Dorada de RAMÓN ISAZA defiende los intereses de la AngloGold Ashanti y ya ha puesto cámaras ocultas en varios sitios del pueblo. Nos vigilan ilegalmente, traman algo con el jefe de seguridad de la empresa, que es un coronel expulsado del ejército por ejecutar civiles en Urabá. Los paras llegan a escondidas a Cajamarca y se quedan en las instalaciones de la empresa, que ha logrado comprar hasta a la guerrilla de las FARC, que se fue del área cuando llegó la multinacional».⁴¹

55. «San Onofre es un enorme nido paramilitar de Águilas Negras, Rastrojos y Paisas. En Trujillo operan en el casco urbano en contubernio con la fuerza pública Los Machos y Los Rastrojos. En Sabana grande anda por las calles amenazando y asesinando un grupo paramilitar de civil al mando de alias «Chiquito Cuello y Don Antonio». En Barranquilla, en el barrio 7 de Abril, donde viven muchos familiares de víctimas, hay presencia de paramilitares de los grupos Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños.⁴²

56. «Los principales dirigentes políticos del departamento del Tolima han sido vinculados a investigaciones por tener vínculos con los paramilitares: CARLOS GARCÍA ORJUELA, POMPILIO AVENDAÑO, GONZALO GARCÍA, LUIS GÓMEZ GALLO. Según INDEPAZ du-



rante el 2010 operaron en un tercio de los municipios de Colombia seis estructuras narcoparamilitares, responsables del 90% de las acciones atribuidas a estas bandas que se denominan Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), las Águilas Negras y la Oficina de Envigado. Estarían integradas por unos 7.100 miembros, cifra que se eleva al doble si se incluyen sus redes de apoyo, entre las que se cuentan instancias del poder político y de la fuerza pública.⁴³

57. Los paramilitares gozan de impunidad. «Si bien los nombres, los uniformes o tácticas de los grupos armados ilegales pueden haber cambiado, persiste la violencia en forma de asesinatos selectivos, desapariciones, intimidaciones y confinamientos forzados... La verdad sobre por qué han muerto decenas

⁴⁰ Testimonio en La Marina, Chaparral, 8 de marzo de 2011.

⁴¹ Testimonio en Anaime, 7 de marzo de 2011.

⁴² Testimonios en Barranquilla y Trujillo.

⁴³ Informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz. INDEPAZ, citado por la agencia EFE. Bogotá, 16 de marzo de 2011.

de miles de personas y quiénes fueron los responsables permanece oculta, y ni las víctimas ni sus seres queridos han recibido reparación».⁴⁴

58. En sectores populares de ciudades como Barranquilla y Soledad los paramilitares han amenazado y asesinado a centenares de vendedores ambulantes y pequeños y medianos comerciantes. Además hacen reclutamiento forzado de jóvenes, a otros los vuelven adictos a las drogas para generarles dependencia y ponerlos a delinquir.⁴⁵

59. En ciudades como Manizales son de ocurrencia diaria las muertes violentas e impunes de indigentes y habitantes de y en calle.⁴⁶

60. «En El Tolima el ejército asegura las áreas para que los paramilitares se asienten, como en El Fresno, Casabianca, Villahermosa, Palo Cabildo, Playarica, Falán, Frías, Armero, San Pedro, Lérída, Las Delicias, Líbano, Tierradentro, Zelandia, Santa Teresa, pero no solo contaron con el apoyo del ejército, también de funcionarios y gobernantes. Se financian obligando a las juntas de acción comunal a hacer asamblea, a la que es obligatorio asistir. Allí censan a la gente y hacen una lista de sus bienes. En media hora ya tienen un empadronamiento económico social, incluido el uso de las tierras y los ganados. Luego imponen la vacuna como si fuera un impuesto, pues tienen el permiso de la fuerza pública. Los paras lograron cooptar la Administración de Justicia, como en el caso del crimen por aplastamiento del cráneo de JAIME BEJARANO FORERO, cometido por paramilitares el 21 de

marzo de 2004 en Palocabildo, pero el comandante de la policía certificó que esta persona fue muerta en accidente de tránsito, con lo cual no se investigó como un homicidio».⁴⁷

61. «En El Tolima las desmovilizaciones paramilitares y guerrilleras fueron una farsa. Desde el 2006 los paramilitares llamados por el gobierno «Bandas emergentes» se llaman Nueva Generación Futuro Verde, Águilas Negras, Bloque Pijao, Nuevas Autodefensas, Buitres Chupasangre. A finales del 2010 en el municipio de Coyaima los paramilitares aparecen pidiendo dinero al resguardo indígena y repartiendo amenazas en panfletos. De esas listas ya han sido asesinadas dos personas a comienzos del 2011».⁴⁸

62. «En el sur del Tolima el ejército anda junto con los paramilitares de las Águilas Negras; y el 7 de marzo de 2011 el ejército por los lados de El Cambrín se puso distintivos de los paramilitares de las AUC para registrar todo el caserío de Peñas Blancas y Angosturas, así no se sabe quién actúa; pero uno los distingue y sabe que en nuestros corregimientos son lo mismo».⁴⁹

63. «En la Costa del Pacífico hay una re-paramilitarización con la presencia de Los Rastrojos y La Nueva Generación. Ellos trabajan en alianza con el ejército y la policía. En Argelia, Cauca, la retoma paramilitar deja más amenazas de muerte y más fosas comunes. En esa zona los paras ponen retenes a 500 metros de la policía y departe con ellos. En sus narices los paras hace 15 días decapitaron a una persona y la policía no hace nada por impedirlo».⁵⁰

⁴⁴ Intervención de Gay McDougall, Relatora de Minorías ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ginebra, Suiza, 15 de marzo de 2011.

⁴⁵ Testimonio en Barranquilla.

⁴⁶ Declaración Pública del MOVICE Capítulo Caldas, Manizales, 4 de marzo de 2011.

⁴⁷ Testimonio en Ibagué, 7 de marzo de 2011.

⁴⁸ Informe de las organizaciones sociales del Tolima a la VII Delegación Asturiana. Ibagué, 7 de marzo de 2011.

⁴⁹ Testimonio en La Marina, Chaparral, 8 de marzo de 2011.

⁵⁰ Testimonio en el V Encuentro del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

64. «El Frente 60 de las FARC mató a unos 30 paramilitares, los demás huyeron hacia Popayán, donde ahora se encuentran ejecutando un plan de «limpieza social», matando gente que aparece en los panfletos amenazados, desatando una cacería contra los líderes sociales del Cauca, como los del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente, SUTEC, PCC, ACEU, Coordinadora Estudiantil Tuto González, sindicalistas, maestros, funcionarios públicos, dicen que habrá otro «plan pistola» frente al cual hay silencio en la alcaldía municipal, en la Universidad del Cauca, solo la Defensoría del Pueblo se pronunció y eso que a diario matan gente, sobre todo en la comuna 7».⁵¹

65. Funcionarios y funcionarias del Gobierno colombiano adscritos al DAS, con dependencia directa del despacho del Presidente de la República, cometieron delitos en España, Bélgica y otros países de la Unión Europea contra defensores y defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales e instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, según informe del 2009 de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.

66. Las actividades ilegales de espionaje las realizó el Grupo Especial de Inteligencia G-3 durante los años 2004 y 2005 como parte de un plan para neutralizar, vincular a organizaciones guerrilleras y desprestigiar a defensores y defensoras de derechos humanos y a personas opositoras del gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ a cargo de GERMÁN VILLALBA, quien ya aceptó ante la Fiscalía General su responsabilidad en los delitos de seguimientos ilegales, interceptación ilegal de comunicaciones, concierto para delinquir y abuso de autoridad.

⁵¹ Testimonio en el V Encuentro del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

67. Los objetivos en España fueron la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, con sede en Barcelona, y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, con sede en Zaragoza, tres colombianos defensores de los derechos humanos y refugiados en España, la periodista española que trabaja en Colombia ALEXIA AGUILERA, el abogado español JOSÉ LUIS GALÁN y la ex diputada del Congreso español ISAURA NAVARRO.⁵²

68. La impunidad sigue cobijando a los autores de crímenes, sobre todo de sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, dirigentes campesinos, indígenas, población afrocolombiana, estudiantes y población LGBT.

69. Las altas tasas de impunidad continúan como resultado de la falta de recursos en la justicia y por la asunción de la competencia por parte de la justicia penal militar para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por las tropas del ejército nacional, a pesar de reiteradas sentencias en las que los juzgados civiles expresan que «las violaciones a los DDHH y DIH incorporados como crímenes internacionales a nivel interno rompen el nexo causal con el servicio y, por tanto, el proceso no debe ser asumido por la justicia penal militar».⁵³

70. En varias regiones del país, como en los departamentos de Sucre, Córdoba, Atlántico, Bolívar,

⁵² Al respecto fue admitida a trámite una querrela por parte de la Jueza del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, España, contra Álvaro Uribe Vélez, Jorge Aurelio Noguera y Germán Villalba Chávez.

⁵³ 8 de marzo del 2011, Sala Penal del Tribunal Superior Judicial de Popayán. Sentencia condenatoria contra miembros del pelotón Galeón Nº 7, adscritos al Batallón José Hilario López, por el asesinato del comunero indígena JOSÉ EDWIN LEGARDA VÁSQUEZ.

Magdalena y Cesar, han sido puestas al borde de la extinción las organizaciones sociales, siendo especialmente graves y sistemáticas las persecuciones contra las organizaciones campesinas, indígenas, negras, sindicales, de población desplazada y de víctimas del conflicto.

71. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo. Desde la fundación en 1986 de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, más de 2.800 sindicalistas han sido asesinados. La cifra anual de asesinatos se redujo a 39 en 2007 y se incrementó de nuevo a 51 en el 2008 y a 47 en 2009. En el 2010 fueron asesinados 51 sindicalistas. La impunidad es del 98%, pues estos asesinatos no se investigan, aunque existen pruebas de que las organizaciones paramilitares son responsables de un alto porcentaje de estos crímenes.

72. «El sindicalista y dirigente popular HENRY RAMÍREZ DAZA, quien estuvo refugiado en Asturias en el segundo semestre del 2003 acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, fue asesinado a balazos en su casa de la ciudad de Ibagué, delante de su familia, el 11 de abril

del 2010».⁵⁴ Henry fue presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas, SINTRABECOLICAS-CUT, y en el momento del asesinato era concejal por el partido Liberal en el municipio de Ambalema/Tolima, donde venía denunciando la corrupción de la Administración local. La persecución a los y las sindicalistas es notoria en el departamento del Tolima. «A los sindicalistas de la educación y la salud se les persigue por oponerse a las privatizaciones; en entidades como el Hospital Federico Lleras imperan la contratación laboral sin derechos a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado. Hay atrasos en el pago de salarios y no se paga la seguridad social a la mayoría. Se viola el derecho de huelga. Miembros del GAULA del Ejército han allanado las residencias de directivos de la CUT seccional Tolima».⁵⁵

73. «A ANTHOC seccional Tolima lo persiguen por oponerse al desmonte del sector salud. Hay despidos masivos, cierre de hospitales públicos, amenazas de



⁵⁴ Comunicado del Colectivo de Colombianos refugiados en Asturias «Luciano Romero Molina». Xixón, 30 de abril de 2010.

⁵⁵ Encuentro con organizaciones sociales en Ibagué, 7 de marzo de 2011.

muerte y presión para que los trabajadores se salgan del sindicato. Tenemos tres asesinados, dos desaparecidos, 30 amenazados de muerte, 26 desplazados forzosos y 4 detenciones arbitrarias. A la Junta Directiva de ANTHOC Tolima nos asechan en el sindicato, llaman a las casas. De 2.500 afiliados al sindicato nos quedan 850. Las organizaciones estamos sometidas al terrorismo del Estado».⁵⁶

74. La Asociación de Campesinos del Alto Ariari denunció el asesinato del afiliado al sindicato SINTRAGRIM, NELSON MURILLO TABORDA, el 9 de septiembre de 2010 en la vereda Caño Lindo, jurisdicción del municipio de El Castillo, Meta. «... un sujeto que se identificó como miembro de las autodefensas, quien le propinó varios disparos y huyó hacia un matorral».⁵⁷

75. «El 29 de agosto de 2010 unidades del Batallón 21 Vargas allanaron ilegalmente la casa de LIDERMAN MURILLO TABORDA y lo acusaron de poseer armamentos de la guerrilla, igual acusación hicieron contra FERNEY MURILLO TABORDA, quien es dirigente del sindicato SINTRAGRIM».⁵⁸

76. El uso de la violencia por parte de todos los actores armados para despojar de las tierras al campesinado y los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, se convirtió en algo habitual e impune.

77. El 18 de mayo de 2010 fue asesinado el dirigente campesino ROGELIO MARTÍNEZ, quien actuaba como representante legal de 52 familias integrantes de la Empresa Comunitaria de la finca La Alemania, ubicada en San Onofre, Sucre, entregada en 1997 por

el Estado a la población campesina para un programa de reforma agraria. Este predio fue usurpado con violencia tras el asesinato de 12 campesinos, incluido un hermano de Rogelio y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía.

78. El despojo violento de las tierras fue comandando por EDWARD COBO TELLEZ, alias «Diego Vecino», y RODRIGO MERCADO PELUFFO, alias «Cadena», comandantes del grupo paramilitar Bloque Héroe de los Montes de María, entre 1998 y el 2001. «El 30 de marzo del 2000 los paras asesinaron al representante de la comunidad y cundió el miedo. Nos fuimos todos de la tierra menos el parcelero Alacín Becerra Mejía, que se quedó resistiendo solo y lo desaparecieron. Esta gente armada juntó 670 cabezas de nuestro ganado y se lo robaron. Como fuimos desplazados, no pudimos pagarle los créditos al Banco Caja Agraria, que nos embargó y remató la finca dándosela a los empresarios y completando la tarea de despojo de los paras. Rogelio, como presidente de la comunidad, denunció todo esto, pero le vinieron más amenazas en el 2005, hasta que lo mataron el año pasado. Allí funciona la ley de «presidente puesto, presidente muerto». Van dos presidentes asesinados, pero yo lo replacé. Nos toca ser valientes o nos vuelven a poner el hierro en la espalda. Mataron a mi esposo, pero no me voy de la finca. Ya me amenazaron, pero resistiré hasta el final. La tierra no se compra ni se vende, se libera y se defiende».⁵⁹

79. Rogelio encabezaba la exigencia comunitaria al gobierno de restitución de las tierras adjudicadas por el INCORA y ocupadas por el grupo paramilitar que montó en la finca, con la aquiescencia de las au-

⁵⁶ Testimonio de una dirigente sindical de ANTHOC Tolima. Ibagué, 7 de marzo de 2011.

⁵⁷ Comunicado de SINTRAGRIM, 11 de septiembre de 2010.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Testimonio de la señora JULIA TORRES, viuda de ROGELIO MARTINEZ. Ovejas, Sucre, 5 de marzo de 2011.

toridades, un centro de torturas, asesinatos y fosas comunes. Tanto el gobierno nacional y departamental, como el Subcomité de Protección a Víctimas y Testigos, y las autoridades civiles y militares de San Onofre, conocían oficialmente desde hacía dos años las graves amenazas proferidas por los paramilitares contra Rogelio y los demás miembros de la comunidad por encabezar el retorno de los campesinos a la finca, pero no dispusieron las medidas de protección necesarias. Rogelio fue asesinado dos días antes de intervenir en la reunión de países del G24 en la que rendiría su testimonio sobre el despojo violento de tierras y los vínculos entre los paramilitares y los poderes políticos locales.⁶⁰

80. Quince personas han sido asesinadas en la finca La Europa de Ovejas, Sucre, entre 1984 y el 2010, por parte de grupos paramilitares y de la fuerza pública. En el 2008 degollaron a un campesino en la finca y el 11 de febrero de 2011 un grupo de hombres armados amedrentaron a las familias que trabajan esas tierras desde hace 50 años dentro de un programa de reforma agraria adelantado por el Estado. Les ordenaron dejar de trabajar y abandonar el predio que habría sido adquirido por el empresario JUAN GABRIEL VELEZ URIBE. Ante la pasividad de las autoridades las 80 familias campesinas, que ya habían sido desplazadas hace quince años, temen un nuevo desplazamiento forzado. «Esto de amenazarnos y desplazarnos va como por etapas, antes fueron las AUC y la Infantería de Marina, ahora son los Paisas que nos amenazan con palabras y mostrando sus armas, nos destruyen las siembras y las cercas, andan con perros, parecen un enjambre que da miedo, pues les conocemos la intención, parecen paracos pero nosotros no

somos violentos, ni les peleamos tierras, ellos son los invasores, nosotros no, nosotros estamos en nuestras propiedades».⁶¹

81. «En abril del 2010 llegaron unos hombres a Caño Cholé, dijeron que eran paramilitares Águilas Negras. Nos sacaron de las casas, nos encañonaron, amarraron a los hombres y los tiraron al piso boca abajo, les quitaron los cuchillos de trabajar y los sacaron amarrados para la orilla del caño a la vista de toda la gente de la comunidad. «Traemos orden de matar al Profe y al presidente del comité campesino», como no estaban dijeron que regresarían a matarlos. Se fueron y nosotros viajamos hasta San Benito a denunciar este atropello, pero el alcalde no hizo nada, ni el personero municipal que es primo de los De La Ossa. Fuimos a denunciar ante el Inspector de Policía pero dijo que él no podía hacer nada, «no ven que el que tiene más saliva traga más harina», nos dijo. Los tipos nos quemaron todo, las casas, la ropa, todo. Los paracos volvieron y después de las amenazas de los RODRÍGUEZ y los DE LA OSSA, el 21 de mayo del 2010 mataron a BETY LAMBRAÑO y a su hijo JOSÉ FRANCISCO VIVES LAMBRAÑO. Los torturaron, les hicieron de todo, luego los degollaron y los picaron y tiraron los pedazos al río. Ahí nos fuimos todas desplazadas, las 23 familias, pero Acción Social de la Presidencia no nos recibió la denuncia diciendo que en Colombia ya no hay paramilitares. Hay nuevas amenazas y los que mandan en el pueblo de la Villa de San Benito son los que mandaron a matar a estas dos personas, andan por el pueblo como si no debieran nada».⁶²

82. La casa de DELFÍN USECHE PEÑA, en el corregimiento de La Marina, municipio de Chaparral, fue

⁶⁰ Testimonio en la finca La Europa, municipio de Ovejas, Sucre, 5 de marzo de 2011.

⁶¹ *Ibídem.*

⁶² *Ibídem.*

allanada ilegalmente por miembros del ejército nacional el 11 de septiembre del 2010. La tropa desembarcó en seis helicópteros y sometieron a interrogatorios a tres adultos y a cinco menores de edad.⁶³

83. «El 10 de junio de 2007 en la madrugada dos soldados del Batallón Colombia querían entrar a la fuerza en una actividad del colegio y no se les permitió por mal comportamiento, entonces levantaron la fiesta a tiros y mataron a tres personas. Caminaron 3 kilómetros y de una casa sacaron y mataron a 4 personas más, un niño se salvó porque se hizo el muerto. El ejército no hizo nada para detenerlos hasta las 3 de la tarde, llevó a los soldados, no a los heridos. Si yo no tuviera una familia estaría empuñando las armas porque no hay otro camino, no respetan la vida de los campesinos. El colegio quedó abandonado, ahora lo ocupa el ejército».⁶⁴

84. «Hace doce años el ejército asesinó a mi hijo ALBENIS PINILLA, era conductor y la tropa lo mató. Todo quedó impune. Después me tirotearon otros hijos, EDISON y MIGUEL ALFONSO».⁶⁵

85. «Yo lucho con la justicia para que entreguen el cadáver de mi hermano FERNANDO PAEZ QUIZA, de 28 años, miembro de las FARC que murió el 15 de febrero de 2011, pero no me lo entregan por no haber sido identificado, pero ya lo presentaron la prensa con el nombre. Él está enterrado como NN, el caso lo lleva la justicia penal militar, pero el fiscal militar me dice que para qué quiero el cuerpo, que si es para venderlo o para qué. Creemos que es porque fue torturado y quieren desaparecer pruebas».⁶⁶

⁶³ Testimonio en La Marina, Chaparral, 8 de marzo de 2011.

⁶⁴ Testimonio en Algeciras, 9 de marzo de 2011.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ibidem*.

86. «En la Procuraduría recibo muchas quejas contra el ejército, ninguna contra la guerrilla. Hay campos minados que el ejército exigió que se denunciaran. Me preocupa la estigmatización contra la población de Algeciras. Hace dos días hubo un hostigamiento al cuartel de policía, junto a la iglesia, sin heridos ni muertos. Se han reportado 18 hurtos, pero ese no parece ser el modus-operandi de la guerrilla y coinciden con la llegada de más militares. En alguna ocasión el ejército supo de las quejas tramitadas y amenazaron a la gente que denunció, por lo que este despacho decidió remitir todas las quejas a la procuraduría general en Bogotá, donde han sido archivadas».⁶⁷

87. La inversión social que debiera resolver los problemas de exclusión y pobreza extrema están limitados por el ingente gasto militar. «Hay 7.000 efectivos militares en el municipio, uno por cada 3 habitantes y existe preocupación por este nivel de tropa. La experiencia indica que aumentan las anomalías en el área rural, como ocurrió con la «operación Aurora», en la cual se dieron la capturas masivas de unas 1.000 personas señaladas por un encapuchado, pero salieron absueltas a los 6 y 18 meses».⁶⁸

88. El ejército colombiano ha puesto en marcha campañas y cursos para la tropa como las llamadas «Fe en la causa» y «Comportamiento Ético Superior», que, basadas en la disciplina, tratan de evitar conductas fuera de la ley en las tropas.⁶⁹

⁶⁷ Reunión con MARLY YANETH LOSADA ROMERO, procuradora municipal de Algeciras. Huila, 9 de mayo de 2011.

⁶⁸ Reunión con MARLY YANETH LOSADA ROMERO, procuradora municipal de Algeciras. Huila, 9 de mayo de 2011.

⁶⁹ Reunión con el Brigadier General Emilio Torres Ariza, Jefe de Derechos Humanos y DIH del ejército nacional. Bogotá, 11 de marzo de 2011.

89. Para el ejército también es muy costoso el conflicto armado. «En el 2009 tuvimos 372 muertos y 1.033 heridos; en el 2010 fueron 318 militares muertos y 924 heridos».⁷⁰

90. Ante la falta de oportunidades y en medio de una cultura donde están presentes las armas, muchos jóvenes de sectores excluidos solo tienen como perspectiva vital la vinculación a alguna de las partes del conflicto armado, por lo que resulta pernicioso la figura del servicio militar obligatorio.

1. Ejecuciones extrajudiciales y masacres

«Yo tiemblo cuando me encuentro con los militares, pero no les bajo la cabeza porque ellos son culpables, incluido el Presidente JUAN MANUEL SANTOS, que era el ministro de Defensa cuando ellos cometieron tantos crímenes». Testimonio de un familiar de víctima de ejecución extrajudicial. Ibagué, 7 de marzo de 2011.

91. Las ejecuciones extrajudiciales son una práctica denunciada como antigua en la fuerza pública, pero ha sido en los últimos años cuando la sociedad ha reaccionado y se ha conocido parcialmente la dimensión de estos delitos que, por su carácter sistemático y masivo, constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública.

92. «La oficina en Colombia estima que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército. La gran mayoría de casos ocurrió entre los

años 2004 y 2008»,⁷¹ siendo Ministro de Defensa el actual Presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, responsable por lo tanto del mando y las acciones de las tropas y de la seguridad de la ciudadanía.

93. «Ha habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegadas, o “manzanas podridas”».⁷²

94. Las ejecuciones extrajudiciales tienen entre sus causas: la presión al ejército por mostrar resultados en el combate a las guerrillas, la directriz presidencial autorizando recompensas por bajas de guerrilleros (dinero, vacaciones, cursos, ascensos) y la impunidad.

95. «La falta de atribución de la responsabilidad penal ha sido un factor clave para que sigan produciéndose casos de falsos positivos. La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%. Simplemente, los soldados sabían que podían cometer tales actos y salir impunes».⁷³

96. «Mi hijo Douglas Tavera Díaz, quien sufría retraso mental, fue asesinado por tropas del batallón La Popa, del Ejército Nacional, al mando del Mayor VARGAS RIVAS el 28 de marzo de 2006 en San Juan del César, y presentado como «guerrillero del Frente 54 de las FARC dado de baja en combate». Siete militares implicados aceptaron los cargos y se acogieron a sentencia anticipada, pero a los otros 12 les dejaron vencer los términos para la audiencia y pueden quedar

⁷⁰ *Ibidem.*

⁷¹ Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011.

⁷² Informe A/HRC/14/24 del Relator Especial Philip Alston sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 31 de marzo de 2010.

⁷³ *Ibidem.*

en libertad. Sé que me van a matar por exigir justicia, pues me buscan, me hostigan en la casa, me llaman para amenazarme. Por miedo muchos familiares de inocentes ejecutados no denuncian; es que se siente mucha rabia, impotencia y sobre todo miedo».⁷⁴

97. «Hay una ruta que siguen en estos casos los militares: primero escogen la víctima de bajos recursos, pues saben que los familiares de esas personas no tienen plata para buscarlas; luego planifican el viaje y la desaparición forzada. Ahí comienza la angustia de las familias. Luego los matan en sitios alejados y les desaparecen el cuerpo y los documentos de identidad; a algunos también les desaparecen las huellas digitales en complicidad con medicina legal, pues con la identidad sí podrían ubicar a las familias, pero se trata de desaparecerlos del todo. Luego los “legalizan” ante los mandos militares y a veces ante la prensa como guerrilleros muertos en combate, y los entierran como NN. Ahí ya quedan perdidos. A algunas familias que han descubierto la patraña los militares les ofrecen dinero para que no los denuncien, pero a la mayoría los amenazan de muerte. En AFUSODO hay 12 familiares de ejecutados amenazados de muerte. Si se logra que haya investigación por el crimen, la asume la Justicia Penal Militar, y entre ellos no se condenan. Hay que luchar mucho y exponerse para encontrar los cuerpos y para que investigue la justicia ordinaria y no la de los militares y a veces se dejan vencer los términos para que los militares queden en libertad, riéndose de uno y amenazando a los familiares».⁷⁵

98. La persecución a los campesinos y campesinas de la finca La Europa incluye ejecuciones extrajudiciales. «En 1998 fue ejecutado por la Policía Nacional en

⁷⁴ Testimonio en Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

⁷⁵ Testimonio de un familiar de persona víctima de ejecución extrajudicial. Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

el corregimiento La Haya de San Juan Nepomuceno el campesino JOSÉ DEL CARMEN PÉREZ CHAMORRO, quien fue presentado como guerrillero dado de baja en combate. Su hermana RUBY MARÍA PÉREZ CHAMORRO, quien había denunciado esta ejecución, fue sacada de su casa en la finca Villa Colombia de Ovejas y se encuentra desaparecida desde el 2004, pero este último caso no lo denunciamos por miedo a que se repitiera la historia».⁷⁶

99. «A CARLOS ARTURO GUAÑAS lo ejecutó el ejército por el Cocal, cerca de Río Manso, había bajado a comprar la remesa, pero como no regresó a la casa. Su esposa lo buscó y encontró su caballo suelto cerca de una base militar, preguntó por él y un soldado le dijo “sí, ése era guerrillero y lo dimos de baja ayer”».⁷⁷

100. «En Altamira se creó un grupo paramilitar para matar campesinos. El ejército se retiraba para que pudieran asesinar, o les hacía el cordón de seguridad para protegerlos. A un campesino lo sacaron de su casa a las 6 de la mañana y lo ametrallaron. La prensa lo mostró como muerto en combate, pero una mujer es testigo de cómo la tropa le ponía uniforme camuflado al muerto».⁷⁸

101. «A ELMER ECHEVERRI lo ejecutaron el 14 de febrero de 2008. Había salido de prisión por hurto agravado. La prensa lo mostró junto a otros muertos como “5 muertos, el último reducto de la Tulio Varón”. Dijeron que eran extorsionistas que desobedecieron la orden ‘alto’, pero es falso. La investigación la lleva la justicia penal militar, pero los familiares no tenemos cómo pagar abogados».⁷⁹

⁷⁶ Testimonio en la finca La Europa. Ovejas, Sucre, 5 de marzo de 2011.

⁷⁷ Testimonio en Ibagué, 7 de marzo de 2011.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ibidem*.



102. En el departamento del Tolima hay documentados 31 casos de ejecuciones extrajudiciales entre el 2006 y el 2010, como la de DEMER VERJÁ JEREZ, asesinado el 5 de mayo de 2008 en El Limón, Chaparral; TIBERIO GARCÍA CUÉLLAR, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Aguas Claras del corregimiento de La Marina, Chaparral, asesinado el 28 de mayo de 2006; CAMILO AVILEZ y JESÚS MARÍA RIAÑO el 19 de julio de 2007 en La Marina; CARLOS VARGAS SEDANO, asesinado en Rovira el 30 de mayo de 2008; LUIS GONZAGA CARDOZO, asesinado en La Islandia, Rovira, el 7 de agosto de 2008; MANUEL CUÉLLAR MAJE el 18 de diciembre de 2008. Ante esto las comunidades se movilizaron a comienzos de agosto y logró con las autoridades un acuerdo de no repetición, pero a los pocos días, el 23 de agosto de 2007, el ejército nacional lo sacó de su casa, torturó y asesinó a RUBÉN DARÍO LUNA TRIANA, a quien presentó como guerrillero dado de baja en combate». ⁸⁰

⁸⁰ Informe de las organizaciones sociales del Sur del Tolima a la VII Delegación Asturiana. La Marina, Chaparral, 8 de marzo de 2011.

103. «El temor de las comunidades campesinas a nuevas ejecuciones se basa en estos antecedentes y al reforzamiento en el 2010 hasta completar 12.000 soldados en el sur del Tolima con la Sexta Brigada y las Brigadas Móviles 8, 20 y 26, el batallón de Alta Montaña General Santos Gutiérrez Prieto y el Batallón Energético y Vial n° 6. Estas tropas realizan bombardeos y ametrallamientos cerca de centros poblados». ⁸¹

104. «A ELDER VALDERRAMA lo sacaron de su casa en la vereda El Silencio a las 6 de la mañana. A los diez minutos sonaron 12 disparos. Yo salí con las niñas gritando que no lo mataran, que era un civil, pero no nos dejaron ir tras ellos, lo llevaban caminando con las manos en la nuca. «Su esposo está muerto», dijo uno que lo mataron a las 8 de la mañana. Estaba con tiros en la columna, le partieron los brazos y la mandíbula, lo entregaron el fin de semana y lo pasaron como guerrillero. ¿Qué espera el Estado de los huérfanos que dejó?» ⁸²

105. «El 28 de marzo de 2004 apresaron a varios campesinos inocentes. El 30 de mayo el ejército asesinó a mi hijo, que cuidaba una finca. El crimen está impune y los niños, que son mis nietos, vieron matar a su padre y viven con rabia, ¿es justa o no? El ejército llega al lado de la escuela pero no se les puede decir nada porque tienen las armas». ⁸³

106. «A mi esposo EDGAR JOSÉ MOLINA, que era de la Unión Patriótica, lo mató el ejército en un retén

106. «A mi esposo EDGAR JOSÉ MOLINA, que era de la Unión Patriótica, lo mató el ejército en un retén

⁸¹ *Ibidem.*

⁸² Testimonio en Algeciras, 9 de marzo de 2011.

⁸³ *Ibidem.*

que montaron de repente a cinco minutos de Algeciras el 28 de febrero de 2008. Dos soldados y un mayor dicen que lo mataron por no detenerse con la moto en el retén, pero otro militar dijo que paró y sacó una pistola y les tocó matarlo. Se comprobó que mienten. Él fue torturado, golpeado en las uñas, mandíbula, testículos, brazos, piernas y pies partidos. Lo dejaron irreconocible, por eso no nos lo dejaban ver. El comando operativo nº 5 ha ido como cuatro veces a la casa a preguntar que si era guerrillero o miliciano. Ahora la tropa permanece metida en el patio de mi casa y acosan a mi hija, que es menor de edad».⁸⁴

107. «El 11 de febrero de 2011 al mediodía desconocidos irrumpieron en la vereda «Dios Peña», municipio de San Miguel, Putumayo, ribera del río San Miguel. Allí degollaron a machetazos a LUZ ROA ALFONSO, de 59 años, LUZ MERY ROA ROA, de 35 años, y Vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, y a la menor SORITH JULIET ALFONSO ROA, de 5 años, a quien además de degollarla le cortaron las manos. También asesinaron con arma de fuego a dos trabajadores de la finca. Todo esto ocurrió muy cerca de los efectivos de la Brigada 27 de Selva, el Grupo Mecanizado José María Melo y la Fuerza Naval del Sur».⁸⁵

2. Amenazas

«Aquí amenazan para ahorrarse las balas; cuando quieren matar a alguien lo buscan y lo sacan de debajo de las piedras». Estudiante de la Universidad de Sucre. Sincelejo, 5 de marzo de 2011.

⁸⁴ Ibídem.

⁸⁵ Comunicado de la AUDIENCIA CIUDADANA POR LA VERDAD. Puerto Asís, 12 de febrero de 2011.

108. Ha subido el número de personas amenazadas de muerte, pero las denuncias por esta violación de los derechos humanos quedan en la impunidad, pues no se investigan, a pesar de que las víctimas aportan a las autoridades datos y pistas de los presuntos responsables. Hay la sensación generalizada de desamparo ante el peligro de muerte violenta y programada.

109. «La organización estadounidense WOLA y otras 80 ONG en Derechos Humanos denunciaron hoy amenazas de muerte al parecer realizadas por las Águilas Negras, herederos de los antiguos paramilitares. Según WOLA, el viernes de la semana pasada recibieron un correo electrónico en el que les decía: “Por ser defensores de los DDHH no crean que se pueden esconder detrás de las Fiscalías y otras instituciones. Las estamos observando y se pueden considerar muertas”. En el correo electrónico se acusa a estas ONG de tener nexos con las FARC y las declaran “objetivo militar”. En la lista de amenazados figuran Codhes, Indepaz, Afrodes, ACIN y el Colectivo de Abogados José Alvear».⁸⁶

110. También han sido amenazados de muerte algunos dirigentes políticos de la oposición y personas dedicadas a buscar una solución política al conflicto armado, como la ex senadora PIEDAD CÓRDOBA, quien denunció la persecución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Lo que se hizo fue tipificar todo lo que ha venido dándose, la campaña de desprestigio, las declaraciones del presidente Uribe en mi contra, que se mostraron en la audiencia. La muerte moral y psicológica a la que he sido sometida durante todo este tiempo».⁸⁷

⁸⁶ «El Tiempo». Bogotá, 17 de mayo de 2010.

⁸⁷ «El Tiempo», 26 de marzo de 2011.

111. «HÉCTOR IVÁN SANMARTÍN RIVERA, capataz del empresario que nos invade la finca, nos amenaza y no le pasa nada; hace un mes la policía le decomisó un arma ilegal y el tipo salió fotografiado en la prensa⁸⁸ por porte ilegal, pero volvió a las tierras con más gente armada y vestidos de camuflado. Dijo que si le quitaban una sacaba dos armas más, que si seguíamos metiendo ganado en la tierra nos levantaba a candela y ahora nos amenaza diciendo que va a traer al ejército».⁸⁹

112. Son habituales las amenazas de muerte contra defensores y defensoras del medio ambiente por defender los territorios y oponerse a los planes de explotación de recursos naturales por parte de empresas transnacionales, o por denunciar la corrupción y los vínculos entre políticos, paramilitares y redes del narcotráfico, también por defender el carácter de servicio público de derechos como la educación o la salud en vías de privatización. «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora la persistencia de la situación de amenazas, hostigamiento y asesinatos de familiares de las defensoras de derechos humanos María del Socorro Mosquera Londoño y Mery Naranjo Jiménez. Ambas son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde 2004 y de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2006, sin que el Estado haya adoptado medidas efectivas de protección. Este hecho se enmarca en el patrón de persecución y desprotección en que se encuentran las defensoras de derechos humanos en la Comuna XIII de Medellín, Colombia».⁹⁰

⁸⁸ <http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/caen-dos-personas-por-porte-ilegal-de-armas-11745>.

⁸⁹ *Ibídem*.

⁹⁰ Comunicado de Prensa de la CIDH «CIDH CONDENA PERSISTENCIA DE AMENAZAS Y ASESINATOS CONTRA DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y SUS FAMILIAS EN COLOMBIA». Washington, D.C., 7 de marzo de 2011.

113. Vigilantes armados de la empresa ilegal⁹¹ «Seguridad 911», propiedad de la empresaria ENILCE GÓMEZ, vienen amenazando de muerte a los y las dirigentes de la comunidad campesina ocupante de la finca El Tamarindo, ubicada entre Galapa y Barranquilla, Atlántico. Las amenazas han sido denunciadas ante las autoridades competentes y afectan a 187 familias (cerca de 500 personas) desplazadas en la década de los noventa por los paramilitares de Sucre y Bolívar.⁹²

114. El grupo ilegal de vigilancia envenenó los estanques piscícolas de la comunidad y en varias ocasiones ha actuado junto con el ESMAD de la Policía Nacional destruyendo los ranchos usados como viviendas por la población desplazada. En horas de la noche actúan junto con las patrullas del Ejército Nacional.⁹³

115. HENRY BLANCO OROZCO, dirigente de la comunidad desplazada asentada en la finca El Tamarindo, viene recibiendo amenazas de muerte por parte de los vigilantes de la empresa «Seguridad 911», quienes el 13 de diciembre del 2010, disfrazados de fuerza pública, intentaron asesinarlo.⁹⁴

116. El mismo grupo de vigilancia privada amenazó de muerte a la funcionaria de la Defensoría del Pueblo, ANA MARÍA GÓMEZ y a MARÍA CEDEÑO, dirigente de la FCSPP. También han sido amenazados ALEIDA PINEDA, ALVARO SÁNCHEZ y ANDRÉS ORTEGA, integrantes de la comunidad.

⁹¹ La Superintendencia Delegada para el Control de la Vigilancia Privada, mediante comunicación n° 019488, de 2010, informó que la empresa Seguridad 911 no posee licencia de funcionamiento y en consecuencia no puede portar armas.

⁹² Testimonios de los desplazados asentados en la finca El Tamarindo.

⁹³ *Ibídem*.

⁹⁴ *Ibídem*.

117. La campesina EUNICE ROBLES fue amenazada de muerte por la inspectora de policía PERLY ROA, quien le expresó «te tengo en la mira».⁹⁵

118. Detrás de los desalojos ilegales y de las amenazas de muerte en El Tamarindo hay intereses económicos ligados al proyecto de la zona franca, de modo especial la familia Char, empresarios como Julio Muvdi, y empresas ligadas al narcotráfico, como Inversiones El Prado, y Finanzas del Norte, que aparecen en la llamada «Lista Clinton».⁹⁶

119. La familia del Sr. NATALIO ESCOBAR RAMÍREZ ha sido amenazada de muerte. «Natalio fue asesinado el 14 de junio del 2004 por el grupo paramilitar comandado por alias Omega, cumpliendo una orden de MATÍAS OLIVEROS DEL VILLAR, alcalde de El Banco, Magdalena, para evitar pagar un dinero que le debía a la familia. Los paramilitares amenazaron de muerte a toda la familia, exigieron que vendiéramos tierras y ganados, y nos dieron veinte días de plazo para irnos del pueblo. Eso hicimos, nos desplazamos y nos hemos mudado varias veces de casa y de ciudad, pero siempre nos ubican. Del crimen de Natalio había un testigo, pero lo asesinaron el 1 de julio de 2010, y también asesinaron hace una semana en Bogotá a nuestro abogado, el Dr. JULIO PISCIOTTI VAN STRAHLEN. Tenemos miedo, pues hay informaciones de que nos van a asesinar a todos. Somos 4 hijos, la viuda y dos nietos. El paramilitar alias «El Flaco» nos iba a matar hace poco, pero lo capturaron. Somos testigos protegidos por la Ley de Justicia y Paz de los crímenes cometidos por el jefe paramilitar Jorge 40, y tenemos un policía como escolta, pero la mano de los paramilitares es

⁹⁵ *Ibidem.*

⁹⁶ Comunicado del 5 de agosto de 2010 suscrito por el MOVICE, Capítulo Atlántico y la Coordinación Colombia-Europa. EUA.

muy larga y nos van a matar a todos, además el alcalde sigue en libertad. Pedimos por Dios que nos saquen del país».⁹⁷

120. «Varios líderes comunitarios de barrios ubicados a la orilla del río Magdalena y dirigentes de la Asociación contra la contaminación del carbón han sido amenazados de muerte por grupos paramilitares al servicio de la empresa Michellmar, cuyas operaciones de embarque de carbón han contaminado el río y las calles de los barrios aledaños al puerto».⁹⁸

121. «En la Universidad del Atlántico proliferan las amenazas de muerte contra profesores y estudiantes en medio de dispositivos de seguridad que supuestamente deben garantizar la seguridad dentro del alma mater. Han sido amenazados de muerte los jóvenes integrantes de la Coordinadora Estudiantil, los estudiantes CRISTÓBAL COLÓN MARÍN, HENRY MOLINA (víctima de un atentado el 14 de enero de 2011), FABIÁN ESCOBAR DURÁN y GARY MARTÍNEZ, quien estuvo acogido por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia en el 2010. Además recibió amenazas de muerte el profesor JOSÉ GABRIEL COLEY, representante ante el Consejo Superior de la Universidad, y la estudiante VICTORIA CAÑAS GONZÁLEZ, dirigente de la FEU, ambos amenazados por oponerse a la reelección de la rectora ANA SOFÍA MESA DE CUERVO. El antecedente que preocupa es que en esta Universidad han sido asesinados con impunidad más de veinte personas entre profesores, estudiantes y trabajadores en los últimos años».⁹⁹

⁹⁷ Entrevista con familiares de NATALIO ESCOBAR RAMÍREZ. Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

⁹⁸ Entrevista con MOVICE Atlántico. Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

⁹⁹ Testimonio de un dirigente de la ACEU. Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

122. En la Universidad de Sucre hay amenazas de muerte contra alumnado afiliado a ACEU y contra trabajadores y trabajadoras afiliadas en ASPU por denunciar la corrupción. «La Universidad administrativamente está bajo el control de los paramilitares. Las amenazas arrecian cada vez que hay elecciones al Consejo Superior. Varios dirigentes de los estudiantes han tenido que desplazarse, como TATIANA NIEBLES y PAOLA ROMERO, además amenazaron a PEDRO GENEY por defender los derechos de la comunidad LGBT, y a EDUARDO CASTRO y MAIRA SIERRA, quien ha sido detenida injustamente dos veces».¹⁰⁰

123. Desde hace dos años un grupo paramilitar opera en la Universidad del Tolima. «Las organizaciones estudiantiles han sido declaradas objetivo militar por las Águilas Negras, pero además dentro de la Universidad hay represión y detenciones arbitrarias».¹⁰¹

124. «El 1º de agosto de 2009 fue asesinado en Barranquilla MAURY DE ÁVILA, integrante de la Fundación Infancia Feliz. El crimen continúa impune. La Directora de la Fundación, ROSARIO MONTOYA, sufrió un intento de desaparición forzada el 2 de julio de 2010. Desde que se inició la entrega de restos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y con las Audiencias de la Ley de Justicia y Paz se incrementaron las amenazas contra otros miembros de la organización. Algunas llamadas amenazantes se están haciendo desde teléfonos del GAULA del Ejército Nacional. Nuestra organización hace acompañamiento a víctimas de violaciones de los derechos humanos en la región Caribe. El esquema de seguridad que nos asignaron es insuficiente».¹⁰²

¹⁰⁰ Testimonio de dirigente estudiantil. Sincelejo, Sucre, 5 de marzo de 2011.

¹⁰¹ Testimonio de dirigente estudiantil. Ibagué, 7 de marzo de 2011.

¹⁰² Testimonio de integrantes de Infancia Feliz en Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

125. El 25 de febrero de 2011 la hija de la Presidenta del Comité de Derechos Humanos del Bajo Ariari, DORIS RIVERA RÍOS, recibió una llamada amenazante en la que le dijeron «me encuentro en frente de su casa en Compartir, perra hijaputa, a usted le vamos hacer lo mismo que a su mamá, que se nos escapó por poquito, pero con usted no pasará lo mismo». Doris Rivera había sido amenazada de muerte, por lo que fue acogida desde agosto del 2010 en el Programa Temporal de Protección de Defensores de Derechos Humanos auspiciado por el Gobierno de Catalunya. Las amenazas contra Doris y su hija provienen de los grupos paramilitares que operan libremente en zonas bajo estricto control de la Brigada Móvil nº 12 del Ejército Nacional.

126. El 8 de marzo de 2011 el grupo paramilitar Águilas Negras amenazó de muerte a personas integrantes de las siguientes organizaciones: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Risaralda, Nodo de Derechos Humanos del Eje Cafetero, Antioquia y Choco, adscrito a la Federación Sindical FECODE, Consejo Departamental de Paz, Plataformas y Ongs de Derechos Humanos nacionales, y a líderes y lideresas de las organizaciones de población desplazada. Afirman que «toda esta escoria de auxiliadores de la guerrilla muy pronto será eliminada» y declaran como objetivo militar a MARÍA EUGENIA LONDOÑO, VICENTE VILLADA, JUAN CARLOS VALENCIA, GERARDO SANTIBÁÑEZ, DIEGO OSORIO M., GUILLERMO CASTAÑO, JAIRO QUINTERO, GUSTAVO MARÍN, HERNANDO AGUIRRE y CARLOS VALENCIA.¹⁰³

127. El 15 de marzo de 2011 se profieren nuevas amenazas de muerte contra dirigentes de la federación

¹⁰³ Comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato de Educadores de Risaralda. Manizales, 8 de marzo de 2011.

campesina de la CUT. «Aunque el Gobierno se niega a dar protección a los miembros de FENSUAGRO, las amenazas continúan por las BACRIM. La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria —FENSUAGRO-CUT— denuncia ante la Comunidad nacional e internacional la amenaza hecha por las BANDAS EMERGENTES ÁGUILAS NEGRAS —BANCRIM— a nuestra organización y a dirigentes filiales de FENSUAGRO, como a dirigentes sociales y agrarios de los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo, como son: ÁLEX GÓMEZ, OCTAVIO COLLAZOS, MARTA BAQUIRO, ROSMERY LONDOÑO, HÉCTOR VALENCIA, LIBARDO PÉREZ, LUZ MILA BELTRÁN, CARLOS SILVA, WILSON PÉREZ, YESID DONCEL, YOLANDA FAJARDO, MAIDE SALCEDO, JORGE LONDOÑO, FERNACO JOJOA, FERNANDO MECAYA y ANTONIO VELEN».¹⁰⁴

128. INGRID VERGARA, secretaria técnica del MOVICE Capítulo Sucre, beneficiaria de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha recibido 26 amenazas de muerte por documentar y denunciar el despojo violento de tierras y el desarrollo de agronegocios que desconocen los derechos de las víctimas en los Montes de María. Es evidente la falta de voluntad del Gobierno para evitar que la sigan intimidando y persiguiendo. «Me dicen que no me meta con los asuntos de tierras y amenazaron a mi hija CENDY TORRES, de 15 años, para presionarme y para cobrarle el que promueve los derechos humanos entre los estudiantes de Bachillerato. En octubre de 2010 me salvé de un atentado en la Plaza Majagual porque los asesinos pensaron que tenía dos escoltas y solo veían a uno. El 18 de noviembre de 2010 me llamaron desde una cabina en Sincelejo, de propiedad de un paramilitar desmovilizado. Me dijeron «quieta

¹⁰⁴ Comunicado del Comité Ejecutivo de FENSUAGRO, Secretaría de Derechos Humanos.

con lo de las tierras, no te metas en eso». El 1º de diciembre de 2010 dos hombres armados entraron en mi casa, grabaron y golpearon a Cendy, le decían que no los mirara a la cara, buscaron por toda la casa documentos, se llevaron el disco duro del computador. Tengo un esquema duro de seguridad, pero me siento vulnerable».

129. Las amenazas contra los abogados y abogadas de las víctimas son frecuentes. «Al abogado ADI MELÉNDEZ, representante de las víctimas del MOVICE Capítulo Sucre y de los campesinos de la finca La Europa, de El Guamo, y de la familia Lambraño, asesinada en Caño Cholé, lo amenazó de muerte su propia escolta que era un policía, por eso renunció al esquema de seguridad y se mueve sin protección defendiendo víctimas humildes».¹⁰⁵

130. «La tarea de defender derechos humanos y recoger datos de violaciones se ha paralizado en el municipio de Rovira por temor a las presiones de la gente armada; lo estamos retomando haciendo algunos talleres de derechos humanos bajo amenazas».¹⁰⁶

131. JOSÉ MANUEL GARCÍA, gerente del hospital Santa Lucía, del municipio de Roncesvalles, viene siendo amenazado y extorsionado por alguien que dice ser alias «Wilmer», del Frente 50 de las FARC, quien se desmovilizó el año 2009.¹⁰⁷

132. Periodistas que han denunciado las ejecuciones extrajudiciales han sido amenazados de muerte. «Soy LUIS REINOSO, he denunciado en mi periódico las ejecuciones extrajudiciales y por eso he sido golpeado y tres veces amenazado de muerte. Fui desplazado por

¹⁰⁵ Testimonio en Sincelejo, Sucre, 5 de marzo de 2011.

¹⁰⁶ Testimonio en Ibagué, 7 de marzo de 2011.

¹⁰⁷ Informe de las organizaciones sociales del Tolima a la VII Delegación Asturiana. Ibagué, 7 de marzo de 2011.

fuerzas del Estado, que pretenden que Algeciras solo salga en las noticias por lo que hace la guerrilla»¹⁰⁸. «También por estar en medio del conflicto armado se me ha censurado participar en asambleas comunales en algunas veredas».

133. Una vecina denuncia que el Presidente de la Junta Comunal de Quebrado del Sur presiona a la vecindad para evitar que se denuncien las amenazas recibidas por grupos guerrilleros que operan en la zona.

134. «Están llegando amenazas de los paramilitares contra la asociación afrocolombiana «Jóvenes Unidos por el Bienestar del Calima» y contra todas las comunidades, pues dicen «toda organización se acaba o se mueren».¹⁰⁹

135. El defensor de derechos humanos LUIS MORALES, quien estuvo acogido en el 2010 por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, fue amenazado en Medellín de nuevo por el grupo paramilitar Los Rastrojos.¹¹⁰

136. «En la Universidad se ha amenazado a cerca de 49 personas desde 2007, entre los cuales se encuentran estudiantes, trabajadores y miembros del sindicato. Mal contadas se han efectuado cuatro amenazas por parte de grupos paramilitares: dos en 2007, otra en 2009 por parte de un grupo identificado como Bloque Nueva Generación de las Águilas Negras y ésta de 2011 de las Autodefensas Gaitanistas», informó Ávila. «Todas estas intimidaciones se han puesto en conocimiento de la Fiscalía y otras autoridades competentes, pero ninguna denuncia ha tenido respuesta o avance alguno. Lo que no queremos es que estas investigaciones

se vayan a archivar por inoperancia de las autoridades o por vencimiento de términos porque se han hecho daños que hay que reparar, entre esos la campaña de estigmatización a la que hemos sido sometidos».¹¹¹

137. «Desde el 2010 hay graves amenazas de muerte de gente armada y sin control de la policía contra las personas que conformamos ASFAVIT. Han amenazado a la monja MARITZE TRIGOS, a su hermana, al grupo bíblico y a quienes vivimos en la casa museo. Ya hubo un atentado y la gente comienza a desplazarse de nuevo, andan presionando a que nos desafilieemos de ASFAVIT y nos dicen “o te largas o te pelamos”».¹¹²

138. «En enero de este año llegaron tres carros a la casa Museo de La Memoria, me amenazaron de muerte por ser quien cuida la casa, son amigos de El Alacrán, hay peligro, pues la casa museo no tiene vigilancia ni seguridad a pesar de haberla pedido».¹¹³

139. «Hay amenazas de muerte desde el 2009 contra el MOVICE Capítulo Valle del Cauca. El propio ejército regó la comuna 18 de Cali con un panfleto amenazando de muerte “por guerrilleros”; hay paramilitares en el distrito de Agua Blanca de Cali, en las comunas 18 y 20, en Yumbo los paramilitares Rastrojos y Águilas Negras están asesinando jóvenes».¹¹⁴

140. Un vecino del Corregimiento de La Marina asegura que existen presiones de ciertas personas del pueblo ligadas a colectivos sociales para evitar la denuncia sobre las extorsiones y hostigamientos que reciben por parte de la guerrilla.

¹⁰⁸ Testimonio en Algeciras, Huila, 9 de marzo de 2011.

¹⁰⁹ Testimonio en la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ Vanguardia Liberal. Declaraciones de Óscar Dávila, estudiante de la UIS, vocero en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos.

¹¹² Testimonio en Trujillo, Valle. ASFAVIT. 12 de marzo de 2011.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ Entrevista con MOVICE, Capítulo Valle del Cauca y con CPDH Valle. Cali, 12 de marzo de 2011.

3. Desaparición forzada

141. Es una grave violación de los derechos humanos cuya existencia se negaba. «Los desaparecidos están en el monte» era una afirmación habitual de los militares al preguntárseles por el paradero de personas desaparecidas.¹¹⁵

142. No se conoce la cifra real de personas desaparecidas. El subregistro se da por el temor de las familias de las víctimas de denunciar ante las autoridades, que en muchos casos son vistas como ejecutoras o colaboradoras de la desaparición forzada.

143. Sin embargo, es un avance que el Congreso de la República haya aprobado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

144. A finales del 2010 había registradas 51.310 personas desaparecidas en Colombia, de las cuales 12.632 han sido consideradas hasta ahora como desapariciones forzadas, entre ellas 3.073 mujeres y 3.042 personas menores de 20 años. En el 2010 hubo un incremento del 40% de las denuncias por desaparición forzada en relación con el 2009.¹¹⁶

145. «El número de desaparecidos en Colombia en los últimos tres años asciende a 38.255 personas, que serían víctimas de la violencia de la guerrilla y de los grupos paramilitares que actúan en el país, así como de la función represiva de agentes estatales, según un informe del Instituto de Medicina Legal. De la cifra total de personas desaparecidas, 18.236 casos se denunciaron en el último año, mientras que 15.696

corresponden al 2008 y 4.323 al 2007, lo que evidencia una moderación paulatina del fenómeno».¹¹⁷

146. Con base en confesiones de los paramilitares se han exhumado 3.037 fosas y se encontraron 3.678 cadáveres; solamente 1.323 han sido identificados plenamente.¹¹⁸

147. La impunidad para el delito de desaparición forzada es muy alta. La Oficina de la ONU en Colombia expresó su preocupación «por la impunidad que existe en torno a los 27.300 casos de desapariciones forzadas que investiga la Fiscalía... hago un llamamiento al Gobierno de Juan Manuel Santos a fortalecer a las organizaciones judiciales para procesar a los responsables de estos delitos».¹¹⁹

148. En el cementerio de La Macarena hay al menos 446 cuerpos de personas sin identificar, algunas reportadas como desaparecidas, que fueron entregadas por las fuerzas militares como personas dadas de baja en combates.

149. ALBA NELLY MURILLO TABORDA, de 34 años de edad, campesina, defensora de derechos humanos, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda, municipio de El Castillo, Meta, está desaparecida desde el 15 de febrero de 2009, cuando cruzó el puente sobre el río Llamanes, controlado por tropas del Batallón 21 Vargas. Como defensora de Derechos Humanos ALBA NELLY había dado su testimonio para el IV Informe de la Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia en su visita a la zona del Alto Ariari en

¹¹⁵ Testimonio de familiar de un sindicalista desaparecido. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

¹¹⁶ Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC).

¹¹⁷ «Diario ABC», 11 de mayo de 2010.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ Declaraciones del Alto Comisionado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Christian Salazar. Bogotá, 23 de marzo de 2011. EUROPA PRESS.

julio de 2008. Había regresado a su región con su familia después de sufrir un desplazamiento forzado por las amenazas y señalamientos que hacían contra ella y contra los habitantes de la región los grupos paramilitares y los militares de la Séptima Brigada, IV División del Ejército. Alba Nelly había denunciado que, en un altercado verbal el mayor Baquero y otros integrantes del Batallón 21 Vargas, la habían amenazado de muerte por denunciar los atropellos que cometen contra los campesinos y campesinas del Alto Ariari. Un hermano de Alba Nelly, sindicalista afiliado del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta, SINTRAGRIM-FENSUAGRO-CUT, y otros miembros de su familia están recibiendo amenazas de muerte por militares del mismo batallón, quienes exigen que cesen las denuncias de la familia por la desaparición de Alba Nelly «o les va a pasar lo mismo».¹²⁰

150. «Luego de un enfrentamiento entre la guerrilla del M19 y el ejército, que perdió 7 soldados, llegó el ejército a la finca La Sonora y a los pocos días los paramilitares del Bloque Calima, comandado por alias “Rasguño”, el 1º de abril de 1990 se llevaron a 11 personas y las desaparecieron como represalia por un supuesto apoyo al ELN. Muchos de estos crímenes siguen impunes».¹²¹

151. El jueves 17 de febrero desapareció en Cali la ambientalista SANDRA VIVIANA CUÉLLAR cuando hacía la ruta hacia su sitio de trabajo en la Universidad Nacional seccional de Palmira. Sandra tiene una labor reconocida en la lucha por la defensa del medio ambiente y la naturaleza, es activista del Referendo por el Agua y la protección de humedales, así como por la recuperación del río Cauca. Venía denunciando

¹²⁰ Denuncias ante la Delegación Asturiana de la Comisión de Derechos Humanos del Alto Ariari. Febrero de 2009.

¹²¹ Testimonio en Trujillo, Valle, ASFAVIT. 12 de marzo de 2011.

a empresas multinacionales que se apropian y contaminan la riqueza hídrica del Valle del Cauca.

4. Torturas, trato cruel o degradante

152. Las torturas son una práctica habitual, subregistrada e impune.

153. «La oficina en Colombia continuó registrando casos de tortura por miembros de la fuerza pública, y observó con gran preocupación la repetida ocurrencia de esta violación en departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Meta, Valle del Cauca y Vichada. Preocupa en particular la situación en Medellín, donde varias personas, incluyendo presuntos delincuentes, habrían sido víctimas de tortura y malos tratos de forma reiterada. Varias personas bajo custodia policial sufrieron castigos físicos y psicológicos, en ocasiones acompañados de insultos racistas. Los maltratos consistieron, entre otros, en golpes en varias partes del cuerpo, mediante puñetazos y patadas o con armas de dotación, así como descargas eléctricas, quemaduras, aspersión con gas pimienta y asfixia con bolsas de plástico».¹²²

154. «Entre los años 2002 y 2008 se registró que por lo menos 173 mujeres fueron víctimas de tortura. De ellas, 89 fueron asesinadas después de haber sido torturadas, 38 quedaron con vida y 46 fueron víctimas de tortura psicológica. En los casos en los que se conoce la edad de la víctima (73), 30 eran niñas, 18 eran jóvenes, 24 eran adultas y una era adulta mayor».¹²³

¹²² Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22, numeral 36, p. 8, febrero de 2011.

¹²³ X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Mesa de trabajo Mujer y Conflicto armado.



5. Detenciones arbitrarias y situación carcelaria

155. El nuevo tono del gobierno de JUAN MAUNEL SANTOS con los interlocutores tanto nacionales como internacionales en el tema de los derechos humanos no se corresponde con la negativa del permiso por parte del INPEC a la VII Delegación Asturiana para que constatará las condiciones de reclusión de las personas detenidas por delitos políticos en la cárcel de La Picota, en Bogotá, con el precedente de que en el

2010 tampoco se autorizó el ingreso de la VI Delegación Asturiana a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.

156. «El Comité observa con preocupación la alta incidencia de hacinamiento y las quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dentro de los centros penitenciarios y en lugares de detención temporal».¹²⁴

157. «La población reclusa en el país crece constantemente, se pasó de 60.175 personas internas en junio de 2007, a 81.486 en julio de 2010, de las cuales el 6,5% son mujeres, es decir, 5.331 este año. Del total general, según cifras manejadas por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se estima que hay más de 7.000 personas detenidas por razones políticas —no se conocen cifras exactas de cuántas detenidas políticas hay».¹²⁵

158. La situación carcelaria vulnera los derechos básicos de las personas detenidas. «La situación en la cárcel de Picalaña, en Ibagué, es de hacinamiento en un 60%, trato cruel, inhumano y degradante, confinación en sitios inadecuados por no tener luz, agua ni comunicación, mala alimentación, ausencia de servicios de salud operativos y de útiles de aseo, ausencia de anexos psiquiátricos, el 25% de los presos no tiene acceso a estudios o trabajos para redimir pena, abusos y humillaciones de la guardia a los familiares de detenidos por delitos políticos..., solicitamos un estudio verdadero por entes no gubernamentales, preferiblemente una comisión internacional experta en temas carcelarios, para que elaboren mediante visitas a dife-

¹²⁴ CCPR/C/COL/CO/6 Comité de Derechos Humanos ONU. 99º período de sesiones. Ginebra, 12 a 30 de julio de 2010.

¹²⁵ X Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. Mesa de trabajo Mujer y Conflicto armado.

rentes cárceles del país, un informe sobre el estado de los derechos humanos dentro de prisiones».¹²⁶

159. Continúa la práctica de los montajes judiciales mediante el uso de testigos falsos que, a cambio de dinero o de rebaja de penas, sindicaron a dirigentes sociales y personas defensoras de los derechos humanos de pertenecer a organizaciones armadas al margen de la ley, especialmente grupos guerrilleros. Estas personas permanecen detenidas hasta dos años sin juicio y al recuperar la libertad se encuentran socialmente estigmatizadas y en la mayoría de los casos revictimizadas por las amenazas de muerte y por el desplazamiento forzado.

160. «Al Comité le preocupa la alta incidencia de detenciones arbitrarias, y en particular el uso de la detención preventiva administrativa por parte de la policía y la realización de detenciones masivas por parte de la policía y el ejército. El Comité observa que órdenes de capturas a menudo carecen de suficientes elementos probatorios y que las detenciones estigmatizan a ciertos grupos como líderes sociales, jóvenes, indígenas, afrocolombianos y campesinos».¹²⁷

161. «El 6 de noviembre de 2010 en Bucaramanga fue capturada la defensora de derechos humanos e integrante de la FCSPP, CAROLINA RUBIO ESGUERRA, acusada de rebelión por pertenecer al frente 24 de FARC por dos testigos sin identidad. Tiene libertad condicional por estado avanzado de gravidez».¹²⁸

¹²⁶ Carta enviada desde la cárcel de Pica Leña a la Comisión Asturiana por «Los prisioneros políticos y de conciencia integrantes de las FARC-EP». Ibagué, 3 de abril de 2011.

¹²⁷ CCPR/C/COL/CO/6 Comité de Derechos Humanos ONU. 99º período de sesiones. Ginebra, 12 a 30 de julio de 2010.

¹²⁸ Comunicado «Por el derecho a la oposición política». Organizaciones Sociales de Santander.

162. Es frecuente el uso de esta modalidad para hacer apresar a las y los dirigentes campesinos en los conflictos por tierras, como ocurre con varios labriegos de la finca La Europa de Ovejas, Sucre, y en otros conflictos de tierras, lo que trae como consecuencia la pérdida de la libertad y la destrucción de las organizaciones campesinas, objetivo que persiguen los usurpadores de tierras. «Nuestra fuerza era el sindicato que tenía campesinos afiliados en Chalán, Ovejas, Colosó, y por toda la sabana, pero vino la guerra y la estigmatización y las mentiras de los militares y los terratenientes con la Operación Orión diciendo que éramos del Frente 35 de las FARC y nos metieron a la cárcel Modelo a los compañeros de la Junta Directiva, a otros los mataron o los desplazaron y acabaron con nuestro sindicato. Se llamaba Sindicato de Agricultores de Sucre, filial de FENSUAGRO. Ahora acabamos de fundar otro sindicato, todo es legal pero tenemos miedo, aquí la institucionalidad solo protege a los ricos».¹²⁹

163. Algunos paramilitares presos han adoptado como venganza la modalidad de involucrar, mediante falsos testimonios, en sus propios procesos penales a los defensores y defensoras de los derechos humanos que han tenido el valor de denunciarlos. Para ello declaran que «yo me reuní con ese señor», dando detalles falsos de supuestos encuentros y acuerdos que acaban con los testigos encarcelados al lado de sus enemigos.

164. Ése es el caso de los defensores de derechos humanos CARMELO AGAMEZ, preso en la cárcel de Co-rozal, Sucre, y de DAVID RAVELO, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá.

¹²⁹ Testimonio en la finca La Europa Ovejas. Sucre, 5 de marzo de 2011.

165. El defensor de derechos humanos CARMELO AGAMEZ está preso en la Cárcel de Corozal, Sucre. «El 14 de noviembre de 2008, mediante un montaje judicial con la complicidad del fiscal RODOLFO MARTINEZ, apresaron a Carmelo acusándolo de ser paramilitar, cuando era él quien los venía denunciando por las masacres en San Onofre. La justicia le viene escamoteando el derecho a la defensa, le negaron la libertad condicional por ser “un peligro social”, pero de los 27 paracos que él denunció solo 3 siguen detenidos, a los demás los han ido dejando en libertad o les dieron la casa por cárcel. Lleva 28 meses preso injustamente y en la misma cárcel ha recibido amenazas de muerte de las Águilas Negras».¹³⁰

166. «Estoy procesado hace 28 meses por concierto para delinquir por reunirme con los paramilitares cuando he sido yo quien ha acusado a estos grupos. Dos años y medio sin libertad y aún no hay sentencia, ni fecha de juicio. El fiscal que lleva el caso está prevaricando, lo que quieren es que acepte los cargos y me acoja a sentencia anticipada. No lo haré. No soy culpable».¹³¹

167. El 14 de septiembre de 2010 fue detenido DAVID RAVELO CRESPO, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos del Magdalena Medio —CREDHOS—, organización beneficiaria de medidas cautelares otorgadas en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este dirigente popular es sobreviviente del exterminio del partido Unión Patriótica, miembro del Partido Comunista Colombiano y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado —MO-

¹³⁰ Entrevista en la cárcel de Corozal, domingo 6 de marzo de 2011.

¹³¹ *Ibidem*.

VICE—. Viene recibiendo amenazas de muerte contra él y su familia por parte de los grupos paramilitares, que, en venganza, lo sindicaron de tener vínculos con su organización y de haber asesinado a un candidato a la alcaldía de Barrancabermeja en 1990.¹³²

168. Continúa la práctica de las detenciones masivas con base en testigos falsos. «El viernes 14 de enero de 2011 fue capturada en la ciudad de Cúcuta la estudiante de Español y Literatura, y poeta de la Universidad Industrial de Santander, ANGIE MARCELA GAONA, al momento de registrar su entrada al país en la frontera con Venezuela, en donde se encontraba gestionando actividades culturales. Tres días después, el lunes 17 de enero, en el municipio de Floridablanca se produce la captura del estudiante universitario JULIÁN ALDONI DOMÍNGUEZ, miembro activo del Comité de Derechos Humanos de la CUT, del Bloque Estudiantil y del Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos CODDEHU de la UIS; igualmente, el estudiante de Derecho de la Universidad UNICIENCIA, miembro activo del Comité de Derechos Humanos de la CUT y miembro del Sindicato de Vendedores Informales USDEVI, WILLIAM RIVERA RUEDA».¹³³

169. POMPILO DÍAZ REINOSO y sus hijas DALIA DÍAZ BERMÚDEZ y DANIA DÍAZ —menor de edad— están detenidas arbitrariamente desde el 22 de julio de 2010 y el 16 de octubre de 2010.¹³⁴

170. El señor JOSÉ VICENTE MÉNDEZ ZAMBRANO ha sido víctima de seis (6) detenciones arbitrarias: 3 de junio de 2004, 2 de agosto de 2008, 11 de julio de 2009, 21 de febrero de 2010, 9 de junio de 2010 y 6

¹³² Denuncia de CREDHOS. Bogotá, septiembre del 2010.

¹³³ Comunicado «Por el derecho a la oposición política». Organizaciones Sociales de Santander.

¹³⁴ Informe de las organizaciones sociales del Tolima ante la VII Delegación Asturiana. Ibagué, 7 de marzo de 2011.

de agosto de 2010. Actualmente está detenido acusado de rebelión en la cárcel Picalaña de Ibagué.¹³⁵

171. También son frecuentes las detenciones masivas y arbitrarias. El 13 de junio de 2009 el ejército nacional detuvo a 14 campesinos sindicándolos del delito de rebelión en el Corregimiento Las Hermosas, de Chaparral. Se trata de EVER QUIJANO, WILSON MEDINA, MAURICIO COLLAZOS, JESÚS PORTELA, EDWIN MEDINA, MILLER TAPICERO, JORGE GARCÍA, MARTHA CECILIA OROZCO, TREVILIO GUZMÁN, NORBERTO FERNÁNDEZ, MAURICIO CRIOLLO, ALCIBIADES ROMERO, ALBEIRO SERNA y ARNULFO TRIANA.¹³⁶

172. «Soy ALBEIRO QUINTERO y estuve preso 9 meses por un montaje judicial. Ahora aparezco en una lista del ejército que dejaron apuntada detrás de un mapa. Dicen por ahí que van a pistolearme».¹³⁷

173. «El alcalde de Algeciras nos da la espalda y es mentira que esté amenazado. Si el ejército, que es la fuerza del orden y quien debiera cuidarnos, en vez de eso nos mata, ¿qué hacer?».¹³⁸

6. Violencia sexual, niños/as

174. La violencia contra las mujeres y niñas es habitual e impune en Colombia dentro de las familias y en las zonas con conflicto armado, donde su cuerpo fue convertido en botín de guerra.

175. Comprende formas de control bajo amenazas a la forma de vestir, restricciones a sus relaciones sociales, trabajo doméstico forzado, acoso y violencia

sexual, sobre todo en las regiones de conflicto armado.

176. «El Comité expresa su preocupación ante información que indica cifras alarmantes de violencia sexual contra mujeres y niñas. Al Comité le preocupa la cantidad de estas violaciones, cuya responsabilidad es atribuida a miembros de las FARC-EP y de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares. Además, el Comité expresa su grave preocupación acerca de casos en los cuales los presuntos responsables son miembros de la fuerza pública y que en la mayoría de estos casos las víctimas han sido niñas. El Comité lamenta que no se hayan tomado todas las medidas necesarias para avanzar en las investigaciones de los 183 casos de violaciones sexuales remitidos por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, le preocupa la invisibilidad de los crímenes de violencia sexual en los mecanismos establecidos por la Ley n.º 975 de 2005».¹³⁹

177. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas en las zonas de confrontación armada es una práctica generalizada e impune. Al menos medio millón de mujeres habrían sido abusadas en los últimos diez años, pero la cifra puede ser superior por el subregistro originado en el temor y el pudor, y sobre todo por la impunidad en que queda esta modalidad de violencia. «La violencia sexual contra las mujeres es habitual, sistemática e invisible».¹⁴⁰

178. «Tuve 4 hijos y a uno se lo querían llevar los paramilitares, me opuse y uno de ellos, alias “Alex”, me sacó a entrevista con su comandante. Por el ca-

¹³⁵ *Ibidem.*

¹³⁶ *Ibidem.*

¹³⁷ Testimonio en Algeciras. Huila, 9 de marzo de 2011.

¹³⁸ *Ibidem.*

¹³⁹ CCPR/C/COL/CO/6 Comité de Derechos Humanos ONU. 99º período de sesiones. Ginebra, 12 a 30 de julio de 2010.

¹⁴⁰ Diario público, «La Voz de Asturias», 10/09/2010.

mino me tomó del pelo y me tumbó en una zanja, resistí y me metió a un cafetal. Me violó, hizo lo que quiso conmigo. Nadie me auxilió por miedo, aunque grité y me escapé varias veces, hasta que desnuda me aventé por un barranco. Entonces me gritó que se las pagaría. La policía ayudó a huir al responsable. Al año mi hijo FREDY HUMBERTO RUIZ, de 24 años, desapareció. Se lo llevaron los paramilitares por venganza, algunos vecinos vieron que lo tenían amarrado con alambres».¹⁴¹

179. «La principal conclusión de la encuesta es el elevado número de actos de violencia sexual contra las mujeres en Colombia en aquellos municipios con presencia de actores armados. La investigación indica que, en el período 2001-2009, en los 407 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares el 17,58% de las mujeres —es decir, un total de 489.687 mujeres— fueron víctimas directas de violencia sexual. Este dato significa que anualmente, en promedio, 54.410 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual; 149 diariamente y 6 cada hora en municipios colombianos con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitares u otros actores armados».

180. «Es frecuente el reclutamiento de niños y niñas para labores relacionadas con el conflicto armado».¹⁴²

181. «El Comité observa con preocupación el reclutamiento de niños por parte de grupos armados ilegales y en particular por parte de las FARC-EP y el ELN. Al Comité también le preocupa que la fuerza pública siga usando niños en actos cívicos militares, como el programa “soldado por un día”, y que se realice

interrogatorios de niños con el propósito de recoger inteligencia».¹⁴³

182. «La oficina en Colombia recuerda que la línea entre el reclutamiento forzado y el voluntario de niños y niñas es legalmente irrelevante y que el concepto de “utilización” debe ser interpretado de la manera más amplia. Los grupos armados ilegales están obligados, en cualquier circunstancia, a no incorporar, ni aceptar la incorporación de menores de 18 años en sus filas, ni utilizarlos en las hostilidades, ni en funciones de apoyo, como cocineros o mensajeros. El Estado debe considerar como víctimas a los menores reclutados o utilizados por los grupos armados ilegales».¹⁴⁴

183. «En junio de 2009 los paramilitares querían reclutar forzosamente a jóvenes de la escuela de la vereda Puente Blanco. Debíamos reunir a los niños y ellos escogerían a cinco “para enseñarles a ser berraquitos”, y aunque ante la denuncia vino el alcalde, la ONU y el comandante del Batallón Palacé, los padres de familia optamos por no enviar más nuestros hijos a la escuela y pedimos el retiro del ejército de la región por su tolerancia con los paramilitares. A los pocos meses regresaron con lo mismo».¹⁴⁵

184. En julio del 2010 el Ministerio de Defensa expidió la Directiva n° 11 para prevenir todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, sin embargo resulta insuficiente. El día 14 de octubre, en el Municipio del Tame, Arauca, tres niños, hermanos entre sí, JEFFERSON TORRES, de 6 años, JIMMY de 9 años, y JENNY, de 14 años, fueron torturados, violados y degollados por soldados de la Octava División del Ejér-

¹⁴¹ Testimonio en Trujillo. ASFAVIT. 12 de marzo de 2011.

¹⁴² OXFAM. La violencia sexual en Colombia. Primera Encuesta de Prevalencia. 9 de diciembre de 2010.

¹⁴³ CCPR/C/COL/CO/6 Comité de Derechos Humanos ONU. 99° período de sesiones. Ginebra, 12 a 30 de julio de 2010.

¹⁴⁴ Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. A/HRC16/22, numeral 36, p. 8, febrero de 2011.

¹⁴⁵ Testimonio en Trujillo, Valle. ASFAVIT. 12 de marzo de 2011.

cito que arrojaron sus cuerpos a una fosa común. Aunque el suboficial al mando reconoció los hechos, ni el ejército ni la fiscalía actuaron con diligencia.

185. «El 13 de abril de 2007 golpearon en la puerta de la casa, dijeron que eran de la guerrilla. No les abrí, pero se metieron por el techo y me obligaron a salir al patio y ahí vi que parecían militares. Estaban encapuchados, me dijeron que no gritara, me sentaron a empujones para violarme».¹⁴⁶

186. «Además de la estigmatización “política” en determinados contextos de los defensores de ambos sexos, a quienes se acusa de representar a movimientos guerrilleros, terroristas, extremistas políticos, separatistas y países o intereses extranjeros, su sexo o los derechos que propugnan en relación con el género o la sexualidad suelen agravar la estigmatización de las defensoras de los derechos humanos».¹⁴⁷

187. «Como han reiterado ambas titulares del mandato en varias ocasiones, las defensoras de los derechos humanos corren riesgos a los que sus compañeros varones no están tan expuestos».

188. «La Relatora Especial está consternada por los extraordinarios riesgos que corren las defensoras de los derechos humanos y quienes se dedican a los derechos de la mujer o las cuestiones de género debido a su labor. La mayoría de estos riesgos afecta directamente a su integridad física y a la de sus familiares».

189. Una mujer denuncia el acoso, por parte de integrantes del Comando n° 5 del Ejército, a su niña de 15 años que, a su vez, es hija de un dirigente de la

Junta Accional y Militar de la Unión Patriótica, asesinado el 23 de febrero de 2008.

7. Impunidad

*«Los asesinos hablan a diario por la boca del Estado. Las víctimas tenemos ahora la palabra y gritaremos nuestra verdad».*¹⁴⁸

«Los políticos que se aliaron con los paramilitares se van conociendo y van pasando a manos de la justicia, pero falta otro capítulo, el de ajustar cuentas con los altos mandos militares, que incrementaron el paramilitarismo y cometieron crímenes de Estado, generales matones del ejército y de la policía creando grupos paramilitares, lucrándose con la guerra, comprando tierras. Los medios de transporte y el poder local, todo fue capturado mediante el despojo violento del territorio».¹⁴⁹

190. La extradición a los Estados Unidos de algunos jefes paramilitares se ha convertido en una fuente de impunidad. «Al Comité le preocupa que la extradición por orden del poder ejecutivo de jefes paramilitares a los Estados Unidos para responder a cargos de narcotráfico ha resultado en una situación que obstaculiza la realización de investigaciones acerca de su responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, las extradiciones bajo estas condiciones impiden el derecho a la justicia, verdad y

¹⁴⁶ Testimonio en Algeciras. Huila, 9 de marzo de 2011.

¹⁴⁷ Informe A/HRC/16/44 de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 16° período de sesiones, 20 de diciembre de 2010.

¹⁴⁸ Intervención de una víctima en la Audiencia Pública por la Verdad. San Onofre, Sucre, 26 de febrero de 2006.

¹⁴⁹ Germán Reyes, Asesor del Ministerio de Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.



reparación de las víctimas, y contravienen la responsabilidad del Estado parte de investigar, enjuiciar y castigar las violaciones de los derechos humanos». ¹⁵⁰

191. «No hay justicia y a la víctima no se le puede decir que hay pocos jueces, que hay pocos abogados y pocos medios... el presupuesto disminuye, la criminalidad crece... hay millones de casos pendientes». ¹⁵¹

192. Los paramilitares siguen existiendo y atacando a la oposición social y política del establecimiento. Su actividad queda impune, así como la de sus socios o auspiciadores. «¿Qué papel jugaron y siguen jugando los empresarios y las multinacionales en el paramilitarismo? Sabemos que hay denuncias sobre 22 empresas hechas por los jefes paramilitares, pero

¹⁵⁰ CCPR/C/COL/CO/6. Comité de Derechos Humanos ONU. 99º período de sesiones. Ginebra, 12 a 30 de julio de 2010.

¹⁵¹ Hernando CASTANEDA ARIZA, Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Bogotá, 11 de marzo de 2011.

solo conocemos el caso de la Chiquita Brands ¿y las demás?». ¹⁵²

193. «La acción permanente de cinco años de las víctimas desde el MOVICE está haciendo que la justicia comience a funcionar. El proyecto de ley de víctimas es un reconocimiento tácito a las reivindicaciones y existencia del MOVICE, pero no es suficiente para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Este proyecto de ley no garantiza justicia, ni la permanencia en los territorios, ni la restitución de las tierras usurpadas sobre muchas de las cuales se están otorgando títulos mineros. En el Gobierno solo hay un cambio de discurso, no hay cambios en la política que favorezca a las víctimas,

por eso hay que fortalecer la unidad del MOVICE, que cuenta con 19 capítulos en igual número de departamentos, agrupando a 15.000 víctimas que tiene tres temas sensibles: la paz, los derechos humanos y los derechos como víctimas». ¹⁵³

194. La Ley 975, de 2005, conocida como «Ley de Justicia y Paz», o ley de justicia transicional, ha sido un fracaso en términos de acceso a la justicia para las víctimas del paramilitarismo y es una fuente abierta de impunidad. «Las personas que están en la sala, que vieron morir a sus familiares, que fueron víctimas en ese momento, son víctimas una segunda vez a través

¹⁵² Gloria Inés Ramírez, Senadora de la República. Intervención ante el V Encuentro del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

¹⁵³ Franklin Castañeda. V Encuentro Nacional del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

de este proceso en el que las instrumentalizan para vender una idea de que el país va mejor, que ya no hay conflicto y que se está juzgando a los criminales».¹⁵⁴

195. «... el progreso en el marco de la Ley 975 de 2005 sigue siendo modesto: menos del 54% de los procesados, que constituyen aproximadamente el 4,5% de todos los desmovilizados, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Aunque sus confesiones revelaron un número importante de homicidios, no permiten conocer plenamente la diversidad, el contexto y el carácter sistemático de los actos cometidos por las organizaciones paramilitares».¹⁵⁵

196. Según el Gobierno colombiano se desmovilizaron cerca de 32.000 paramilitares de las AUC en seis años, «un modelo digno de imitar» según el ex presidente Uribe Vélez, pero éstos no han confesado sus crímenes y cada vez hay más pruebas de que el Gobierno aceptó falsas desmovilizaciones —personas civiles presentadas ante los medios de comunicación como paramilitares que abandonaban las armas— como parte de una estrategia para preservar las estructuras ilegales, mostrar resultados y ganar opinión pública.

197. «La existencia y el crecimiento de esos grupos se deben en gran parte a los procesos de desmovilización y justicia de transición que han redundado en impunidad para los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos... Al mes de septiembre de 2010 solo dos personas habían sido condenadas por los delitos tipificados».¹⁵⁶

¹⁵⁴ Cineasta Juan José Lozano en el documental sobre Colombia «Impunity».

¹⁵⁵ Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/16/22. 3 de febrero de 2011.

¹⁵⁶ Gay McDougall, Relatora de Minorías ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ginebra, Suiza, 15 de marzo de 2011.

198. También es fuente de impunidad estructural la reiterada asunción por la Justicia Penal Militar del conocimiento de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública, como si delinquir fuese un acto propio del servicio, desconociéndose jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que dijo al respecto: «El fuero militar así concebido en la Carta Política cobija entonces a los miembros de la fuerza pública en servicio activo, exclusivamente por las conductas ilícitas relacionadas con el servicio, nexo sobre el cual se ha pronunciado la Corte Suprema en múltiples oportunidades, aclarando que no puede entenderse como una conexión genérica que se presenta entre el servicio activo militar o policial y el delito que realiza quien lo presta, sino que es imprescindible determinar una “correspondencia” entre el hecho constitutivo de la infracción penal y los deberes que legalmente le atañen a esos servidores públicos, dado que las normas constitucionales imponen los límites dentro de los cuales se puede actuar en un Estado Social de Derecho... De este modo, ha recabado la Sala, la competencia castrense, de estirpe constitucional, solo se atribuye cuando el hecho que motiva el proceso ha sido realizado por un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en ejercicio activo de sus funciones, siempre y cuando la conducta tenga relación con el servicio militar o policial, es decir, que no basta que se trate de un militar o de un policía en servicio activo, sino que es necesario que la conducta ilícita haya sido realizada en relación con el servicio oficial a desempeñar».¹⁵⁷

199. «Las investigaciones de asesinatos extrajudiciales continúan pero lentamente, y es preocupante

¹⁵⁷ Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Radicado 26137 del 6 de Mayo de 2009.

que casos de derechos humanos no sean transferidos al sistema judicial civil como se debería». ¹⁵⁸

200. «Proteger a las fuerzas de seguridad de la justicia convertiría en una burla las manifestaciones del Gobierno cuando habla de luchar contra la impunidad y de respetar su obligación internacional de llevar ante los Tribunales a quienes hayan violado los derechos humanos...». «Luchar contra la impunidad en Colombia es un trabajo peligroso. Las repetidas amenazas contra María Stella Jara Gutiérrez (la juez que condenó a Plazas) y las amenazas contra varios magistrados de la Corte Suprema, así como las informaciones de que fueron espiados y grabados, suscitan gran preocupación». ¹⁵⁹

201. «Los ricos que mandaron a matar a BETY LAMBRAÑO y a su hijo JOSÉ FRANCISCO VIVES, torturados y degollados en Caño Cholé, se llaman MOISÉS RODRÍGUEZ, GUSTAVO DEL A OSSA y sus hermanos JAI-ME y ÁLVARO, JOSÉ LUIS ATENCIO y SANTOS ACOSTA, todos viven en la Villa de San Benito Abad. Las autoridades del pueblo lo saben y la policía les avisa de nuestras denuncias, por eso los hacendados se llevan a los policías a sus fincas y los agasajan con comidas y con tragos y no los capturan, antes los protegen». ¹⁶⁰

202. «El 8 de marzo de 2006 el ESMAD de la policía asesinó de un disparo al estudiante ÓSCAR SALAS, quien participaba de las radios comunitarias. Aunque un policía confesó el uso de armas no convencionales por la policía durante los tropes de ese día, el crimen sigue sin castigo y la familia de Óscar ha sido amenazada de muerte, lo mismo que el policía arre-

pentido. Seguimos creando radios comunitarias por ser de interés público». ¹⁶¹

203. El gobierno de Juan Manuel Santos impulsó una Ley aprobada en el Congreso en diciembre de 2010 que agrava los niveles de impunidad, al posibilitar que, en aras de la verdad, se sacrifique el derecho de las víctimas a la justicia, pues deja sin efectos jurídicos las confesiones de los paramilitares.

204. A pesar de que Colombia es, formalmente, una democracia, varios movimientos políticos han sido exterminados con violencia, como el Frente Popular, A Luchar y La Unión Patriótica. «El Estado colombiano exterminó a la Unión Patriótica. Y lo que es peor, no ha sido capaz de superar la impunidad judicial y disciplinaria de esos crímenes. Es triste, pero tenemos un registro de más de 10.000 víctimas, que es apenas un subregistro porque hay regiones a las que no hemos podido regresar, como la Costa Atlántica, donde el paramilitarismo persiste, y la Fiscalía no ha determinado ni siquiera una autoridad material... .. Un estudio de la Defensoría del Pueblo, por mandato de la Corte Constitucional en una acción de tutela, revela que en 717 casos de homicidio, solo había 10 casos con decisión de fondo: seis absoluciones y cuatro condenas. Esta impunidad no nos dejó otra salida que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y radicamos el caso por genocidio... Nunca el Gobierno negó que hubiera existido el homicidio continuado contra la UP. Nosotros entregamos un listado de 1.163 homicidios, 103 casos de desaparición forzada, 43 sobrevivientes con atentados personales y 225 personas amenazadas. De ese listado, después mataron a algunos. Yo soy una sobreviviente. En 1991 iba a ser asesinada en Barrancabermeja, pero los si-

¹⁵⁸ «El Espectador», 15 de septiembre de 2010.

¹⁵⁹ Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia. «El Tiempo», 11 de junio de 2010.

¹⁶⁰ Testimonio de desplazados de Caño Cholé. Ovejas, Sucre, 5 de marzo de 2011.

¹⁶¹ Testimonio en Ibagué. 7 de marzo de 2011.

carios se equivocaron y mataron a mi amiga, Blanca Durán...»¹⁶². De los 14 congresistas de la Unión Patriótica que salieron elegidos el 9 de marzo de 1984 fueron asesinados BERNARDO JARAMILLO, HENRY MILLÁN, LEONARDO POSADA, ELSA ROJAS, OCTAVIO VARGAS, JAIME MONTOYA, PEDRO, LUIS VALENCIA y PEDRO NEL JIMENEZ. En las elecciones posteriores hubo más parlamentarios y candidatos de la UP asesinados. JAIME PARDO LEAL, MANUEL CEPEDA VARGAS, ALEJANDRO CARDENAS VILLA, GABRIEL JAIME SANTAMARÍA, ELKIN MARTÍNEZ y el abogado de las víctimas EDUARDO UMAÑANA MENDOZA, también asesinados. Dos candidatos presidenciales, 8 senadores, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes asesinados, algunos en masacres cometidas por grupos paramilitares y narcotraficantes, con participación directa o complicidad de agentes de seguridad del Estado. En algunos casos se conoce la autoría material, pero los autores intelectuales permanecen en la impunidad.

205. La búsqueda de justicia se convirtió en otra fuente de riesgos para las víctimas. «De la gente que habló en la Audiencia Pública por la verdad en San Onofre ya han amenazado de muerte a varios; un testificante de esa audiencia fue asesinado, otro tuvo que exiliarse, otro sufrió un atentado y quedó inválido, a Carmelo Agámez lo apresaron, y a DAVID DÍAZ, el hijo de EDUARDO DÍAZ, alcalde asesinado de El Roble, lo sindicaron de ser paramilitar, cuando él ha venido denunciando a los paras como asesinos de su padre».¹⁶³

¹⁶² Jahel Quiroga, Presidenta de REINICIAR, abogada de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «El Espectador», 19 de marzo de 2011. «25 años de la elección de los primeros congresistas de la UP, el Estado ha sido incapaz de superar la impunidad judicial».

¹⁶³ Testimonio con el MOVICE, Sucre.

206. «ÓSCAR EDUARDO MARTÍNEZ PALMA, de 32 años, concejal del PDA en Chaparral, quien venía denunciando la corrupción y violaciones de los derechos humanos por los militares, fue asesinado el 14 de octubre de 2006 y no hay detenidos, aunque se sospecha que fueron paramilitares y militares en activo».¹⁶⁴

207. «HENRY SAUL MOYA MOYA, activista sindical ASTRACATOL-CUT (Rovira-Tolima), fue asesinado por encapuchados cuando trabajaba en su finca, estando el ejército acantonado en su zona».¹⁶⁵

208. «MANUEL FELINTO CUÉLLAR MAJE, Fiscal de ASTRACATOL, fue asesinado por dos individuos vestidos de negro y encapuchados en presencia de labriegos de la zona. Los asesinos dijeron que ése era un mensaje a los líderes comunitarios, ya que tenían una lista con otros nombres. La comunidad responsabiliza a las fuerzas militares de este hecho ocurrido en la vereda Guadual, del municipio de Rovira, Tolima, el día 18 de diciembre de 2008».¹⁶⁶

209. «LUIS GONZAGA CARDOZO fue asesinado en la vereda La Islandia, municipio de Rovira, Tolima, el 7 de agosto de 2008 por miembros del Ejército Nacional de Colombia que entraron en su habitación, localizada en la finca Los Pinos "PINOS", siendo obligado a salir por parte de uno de los uniformados, que tapaban su cara con un pasamontañas, y lo abalearon por la espalda».¹⁶⁷

210. «Por ejecuciones extrajudiciales hay 500 personas detenidas, pero hay dos mil casos que involucran a un promedio de 5 personas, lo que arroja 10.000 personas por llevar a juicio. Para eso se nece-

¹⁶⁴ Testimonio en Ibagué, 7 de marzo de 2011.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

sitan 100 fiscales más, solo tenemos 30. La Justicia Penal Militar conoce de esos casos, pero tarda mucho en pasarlos a la Jurisdicción ordinaria, se genera un conflicto de competencias que hace más lenta la justicia. La fuerza pública colabora poco con la justicia, aunque ha ido mejorando».¹⁶⁸

211. La impunidad cubre la mayoría de los 342 crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, el Ejército y la Policía Nacional en Trujillo desde 1986, a pesar de que fue condenado el mayor ALIRIO URUEÑA JARAMILLO por su responsabilidad en la masacre de Trujillo, y de que el 31 de enero de 1995 el entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, reconoció la responsabilidad del Estado por acción y omisión en lo que entonces se denominaron los sucesos violentos de Trujillo. Las masacres comenzaron en 1986 en Trujillo, Riofrío y Bolívar, al nororiente del Valle del Cauca, por acuerdo entre la policía, el ejército y los narcotraficantes DIEGO MONTOYA, alias «Don Diego», y HENRY LOAIZA, alias «El Alacrán». Del total de víctimas de homicidios, torturas y desaparición forzada, 235 tienen identificación precisa en los osarios/esculturas del Parque Monumento a la Memoria en Trujillo, según ASFAVIT. Las víctimas eran jornaleros, tenderos, campesinos, transportadores, dirigentes políticos, sindicalistas y líderes religiosos, entre ellos el padre TIBERIO FERNÁNDEZ, asesinado y descuartizado. Él estimulaba la conformación de cooperativas y la construcción de tejido social comunitario. Las personas desaparecidas eran torturadas, trozadas con motosierra y sus partes arrojadas al río Cauca.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Hernando CASTANEDA ARIZA, Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General. Bogotá, 11 de marzo de 2011.

¹⁶⁹ Reunión con ASFAVIT. Trujillo, 12 de marzo de 2011.

212. «De la finca La Sonora, en Trujillo, se llevaron a mi hijo de 14 años, lo torturaron y lo asesinaron; dos hijos más están desaparecidos y mi esposo, que también fue torturado, murió de pena moral. A mi hija la hirieron hace un año en un atentado que no está claro en Tulúa. No ha habido reparación, quedé sola».¹⁷⁰

213. «A mi familia la masacraron en los noventa. Torturaron y asesinaron a mi padre y a mi tío en mi presencia, era un niño cuando eso. En el velorio un policía quería llevarme a la fuerza por que “sabía muchas cosas”, pero no pudo. El 23 de marzo de 1990 entraron con violencia a la casa, nos tendieron a todos, chicos y grandes en el piso, boca abajo, mataron a cuatro de mis familiares. Hace solo tres meses fui amenazado de muerte por pertenecer a ASFAVIT».¹⁷¹

214. «A mi hermano CARLOS CASTRILLÓN PATIÑO lo asesinaron el 26 de junio de 1991. Era conductor de transporte público. Unos encapuchados se lo llevaron y le pegaron 14 tiros. Su esposa se desplazó a Pereira y desapareció, y el otro hermano, SERGIO CASTRILLÓN, fue asesinado en 1993 en Cali “por una bala perdida”».¹⁷²

215. «Por las masacres de Trujillo hay 20 militares vinculados, pero no se conoce la verdad completa. Hay muchas pruebas y pocos juicios, el proceso lleva veinte años, está lleno de irregularidades y no avanza, por lo cual la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir y comenzar de nuevo lo actuado. No hay garantías de no repetición y ése es el miedo».¹⁷³

¹⁷⁰ *Ibidem.*

¹⁷¹ *Ibidem.*

¹⁷² *Ibidem.*

¹⁷³ *Ibidem.*

8. Desplazamiento forzado

*«No han vuelto las masacres en Los Montes de María, pero hay gente armada que presiona a los campesinos para que les vendan las parcelas. Son los mismos de antes. La gente malvende la tierra porque el terror ya fue sembrado».*¹⁷⁴

216. Continúa el desplazamiento forzado de personas, tanto individualmente como en grupos, sobre todo de campesinado, población afrocolombiana y comunidades negras. Y continúa el despojo violento de sus tierras y territorios.

217. Colombia continúa siendo uno de los países del mundo con más desplazamiento interno como resultado de la confrontación armada, pero sobre todo como una dinámica de alta movilidad de la población ligada a proyectos de inversión nacional y del capital internacional.

218. «Las cifras más recientes con que cuenta ACNUR muestran a Colombia como el segundo país con más población desplazada en el mundo, con 3,5 millones de personas registradas por el Gobierno como desplazadas, mientras en Sudán la cifra se estima alrededor de los cuatro millones».¹⁷⁵

219. «La empresa transnacional británica BP es acusada de generar fuertes impactos ambientales, laborales, sociales y especialmente sobre los derechos humanos en el departamento del Casanare, en Colombia. En las áreas de explotación se han documentado 2.653 casos de desaparición forzada y 9.000 casos de

asesinatos. La actividad petrolera ha causado el desplazamiento forzado y ha contribuido a generalizar la cultura del miedo».¹⁷⁶

220. «En Colombia colapsó el derecho de propiedad. La restitución de tierras no es posible si el Estado no recupera el control del territorio. Mientras las guerrillas se repliegan, el gran latifundio incrementa su extensión, y los campesinos se ven expulsados a los frentes de colonización, por eso hay que cerrar la frontera agrícola. Hay que llevar los títulos de propiedad a la justicia para que el conflicto salga del campo y pase a los Tribunales».¹⁷⁷

221. La Comisión de Seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento atribuye a los grupos paramilitares la responsabilidad del 45% del total del desplazamiento forzado.

222. A diciembre de 2010 suman ocho millones de hectáreas de tierra las abandonadas/despojadas con violencia en los últimos quince años, según datos de Acción Social de la Presidencia de la República¹⁷⁸. La usurpación violenta de tierras se agrava con el otorgamiento por el Gobierno de Títulos Mineros, pero el desplazamiento crece también en las áreas donde hay proyectos viales y energéticos.

223. Las empresas que promueven los agrocombustibles son responsables del desplazamiento forzado de miles de personas. «Las firmas Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones

¹⁷⁴ Testimonio de un desplazado por la violencia. Ovejas, Sucre, 5 de marzo de 2011.

¹⁷⁵ AFP citando fuentes de la oficina del ACNUR. 10 de noviembre de 2010.

¹⁷⁶ Tribunal Permanente de los Pueblos. Madrid, 14 y 15 de mayo de 2010.

¹⁷⁷ Germán Reyes, Asesor del Ministerio de Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

¹⁷⁸ Libro «Tenencia y abandono de tierras en Colombia». Capítulos 7 y 8. Acción Social de Presidencia de la República. Bogotá, diciembre de 2010.

Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas, S.A. y Agropalma están en el centro de una investigación por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica que podrían representarles penas de más de veinte años de cárcel a varios de sus ejecutivos». ¹⁷⁹

224. «Son casi cinco millones de hectáreas de tierra despojada o en riesgo de desplazamiento, sabemos dónde ocurrió, usaremos la información para darle peso judicial. Hay que combinar la estrategia administrativa y la judicial». ¹⁸⁰

225. Hay temor entre las comunidades campesinas y de mineros artesanales por la presencia de la empresa AngloGold Ashanti y su filial Kedahda, autorizada por el Gobierno a explorar y explotar oro en varias regiones del país. La empresa ya comenzó a dividir a las comunidades, coincidiendo con la llegada de grupos paramilitares y del ejército, el cual masacró a cinco miembros de una misma familia —incluido un bebé de 6 meses— en la vereda Potosí, del corregimiento de Anaime, en abril de 2004. Otro antecedente preocupante es que «Human Rights Watch» señaló a la AngloGold Ashanti por financiar grupos armados en la República Democrática del Congo. ¹⁸¹

226. Las organizaciones sociales y las comunidades del corregimiento de Anaime se oponen a la minería del oro y denuncian que el 86% de su municipio fue entregado por el Gobierno nacional a la AngloGold Ashanti sin consultarles y sin prever el impacto ambiental y humano de la minería en gran escala.

¹⁷⁹ «El Tiempo», 19 de mayo de 2010.

¹⁸⁰ Germán Reyes, Asesor del Ministerio de Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

¹⁸¹ Testimonios en Ibagué.

227. «Hay violaciones de los derechos humanos originadas en intereses económicos por la minería del oro, cobre, feldespato, esmeraldas, y hay una visión del desarrollo que se impone mediante la guerra a las gentes que tenemos una visión diferente, como pasa en el páramo de Santurbán, en Marmato, y en La Colosa por Cajamarca. Soy profesor de la Universidad del Tolima, pero me retiré de la docencia para defender a mi pueblo de la mayor barbaridad inventada por las transnacionales. No renunciamos ni al sentido común, ni a la soberanía, ni al rigor científico. No existe la minería ambientalmente sostenible y socialmente responsable. La AngloGold Ashanti me intimida a través de dos ex funcionarios. La SIJIN quiso individualizarme y reseñarme, dízque para comprobar mis huellas, pero tampoco juega limpio la Fiscalía. Todos trabajan para la AngloGold. Quieren que me desplace, pero de mi pueblo no me sacarán corriendo. Se vive una vez y se renace muchas veces, si es necesario muero por mi pueblo». ¹⁸²

228. «Bienvenidos a Colombia, el paraíso que será destruido por el patrón oro que gobierna al mundo. Hagan algo por nosotros, que somos personas humildes y perseguidas, somos seres humanos, no somos basura, defendemos nuestro territorio sin hacerle daño a nadie». ¹⁸³

229. «Se está consolidando un despojo de tierra, se está consolidando una inversión extranjera, especialmente en minería y palmicultura, que está relacionada con el desplazamiento forzado... Un 32% de las 280.000 personas desplazadas que se registraron en Colombia en el 2010 ocurrieron en zonas donde

¹⁸² Testimonio de LUIS CARLOS HERNÁNDEZ. Anaime, 7 de marzo de 2011.

¹⁸³ Testimonio en Anaime, 7 de marzo de 2011.

esas dos actividades económicas se han incrementado notoriamente».¹⁸⁴

230. «El 17 de abril de 2010 quince hombres armados que dijeron ser policías retirados y 60 macheteros se metieron en la finca “El Desengaño”, en Pital de Megua, y tumbaron y quemaron tres casas de campesinos con todas nuestras cosas. Me dijeron que no volviera, que ahí ya no tenía nada que buscar, que esas tierras las había comprado hace poco MANUEL POVEDA OSPINO, empresario de Barranquilla, a un alemán que era el dueño, pero eso es falso, pues ese señor murió hace veintiún años. Luego nos amenazaron a todos y hasta la jueza de Juan de Acosta fue amenazada y empezaron a tumbar las cercas. Nos dieron dos días de plazo para irnos, o nos iba a pesar. A otros vecinos un tipo, alias “Niñogrande”, les hizo lo mismo, les dijeron que se estuvieran quietos y no buscaran una mala hora. Tuvimos que dejar todo botado y desplazarnos. Somos 90 familias, más de 300 personas contando los de la finca de Matavidi y Guaymaral. Parece que quieren explotar minerales en la finca y por eso hay dinero de por medio y funcionarios corruptos del INCODER manipulando, y la policía de Tubará colabora con el empresario amenazando campesinos. El alcalde de Baranoa dice que ese problema no le toca a él y la Fiscalía tampoco actúa, aunque conoce los hechos. Lo mismo pasa con la Presidencia de la República. Hemos denunciado para evitar un derramamiento de sangre, pero nadie en el Gobierno nos pone cuidado».¹⁸⁵

231. «El municipio de Soledad, Atlántico, es un nido paramilitar de Los Mellós, Los Rastrojos y Los Paisas, que operan en el barrio La Central y vienen

ocasionando el desplazamiento interurbano de muchas personas bajo amenazas de muerte por el control del microtráfico de drogas, a estos desplazados se suman los miles de pobladores rurales del sur del Atlántico damnificados por la ola invernal, para quienes el Gobierno departamental no tiene soluciones de reubicación concreta. Los paras llegan a las casas de la gente y les obligan bajo graves amenazas de muerte a venderles su propiedad a muy bajo precio, luego llegan personas con contactos en las notarías con los documentos listos para firmar y legalizar el despojo».¹⁸⁶

232. Las familias campesinas, ocupantes desde hace cincuenta años de la finca «La Europa», en el municipio de Ovejas, Sucre, denuncian la presencia de hombres armados en sus tierras, quienes amenazan de muerte a las familias que han retornado al predio tras varios años de destierro. Temen un segundo desplazamiento forzado. «Aquí en este rancho vivía yo con mi papá, que ya era muy viejito, cuando se nos vino la guerra. Eso a diario era plomo por todos lados, entonces alzaba al viejo de la cama y lo escondía entre las palmas y le decía al oído “viejo, no mueva ni la pepa de los ojos que nos matan”. Un día en un camino el ejército me señaló diciendo que yo andaba con la guerrilla y me bajaron del burro para pegarme. Tuve que decirles que si me pegaban me iban a tener que matar ahí mismo porque me iba a defender a machete. No soy un delincuente y no les permito que actúen por fuera de la ley, les dije. De todos modos me tocó abandonarlo todo y llevarme al viejo a vivir al pueblo de Ovejas, donde se murió. Ahora que volvemos a la finca otra vez hay problemas, no hay autoridad que nos atienda y solucione lo de nuestro regreso en paz».¹⁸⁷

¹⁸⁴ Jorge Rojas, Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES.

¹⁸⁵ Testimonio de un campesino de la finca «El Desengaño», corregimiento de Pital de Megua, municipio de Baranoa, Atlántico.

¹⁸⁶ Testimonio en Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

¹⁸⁷ Testimonio en la finca «La Europa», Ovejas, Sucre, 5 de marzo de 2011.

233. «Yo nació, me crié y me casé aquí, en la finca «La Europa». Tenía hijos pequeños cuando llegaron grupos armados, y a mis hijos les dio por jugar al pistolero, eso eran carreras y un pum pum con palitos por las esquinas de la casa. Luego llegó la Infantería de Marina de Corozal y quemó 24 casas de campesinos, incluida la mía, destruyeron y quemaron todo dizque por ser auxiliares de la guerrilla, así que nos tocó irnos. Estuve veinte años desplazada y ahora que quiero volver otra vez hay gente armada aquí dizque trabajadores de la empresa Arepas Don Juancho. Temo que se repita lo de hace años, cuando mataron a tres personas al lado de mi casa. Luego mataron a MANUEL REYES, al hijo de Elisa Palencia, a LUIS MANUEL PÉREZ MERCADO, y a LINO su primo, a JORGE LUIS ACOSTA, a JUAN CHAMORRO y a CARLOS ARRIETA. Cuando fui a denunciar que nos habían desplazado y matado a muchos no me quisieron recibir la denuncia diciendo que aquí en «La Europa» no había pasado nada. Ahora es peor, y no se puede denunciar por miedo. Uno no sabe con quién está hablando en la Personería de Ovejas, pues todo lo que uno denuncia allá se termina sabiendo en la calle, y a los que han denunciado los han matado. Es que aquí manda la ley del silencio total».¹⁸⁸

234. La sedimentación de ríos como el San Jorge va generando nuevas suelos que tienen el carácter de tierras baldías propiedad de la nación y que son ocupadas por población campesina sin tierra, pero los latifundistas recurren a la violencia para desalojarlos y agrandar sus haciendas. «A 23 familias campesinas nos sacaron a plomo de caño Cholé en la Villa de San Benito Abad. En abril de 2009 los señores MOISÉS RODRÍGUEZ y GUSTAVO DE LA OSA pusieron unas bande-

¹⁸⁸ Testimonio en la finca «La Europa», Ovejas, Sucre, 5 de marzo de 2011.

ras rojas en nuestras casas, picaron el alambre de las cercas, nos amenazaron de muerte y nos quemaron las casas. Después unos tipos que dijeron ser Águilas Negras mataron a dos personas y nos sacaron de allá, pero la oficina de Acción de Presidencia de la República en Bogotá no nos aceptó la denuncia de desplazamiento forzado diciendo que era mentira porque en Colombia los paramilitares ya no existen».¹⁸⁹

235. «A la vereda San Francisco, municipio de Ovejas, llegaron los paramilitares atropellando y amenazando, como en El Salado, y diciendo “o se van de la tierra o se mueren”, y nos hicieron ir. Ya han desparecido varias veredas y caseríos de pueblos como Ovejas y Carmen de Bolívar, porque la gente se tuvo que desplazar y ahora las tierras son propiedad de la empresa AGROFORESTADORA DEL CARIBE, que siembra teca, pino, eucalipto, palma y acacia. De ahí ya no sale comida para la gente, ni para los animalitos».¹⁹⁰

236. «El sur del Tolima fue declarado como una zona con alto riesgo de desplazamiento, en realidad lo que quieren como en otros sitios del país es quitarle las tierras a los campesinos y desarrollar proyectos como los que tiene ISAGEN».¹⁹¹

237. «En Algeciras se vive una situación difícil desde la confrontación bipartidista de 1948 y por eso es un municipio que ha expulsado al 25% de su población, que son 23.942 habitantes; también hay desplazados por el invierno, avalanchas, caída de 10 puentes. Hay mucho desplazado que nos llega del Caquetá, hay presencia de las FARC y es un municipio militarizado con más de 3.000 soldados. En la vereda

¹⁸⁹ *Ibidem*. Véase <http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/desplazan-familias-de-chole-casco-urbano-de-san-benito>.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ Testimonio en La Marina, Chaparral, 8 de marzo de 2011.

El Silencio hay confrontaciones armadas con la población en medio. El propio presidente Uribe se refirió a un magistrado de este pueblo como “el guerrillero de Algeciras”». ¹⁹²

238. «En 1997, en el corregimiento Gaitania, del municipio de Planadas, mi esposo peleó con un hombre, fue acusado con la guerrilla, que nos amenazó y nos tocó desplazarnos». ¹⁹³

239. «En la finca «Las Pavas», corregimiento de Buenos Aires, municipio de El Peñón, veníamos trabajando 122 familias y fuimos desplazadas el 14 de junio de 2009 luego de que nos quemaran las casas y envenenaran nuestros alimentos. Nos hemos mantenido organizadas en ASOCAB, pero el ejército y los paramilitares nos persiguen, un profesor y uno de nuestros dirigentes tienen orden de captura. No tenemos ayuda, hay nuevas amenazas y la situación de la comunidad es caótica. El Gobierno le deja la finca al grupo DAABON para que siembre agrocombustibles como la palma africana en la isla de Papayal». ¹⁹⁴

¹⁹² Entrevista con RIGOBERTO SÁNCHEZ TAMAYO, Alcalde de Algeciras. Neiva, 9 de marzo de 2011.

¹⁹³ Testimonio en Algeciras. Huila, 9 de marzo de 2011.

¹⁹⁴ Testimonio en la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

240. «En el 2003 fueron desplazadas todas las comunidades de El Bajo Calima y en el 2005 retornamos, pero sin garantías. En esa región se construye el puerto de Aguadulce y el Batallón 80 de la Infantería de Marina trabaja para ellos, pues el 5 de noviembre de 2010 nos tumbó 11 ranchos, el 19 de enero nos tumbó 24 ranchos y los quemaron, y el pasado 7 de febrero nos quemaron 25 viviendas más, aunque le echan la culpa a la comunidad, pero los hemos visto hacerlo. Para atemorizarnos más cada rato hacen disparos y ahora nos llegaron las amenazas». ¹⁹⁵

241. «Desde el 21 de febrero se registran combates entre el Ejército y las FARC en los resguardos indígenas Awá de Magüi y Cuchilla del Palmar, municipio de Ricaurte. Ante la amenaza del fuego cruzado y el riesgo generado por la existencia de MAP y MUSE, 207 familias (1.035 personas, aproximadamente) han decidido concentrarse en los centros e instituciones educativas de los dos resguardos declarándose en “Mingas Permanentes de Confianza o Asamblea permanente”, como estrategia de autoprotección. Entre la población afectada se encuentran familias que fueron víctimas de un desplazamiento masivo en 2008». ¹⁹⁶

¹⁹⁵ *Ibidem*.

¹⁹⁶ Comunicado de la UNIPA. Pasto, 26 de marzo de 2011.

■ Violaciones del Derecho Internacional Humanitario, minas antipersonal

242. Los riesgos de la confrontación armada para la población civil son enormes. «Exigimos ahincadamente el respeto para nuestros territorios indígenas y que cese el accionar violento de las fuerzas en combate en un conflicto que no es nuestro y que nos tiene al borde de la desesperación. Sabemos que el cometido de las fuerzas del Estado es combatir la guerrilla, pero que lo hagan lejos de nuestras tierras, donde no pongan en peligro las vidas de nuestras gentes, sobre todo cuando hay inmensidades de territorios baldíos donde pueden combatir lejos de nuestros resguardos».¹⁹⁷

243. Aunque las guerrillas son responsables de ataques contra la población civil, las víctimas tienen temor de denunciar los hechos debido al control que ejercen en algunas zonas del país.

244. «La oficina en Colombia registró ataques sistemáticos contra la población y bienes civiles tales como masacres, asesinatos selectivos, reclutamiento y utilización de menores y amenazas atribuidos a las FARC-EP y al ELN. En varios casos, estos grupos, especialmente las FARC-EP, dirigieron acciones directamente contra la población civil empleando armas prohibidas y minas antipersonal y atacando instalaciones y bienes civiles. La mayoría de las infracciones se registraron en zonas remotas de departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo».¹⁹⁸

¹⁹⁷ Comunicado Comité Ejecutivo ORIVAC.

¹⁹⁸ Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22, numeral 36, p. 8. Febrero de 2011.

245. «A la guerrilla le dicen que es terrorista, pero al ejército se le puede decir lo mismo por lo que hace con nosotros».¹⁹⁹

246. Dentro de la alta oficialidad del ejército se ve como legal, normal, que los militares acampen en edificios públicos de las comunidades y pueblos, conducta proscrita por el DIH.²⁰⁰

247. Las tropas del Ejército Nacional acampaban en el salón comunal del casco urbano del corregimiento de La Marina, municipio de Chaparral. El Frente 21 de las FARC los atacó. «El jueves 3 de marzo de 2011 a media noche una explosión tremenda sacudió al pueblo. Pensé en mi negocio y en la familia. Luego hubo más explosiones en el salón comunal, ocupado hacía tres meses por el ejército y hubo ráfagas de fusil. Quedaron tres soldados muertos y dos heridos junto con varios civiles. Causaron daños a varias casas y al salón comunal en el que 40 niños y niñas recibían clases. Nos cogen de carne de cañón».²⁰¹

248. «Las tropas de la VI Brigada en el departamento del Tolima comenten a diario violaciones del DIH como: ametrallamientos y bombardeos cerca de centros poblados afectando a bienes de la población y a bienes civiles; desembarco y ocupación por tropas de centros educativos; controles ilegales sobre población civil; restricciones a la circulación de víveres, gasolina, fungicidas y abonos usados por los campesinos; bloqueos alimentarios que generan desabastecimiento a las comunidades; señalamientos a los dirigentes de la Asociación de Trabajadores Agrícolas del Tolima

¹⁹⁹ Testimonio en La Marina, Chaparral, 8 de marzo de 2011.

²⁰⁰ Reunión con el Brigadier General Emilio Torres Ariza, Jefe de Derechos Humanos y DIH del Ejército Nacional. Bogotá, 11 de marzo de 2011.

²⁰¹ Testimonio en el corregimiento La Marina, municipio de Chaparral, Tolima, 8 de marzo de 2011.

—ASTRACATOL— por parte de encapuchados en los retenes militares».²⁰²

249. «El ejército ocupa bienes protegidos como las escuelas y puestos de salud, destruye acueductos, amenaza junto con los grupos paramilitares en las veredas Vegas del Café, Café Las Pavas, Piñal y Palmira. Las comunidades campesinas de Río Blanco, corregimiento de Maracaibo, veredas Guadualejas, Los Pinos, Río Negro, Peñas Blancas, Campo Alegre y La Reina denuncian atropellos como el robo de mercados, la ocupación de la escuela Peñas Blancas, donde estudian 48 niños, que ven a diario apresamientos ilegales, amenazas, robos de ganado y actitudes hostiles que les hace temer por un próximo desplazamiento masivo. Ya comenzó el desplazamiento de los líderes de las comunidades con base en una lista que tiene el ejército, que además controla las reuniones comunitarias y hace censos ilegales. Los militares esconden sus nombres y rangos ante la población que debieran proteger».²⁰³

250. «En Rioblanco, Tolima, hay 8 muertos por ejecución extrajudicial desde el 2006, además el ejército, junto con encapuchados, monta combates en centros poblados, nos roba los ganados, dice que son de la guerrilla, detuvieron sin orden judicial al campesino FABIÁN VALERO en enero de 2011 y le dicen que deje las armas y se desmovilice; a EDISON MARTÍNEZ lo torturaron el 17 de diciembre de 2010 en el Batallón Pijao el teniente Rojas; desembarcan tropas y bombardean cerca de las viviendas, construyen helipuertos en los cultivos de los campesinos; amenazan a los niños de las veredas diciéndoles que "éstos son los futuros

guerrilleros, paga es matarlos", el hospital más cercano está a diez horas y la tropa en las escuelas. Por el río Cambrín estamos abandonados por el Estado, que solo manda soldados. En Rioblanco dizque somos "Zona roja", pero el terror llega con el ejército».²⁰⁴

251. «En Planadas el 14 de julio de 2010, a las 5 de la tarde, llegó el ejército de la Brigada Móvil nº 8 y echó ráfagas contra la población civil y las casas. Un tiro de fusil hirió en el abdomen a un niño de tres años de edad, que está muy mal en el hospital; el 11 de julio primero bombardearon la montaña destruyendo varias hectáreas de árboles; el 1 de enero de 2011 detuvieron sin orden judicial a 4 campesinos y dos menores de edad que estaban recogiendo leña; la Junta Comunal intervino, pero los militares ocultaron sus identidades y nos registraron a todos; luego nos tomaron fotos "para la base de datos"; nos restringen las compras de alimentos y nos los quitan en los caminos, quieren ponernos a aguantar hambre; nos obligan a malvender las tierras donde quieren poner bases militares».²⁰⁵

252. «En San José de Las Herosas el ejército acampa en las casas y en las escuelas, como en la vereda El Naranjal; la guerrilla hostigó al ejército, que se refugió entre los alumnos de la escuela, a los que tomó como escudo».²⁰⁶

253. En la vereda Betania, caserío de El Limón de Chaparral, el ejército del Batallón Baraya, al mando del cabo ORTIZ, está involucrando a menores de edad en el conflicto. «El ejército se metió en medio de unas balaceras y sin permiso en nuestras casas el 1 de marzo de 2011, y a los niños el ejército les daba dulces

²⁰² Informe de ASTRACATOL ante la VII Delegación Asturiana. Ibaqué, 7 de marzo de 2011.

²⁰³ Informe de las organizaciones sociales del Tolima a la VII Delegación Asturiana. Ibaqué, 7 de marzo de 2011.

²⁰⁴ Testimonio en La Marina, Chaparral, 8 de marzo de 2011.

²⁰⁵ *Ibidem.*

²⁰⁶ *Ibidem.*

y les preguntaba información de la guerrilla, que en dónde entran y que quiénes son».²⁰⁷

254. «El 3 de diciembre de 2009 en la madrugada un avión bombardeó y ametralló la finca «La Esperanza», vereda Alto Ambeima, por La Marina. Luego aterrizaron dos helicópteros militares cerca de la casa y me la allanaron, mataron varios animales, 3 vacas y toro y caballo, dañaron el acueducto, temo por la familia».²⁰⁸

255. «Estamos afectados por el ejército y por la guerrilla, pero a esta gente nos da miedo denunciarla porque no tienen ni obedecen leyes. Aquí pasan cosas graves, el ejército biseccionó delante de su familia a un campesino y no pasa nada».²⁰⁹

256. «En los sitios donde hay bombardeos quedan restos humanos por ahí regados y quedan restos de bombas y otro material de guerra que no es recogido por el ejército y que son un peligro para las comunidades».²¹⁰

257. «El 5 de febrero de 2011, en la vereda Altos de Río Neiva, Algeciras, hubo un enfrentamiento entre la 9ª Brigada del Ejército y las FARC, y más tropa llegó a la vereda El Paraíso, donde hicieron allanamientos sin orden judicial, hicieron un censo ilegal, ocuparon casas y escuelas».²¹¹

258. «En 1988 a mi esposo HÉCTOR JULIO CARDOZO lo mató la guerrilla. Al nieto le explotó cerca una mina y quedó sordo. Ese mismo año las FARC me mataron tres hijos: HUBERTI ROMERO, de 16 años; ELVER y ALVEIRO, y después me desaparecieron al menor

de todos, quedé sola y con obligaciones, sin reparación, pidiendo para sobrevivir».²¹²

259. «He sido concejal, soy militante y sobreviviente de la Unión Patriótica. El 4 de marzo de 1998 las FARC me mataron tres hijos: SALOMON ARIAS, CARLOS y la niña NINI JOHANA. Ese día hubo elecciones y los muchachos estaban retenidos por la policía, la guerrilla botó una bomba sobre el cuartel y murieron mis hijos. Pedí justicia pero me dijeron que no había nada que hacer por haber sido “una intervención de la guerrilla”. En el 2002 la guerrilla me mató otra hija, ELENA PATRICIA ARIAS, de 18 años, y luego me amenazaron de muerte por hablar con el ejército. El 8 de diciembre de 2002 fui apresado por un montaje judicial por ser “jefe de las milicias” y pasé doce días en el calabozo sin baño, incomunicado. Después, al bajar al pueblo un domingo, me hicieron dos tiros».²¹³

260. «A mi hijo lo mató el ejército el 27 de octubre de 2001 y le pusieron al cuerpo un uniforme camuflado y armas, fusil, pistola; al otro hijo me lo amenazan y lo señalan de ser “miliciano” y al otro hijo hace un año le quemaron la casa».²¹⁴

261. «El 15 de enero de este año, en la vereda Plumeros, dos jóvenes de la guerrilla llegaron a mi casa y me pidieron que les hiciera almuerzo. Al rato se oyeron tiros al otro lado del cerro y tropas del Batallón nº 55 del ejército llegaron a la casa, me sacaron con los cuatro hijos, nos interrogaron a todos, incluidos los niños. La guerrillera alias “Marly” fue masacrada en el patio de la casa, yo me tuve que desplazar por miedo».²¹⁵

²⁰⁷ *Ibidem.*

²⁰⁸ *Ibidem.*

²⁰⁹ *Ibidem.*

²¹⁰ *Ibidem.*

²¹¹ *Ibidem.*

²¹² Testimonio en Algeciras, Huila, 9 de marzo de 2011.

²¹³ *Ibidem.*

²¹⁴ *Ibidem.*

²¹⁵ *Ibidem.*

262. La guerrilla, y en particular las FARC, continuaron utilizando de manera generalizada minas antipersonal, algunas en áreas de uso de la población civil.

263. «La Unidad Indígena del pueblo Awá - UNIPA hace pública esta denuncia y rechaza categóricamente los hechos presentados el lunes 31 de enero de 2011 donde dos compañeros Awá, al movilizarse por nuestro territorio, fueron víctimas de una mina antipersonal, los hechos ocurrieron en el resguardo Hojal La Turbia, comunidad Peña Caraño, municipio de Tumaco, los nombres de los compañeros son Wilfrido Rodríguez, de 51 años, y su hijo José Richard Rodríguez, de 14 años, donde lamentable José Richard Rodríguez falleció. En otros hechos ocurridos el día 7 de febrero de 2011, siendo las 3:00 pm, María Fernanda Canticus Pascal, de 16 años; Rosa Aurelina Guanga, de 30 años, y Jhon Fabio Guanga, de 22 años, habitantes del Resguardo Hojal La Turbia, Comunidad Quejuambí La Liza, donde se desplazaban hacia su casa, fueron víctimas de una mina antipersonal sembrada en esta

zona, dejando gravemente herida a la compañera Rosa Aurelina Guanga, y con esquivas del artefacto explosivo a los otros dos Indígenas Awá».²¹⁶

264. «Colombia es el único país de América Latina en donde aún se siembran minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) de manera indiscriminada. Desde 1990 hasta mayo de 2010, 2.992 civiles han sido víctimas de minas y municiones sin explotar (sin contar los militares): de éstas, el 60% corresponde a hombres mayores de edad, el 27% a menores y el 13% a mujeres mayores».²¹⁷

265. Tropas del Batallón Palacé, del Ejército Nacional, operan al estilo paramilitar, sin distintivos ni identificación. Ponen retenes sin señalización a la salida de Trujillo, en el sitio Cementerio, y bajan a la población civil de los medios de transporte. Requisan e identifican personas sin estar facultados para ello.

²¹⁶ Comunicado de las AUTORIDADES INDÍGENAS AWÁ - UNIPA. Territorio de encuentro, convivencia, dialogo y paz. Nariño, 8 de febrero de 2011.

²¹⁷ «El Tiempo», 6 de noviembre de 2010.

■ Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

266. Colombia es uno de los siete países con más desigualdad del mundo y eso se refleja en el índice del 16% de su población en situación de extrema pobreza, es decir, que ingresa menos de un (1) dólar al día.

267. Los gastos en defensa afectan negativamente a la inversión social. «El país de América Latina que más dinero destina a gasto militar con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB) es Colombia, con el 3,7 por ciento. En 2009, en total se utilizaron ese año 10.055 millones de dólares en este rubro».²¹⁸

268. «El número de pobres en Colombia en 2009 fue de 19.899.144 personas. La pobreza extrema e indigencia pasó del 17,8% en 2008 a 16,4% en 2009, al ubicarse en 7.159.172 personas».²¹⁹

269. Algunas empresas contribuyen a la pérdida de calidad de vida de la población colombiana. «La empresa pública de la Comunidad de Madrid Canal de Isabel II y su grupo empresarial INASSA será acusada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos porque “su práctica empresarial como transnacional permite que sus empresas realicen actividades que atentan contra los derechos de los pobladores, usuarios y trabajadores, y desarrollen prácticas empresariales que encarecen el precio de los servicios públicos, minoran su universalidad, fomentan la opacidad de su gestión, precarizan a los trabajadores, menoscaban y dañan el

²¹⁸ Revista «SEMANA». Colombia, el país de América Latina que más destina de su PIB a gasto militar, 1 de junio de 2010.

²¹⁹ «PORTAFOLIO», 30 de abril de 2010.

movimiento sindical, contaminan la naturaleza, perjudican a las comunidades indígenas y reducen el patrimonio público de los ciudadanos».²²⁰

270. «La multinacional Carbones de Cerrejón Ltda., de capital suizo y británico, se implantó en Colombia en tierras indígenas y afrodescendientes rodeada de la violencia perpetrada por el Estado colombiano y por grupos paramilitares. Se han sucedido asesinatos de líderes opositores y la acción de la fuerza pública y los servicios de seguridad han provocado el desplazamiento de la población».²²¹

271. «La empresa mixta de Colombia ISAGEN ENDESA y la multinacional italiana Impregilo participan en el proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica sobre el río Sogamoso, en el nororiente de Colombia. La gestión, hasta ahora, ha sido tremendamente opaca, se ha denunciado la represión, persecución y asesinato de líderes sociales opuestos al proyecto. Además, se prevén fuertes impactos sociales y ambientales durante su construcción y puesta en marcha».²²²

272. «La multinacional española Unión Fenosa-Gas Natural ha tenido fuertes impactos en Colombia, Guatemala, Nicaragua y México. Ha sido consecuencia de la actividad de la multinacional para obtener grandes beneficios de un servicio público como la electricidad. Pero también ha sido la consecuencia de un conjunto de políticas dictadas por la banca multilateral, de la relación privilegiada entre la empresa y los gobiernos de los países citados, y del apoyo asociado a la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español».²²³

²²⁰ Tribunal Permanente de los Pueblos. Madrid, 14 y 15 de mayo de 2010.

²²¹ Tribunal Permanente de los Pueblos. Madrid, 14 y 15 de mayo de 2010.

²²² *Ibidem*.

²²³ STC TPP. Madrid, 14-17 de mayo de 2010.

273. Empresas como Unión Fenosa y Gas Natural son responsables del deterioro de la calidad de vida de los pobladores de la costa atlántica colombiana por los altos costos y mala calidad de sus servicios.²²⁴

274. El impacto negativo «también ha sido la consecuencia de un conjunto de políticas dictadas por la banca multilateral, de la relación privilegiada entre la empresa y los gobiernos de países como Colombia y Guatemala, y del apoyo asociado a la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español».²²⁵

275. Las reformas neoliberales del Código Sustantivo del Trabajo, realizadas en la década de los noventa en medio de la persecución a muerte contra los y las sindicalistas, convirtió a Colombia en un país donde las relaciones del trabajo quedaron en el marco de simples relaciones comerciales, por lo que es frecuente la tercerización, el trabajo sin derechos, sin seguridad social, y es muy alta la informalidad en el empleo.

276. «(...) el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) con Colombia y Perú, que se aprobó en mayo de 2010 en el marco de la presidencia española de la UE, con el que se hizo trizas la dinámica de integración de la Comunidad Andina de Naciones, además de plasmar gravemente la exclusión de las mayorías, se firmó sin consulta y consentimiento de los pueblos, manteniendo una total opacidad y priorizando evidentemente los intereses de minorías privilegiadas. El acuerdo de libre comercio es en sí mismo una violación integral de los derechos humanos, de los derechos laborales, de la libertad de expresión, de participación, de asociación; una vulneración de los derechos ambientales, culturales, a la alimentación y a la autodeterminación. Con su defensa y puesta en

marcha se beneficia a las empresas multinacionales y a algunos grupos de gran poder económico y político en Perú y Colombia. Los impactos en la población trabajadora, la desarticulación sindical, los estragos en las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, en los jóvenes y las mujeres, conllevarán una pérdida de derechos, un agravamiento del conflicto social y armado en el caso colombiano, así como un aumento de las desigualdades regionales, de los daños ambientales irreparables y un marcado deterioro de derechos de trabajadores y trabajadoras en Europa. El ataque a los derechos humanos, la inequidad desbordante, el desempleo, el subempleo, la debacle bancaria, la crisis alimentaria y ambiental y la migración derivada se agravarán en Europa, en Colombia y en Perú».²²⁶

La inequitativa concentración de la propiedad de las tierras continúa siendo fuente de pobreza y exclusión, así como de conflictos sociales que afectan a comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrocolombianos.

277. Las iniciativas legislativas del Gobierno que cursan en el Congreso de la República sobre propiedad, tenencia y uso de las tierras, son motivo de preocupación para las organizaciones campesinas y de víctimas, quienes denuncian que se pretende legalizar el despojo de millones de hectáreas de tierra, eliminar el concepto de Unidad Agrícola Familiar y convertir las zonas de reserva campesina en zonas de desarrollo empresarial, siguiendo los planes e intereses de los agroempresarios, narcotraficantes, latifundistas y multinacionales, en detrimento de la economía campesina.²²⁷

²²⁴ Testimonio en Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

²²⁵ STC TPP. Madrid, 14-17 de mayo de 2010.

²²⁶ Conclusiones Seminario Internacional «Contextos de aplicación de acuerdos económicos y de garantías de los derechos humanos». Oviedo, Asturias, 24-26 de noviembre de 2010.

²²⁷ Entrevista con el Comité Ejecutivo de FENSUAGRO-CUT. Bogotá, 13 de marzo de 2011.

278. Es frecuente el uso de la violencia paramilitar por parte de latifundistas, políticos, empresarios nacionales, empresas multinacionales y narcotraficantes para despojar a las comunidades rurales de tierras y territorios sobre los cuales hay planes de inversión o perspectivas de valorización, afectando de manera

notoria a los predios baldíos y a las fincas poseídas por comunidades con títulos precarios de propiedad.

279. Tales son los casos de las fincas «Las Pavas» (El Peñón, sur de Bolívar), «La Europa» (Ovejas-Sucre) y «El Desengaño» (Pital de Megua, Baranoa-Atlántico).



■ Pueblos indígenas y afrocolombianos

280. En Colombia existe la discriminación por razones étnicas. «En municipios con población afrocolombiana superior al 30% (108 municipios de los más de 1.000 del país) el índice de desarrollo humano evidencia grandes rezagos frente a los promedios del país; por ejemplo, en coberturas de acueducto, esperanza de vida y tasas de natalidad y mortalidad infantil. Los cinco departamentos del país con mayor porcentaje de población afrocolombiana son los que viven con mayor pobreza y peor calidad de vida: Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó y Nariño».²²⁸

281. La población indígena fue en el 2010 especialmente atacada y vulnerable.

282. Reconocidos por la Constitución política y excluidos en la práctica, los pueblos indígenas están siendo llevados al borde de la extinción, al tiempo que la población afrocolombiana está siendo despojada con violencia de sus territorios.

283. El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas señaló que «la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia continúa siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante, a pesar del reconocimiento constitucional de estos derechos».²²⁹

284. El Gobierno colombiano está incumpliendo el mandato de la Corte Constitucional contenido en

²²⁸ Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Comunicado del 21 de marzo de 2011.

²²⁹ Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (UNPFII-ONU). Bogotá, 9 de julio de 2010.

los Autos 004 y 005 del 2009, que le ordena crear con urgencia planes de salvaguardia para los pueblos indígenas y afrodescendientes.

285. En el 2010 se agravó la violencia contra los pueblos indígenas colombianos. Fueron asesinados 122 aborígenes, 10 más fueron desaparecidos y 1.146 fueron forzados a desplazarse. Entre las personas asesinadas hay 5 niños y 17 mujeres.²³⁰

286. «Los indígenas sufren cada vez más ataques en Colombia. Se les está matando y amenazando, se les está obligando a participar en el conflicto armado y se les está echando de sus tierras. Ya es hora de que el Gobierno colombiano asuma seriamente sus obligaciones y actúe de inmediato para proteger a los pueblos indígenas».²³¹

287. Las violaciones del Derecho Internacional Humanitario de los pueblos indígenas son numerosas y por todas las partes en conflicto. El CRIC reporta a julio de 2010 un total de 237 atentados a la subsistencia de la población civil, 122 atentados y amenazados, 96 homicidios, 56 detenciones arbitrarias, 28 hostigamientos, 18 heridos por minas antipersonal, responsabilidad en un 45% por la fuerza pública, 41% de la guerrilla y el resto por paramilitares y otros actores.²³²

288. También hubo 103 amenazas de muerte, la mayoría en El Cauca y Nariño, y algunas de ellas colectivas, 69 personas heridas, 40 detenciones arbitrarias, 10 desapariciones forzadas, la mayoría miembros del pueblo Awa Cuakier, resguardo Pipalta.²³³

²³⁰ Informe de la ONIC. Bogotá, 15 de enero de 2011.

²³¹ Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional. Bogotá, 22 de febrero de 2011.

²³² Programa de Derechos Humanos del CRIC. Informe a julio de 2010.

²³³ Informe de la ONIC. Bogotá, 15 de enero de 2011.

289. Sobre la autoría de estas violaciones «... los actores estatales siguen siendo los principales responsables de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Encontramos que los grupos insurgentes, junto con otros actores, ocupan el segundo lugar».²³⁴

290. Las guerrillas son señaladas por su responsabilidad en violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. «Las acciones de estos grupos insurgentes, que comprometen directamente a las víctimas indígenas, son el uso de armas o minas prohibidas por medios ilícitos de guerra; el reclutamiento de menores, el ataque a objetivo militar; los ametrallamientos, bombardeos, ataques indiscriminados por métodos ilícitos de guerra; la muerte de no combatiente por combate; las heridas de no combatientes por combate; las amenazas colectivas por persecución política; entre otras».²³⁵

291. Los pueblos más afectados en 2010 por violaciones de los derechos humanos fueron: nasa, awá, zenú, wayúu, sikuani, embera, guayabero, pasto, quillacinga, tucano, u'wa, guambianos, pijao, huitoto y yukpa.²³⁶

292. «Para enfrentar los proyectos del capital internacional y para mostrar las violaciones de los derechos humanos nos movilizamos las comunidades en un paro departamental el 12 de octubre de 2010. Nos indigna que para facilitarle el saqueo a las petroleras el Ministerio del Interior haya certificado que “no existen pueblos indígenas en el Alto Putumayo”. Soy el gobernador del pueblo Nasa, del Alto Putumayo,

²³⁴ Informe de la ONIC. Estado de los Derechos de los Pueblos Indígenas 2010.

²³⁵ *Ibidem*.

²³⁶ *Ibidem*.

existimos y denunciemos el plan IIRSA, y denunciemos a la policía de carreteras que, entre Puerto Asís y Villagarzón, nos sindicó de ser el Frente 42 de las FARC; como estoy amenazado me asignaron dos policías para el “Plan Padrino”, pero les dije que “yo no acepto su protección porque son ustedes mismos los que nos señalan, amenazan y golpean”».²³⁷

293. El Gobierno y las empresas no cumplen el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, que establece la consulta previa a las comunidades y pueblos para lograr su consentimiento previo, libre e informado sobre el desarrollo de proyectos de inversión en los territorios colectivos o resguardos indígenas.

294. Sin embargo, «Colombia es reconocida como ejemplo mundial en materia de consultas previas para comunidades étnicas, destacó este sábado la Viceministra del Interior, Viviana Manrique, durante el Consejo Comunal: Balance de Gobierno 2002-2010 ‘Trabajo, hechos y corazón’, que se realizó en Florencia (Caquetá)».²³⁸

295. Reiteradamente los pueblos indígenas han exigido el retiro del personal armado, legal o ilegal de sus territorios, lo cual afecta de modo especial al pueblo awá, que ha sufrido tres masacres.

296. El 26 de agosto de 2009 fueron asesinados 14 awás, incluidos 6 menores de edad y un bebé de ocho meses, en el resguardo de Gran Rosario, Nariño.

297. El 4 de febrero las FARC mataron a 15 awás, entre ellos 2 mujeres embarazadas, en el municipio de Barbacoas, Nariño. El 12 de febrero fueron asesinados 10 indígenas awá del resguardo Sandé por las FARC.

²³⁷ Testimonio en el V Encuentro del MOVICE. Bogotá, 10 de marzo de 2011.

²³⁸ Ministerio de Interior y Justicia. Florencia, 22 de mayo de 2010.

298. «A las FARC y el ELN que no pongan más en riesgo la vida de la población indígena, que respeten la vida y el territorio de nuestro pueblo, que no nos vinculen en un conflicto armado que no nos pertenece, y que se retiren de nuestro territorio porque con sus acciones están convirtiendo a nuestra madre en un cementerio. A la fuerza pública que cumpla con su deber constitucional de proteger a la población civil,

y en especial a la población indígena, sujetándose en todo momento al respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario —DIH— y al ejercicio pleno de nuestra Jurisdicción Especial Indígena».²³⁹

²³⁹ Comunicado de las Autoridades Indígenas Awá - UNIPA. Territorio de encuentro, convivencia, dialogo y paz. Nariño, 15 de noviembre de 2010.



■ Conclusiones

El nuevo tono del gobierno presidido por Juan Manuel Santos Calderón es positivo, pero aún no se refleja en una mejoría del estado de los derechos humanos.

En el marco del conflicto armado continuaron los ataques, hostigamientos, amenazas de muerte, asesinatos, desapariciones forzadas y apresamientos ilegales contra personas pertenecientes a grupos humanos especialmente vulnerables, como sindicalistas, dirigentes campesinos, población indígena y afrocolombiana, población LGTB, opositores y opositoras políticas, periodistas, testigos y víctimas que exigen restitución de las tierras despojadas con violencia.

Bajaron las ejecuciones extrajudiciales, se incrementaron las masacres y las amenazas de muerte, así como los homicidios en las principales ciudades del país.

Los grupos paramilitares, o BACRIM, delinquen con impunidad en casi todos los departamentos del país donde quedaron intactas las estructuras de apoyo político y económico. Además de bandas dedicadas al narcotráfico, también son una herramienta de control social y político mediante el terror, tanto en las zonas rurales como en las ciudades.

Todas las partes involucradas en el conflicto armado (ejército, grupos paramilitares y grupos guerrilleros) violan los derechos humanos y el DIH, siendo especialmente graves la implicación de miembros de la fuerza pública.

El Estado continúa evitando el ingreso de comisiones de derechos humanos a las cárceles del país,

desde donde llegan denuncias que constituirían trato cruel, inhumano y degradante, especialmente contra presos y presas por delitos políticos.

Los pueblos indígenas y afrocolombianos continúan sin efectiva protección, como lo ordenó la Corte Constitucional, y muchos de ellos están al borde de la extinción.

La impunidad cubre la enorme mayoría de violaciones de los derechos humanos y del DIH.

El país apenas comienza a conocer la dimensión de la desaparición forzada de personas y los actos de violencia sexual, así como el uso de menores de edad en el conflicto armado.

Colombia tiene un importante crecimiento económico que no se compadece de las elevadas cifras de pobreza y exclusión que la convierten en uno de los países más desiguales del mundo.

Sorprende positivamente el que, a pesar de las persecuciones, la sociedad colombiana ha logrado preservar importantes niveles de cohesión y organización social en defensa de los derechos humanos.

Hay empresas transnacionales que estarían participando en la estrategia narco paramilitar, de modo especial las dedicadas a la minería, el petróleo, la energía y el sector agroalimentario. Todas las multinacionales se benefician de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los trabajadores y trabajadoras, sindicalistas, comunidades campesinas y los pueblos indígenas y afrocolombianos.

En el curso de los cerca de cincuenta años del conflicto armado colombiano, la violencia sexual es empleada como arma de guerra por todos los grupos armados (fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros). El objetivo es sembrar el terror

en las comunidades usando a las mujeres para conseguir sus fines militares. Pero además se utiliza como forma de tortura y de castigo, como control sobre la población, como medio para imponer férreos códigos de conducta, como instrumento de venganza y de presión, o como herramienta para lesionar y aterrorizar al enemigo.

El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una práctica habitual que ha pasado a formar parte integral del conflicto armado. Sin embargo, la persistente ocultación y negación de este

delito por parte del Estado colombiano ha permitido perpetuar un entorno de impunidad en el que este tipo de delitos no se investigan, ni se enjuician, ni se castiga a los responsables. Dentro de los grupos de población, las mujeres afrocolombianas y las mujeres indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual dada la triple discriminación que sufren marcada por su género, por su etnia y por su pobreza.²⁴⁰

²⁴⁰ Informe de Oxfam Internacional. «La violencia sexual en Colombia. Un arma de guerra», 9 de septiembre de 2009.



■ Recomendaciones

Al Gobierno de Colombia:

- Convertir el buen tono en acciones de gobierno con impacto positivo en los derechos humanos.
- Resolver las inequidades económicas que generan exclusión política y violencia social.
- Proteger de inmediato a los pueblos indígenas y afrocolombianos como ordenó la Corte Constitucional.
- Ordenar a la fuerza pública el respeto del DIH y la aplicación del principio de distinción entre combatiente y población civil.
- Depurar los archivos de inteligencia del Estado de los datos personales y las atribuciones hechas contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
- Combatir a los grupos paramilitares como un asunto de seguridad nacional y dismantelar sus estructuras de apoyo económico y político.
- Fortalecer el sistema judicial para acabar con la impunidad y dar pasos para eliminar los conflictos de competencia que plantea la justicia penal militar ante delitos cometidos por miembros de la fuerza pública.
- Proteger de manera efectiva a las personas en riesgo pertenecientes a los grupos humanos especialmente vulnerables, de manera urgente a quienes representan procesos de exigencia de restitución de tierras despojadas, así como a las víctimas y a los testigos.

- Tener cuenta la legislación internacional y el parecer de las víctimas y de sus organizaciones en lo concerniente a los elementos de la justicia transicional, las leyes de reparación y de restitución de tierras, las normas sobre verdad y memoria y no discriminar a las víctimas por la calidad de su victimario.
- Abrir espacios de diálogo con las guerrillas que sienten bases para una solución política al conflicto social y armado.

Al Gobierno de España:

- Monitorear las actividades de las empresas transnacionales españolas en Colombia y la asunción de su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos y desplazamientos forzados provocados.
- Respetar el Derecho de Asilo, facilitando la salida de refugiados y refugiadas de Colombia mediante el otorgamiento de visados y la concesión de protección internacional permanente (Estatutos de Asilo), así como el reforzamiento y la mejora de los programas de protección temporal para personas en riesgo.
- No ratificar acuerdos, como el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Colombia y Perú, hasta que el Gobierno de Colombia garantice en la práctica el respeto del derecho a la vida a los y las sindicalistas, el ejercicio de la actividad sindical y la observancia de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras colombianas.
- No vender armas a Colombia, dado su conflicto interno y la responsabilidad del gobierno y la fuerza pública en graves violaciones de los derechos humanos.

A los grupos armados ilegales:

- Reconocer y respetar el DIH.
- Dejar en libertad a los combatientes menores de edad, a las personas secuestradas, rehenes y prisioneras de guerra.
- Suspender la siembra de minas antipersonal y el reclutamiento de menores.

A los gobiernos del mundo:

- No vender armas a Colombia por tener un conflicto armado interno y por los antecedentes de que su fuerza pública está inmersa en graves violaciones de los derechos humanos.

- Abstenerse de firmar tratados de comercio con el Gobierno y la patronal colombiana hasta tanto se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores y los sindicalistas.
- Abstenerse de hacer cooperación al desarrollo que sea utilizada como mecanismo de legitimación por la fuerza pública en las regiones donde viola los derechos humanos.
- Estimular procesos de diálogo para una solución política negociada del conflicto social y armado.
- Interesarse por la situación invisibilizada de los prisioneros y prisioneras por delitos políticos.



■ Anexos

Instituciones y organizaciones sociales entrevistadas

►► ATLÁNTICO

Fundación Infancia Feliz

FCSPP

REDHER

Asociación Campesina de Baranoa

ASOMUVICA, Asociación de Mujeres víctimas del conflicto armado

AFUSODO, Asociación de Familias unidas por un solo dolor

ACEU

FEU

►► SUCRE

FENSUAGRO - CUT

IPO

MOVICE Capítulo Sucre

CPDH

Cabildo Vilú/ONIC, pueblo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento

Empresa Comunitaria Finca La Alemania de San Onofre

Organización campesina de La Ciénaga de Cholé, de San Benito Abad

Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos de Sucre, ASOTRACDES

Cárcel de Corozal

ACEU Sucre

Asociación Nuevo Porvenir de Ovejas

Corporación Justicia y Equidad

►► TOLIMA

Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima

Reiniciar

SIMATOL

Asodemuc

CUT Seccional Tolima

PCC Tolima

CPDH

Astracatol

Coordinador Nacional Agrario

Delegaciones campesinas de Planadas, Rioblanco, Dolores y Chaparral

Colectivo estudiantil Camilo Alberto Zuluaga

ECOTIERRA

Asociación de Defensa de la Cuenca del Anaime

Mesa Departamental de Derechos Humanos

Delegaciones campesinas de los municipios de Río Blanco, Planadas, Chaparral, San Antonio, Dolores

►► HUILA

Alcalde de Algeciras

Municipio de Algeciras

CPDH

Sindicato de Trabajadores Campesinos del Huila
ANDAS
Defensoría del Pueblo
OACNUDH
OACNUR Huila
PNUD Huila y Caquetá
Corporación de Profesionales del Sur de Colombia
Coordinación Colombia-Europa-EUA

» VALLE DEL CAUCA

Municipio de Trujillo
ASFAVIT

Siglas utilizadas

ACEU: Asociación de Estudiantes Universitarios.
ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
AFUSODO: Asociación de Familias Unidas por un solo dolor.
AFRODES: Asociación de Afrocolombianos Desplazados.
ANTHOC: Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Colombia.
ASFAVIT: Asociación de Familias Víctimas de la masacre de Trujillo.
ASOCAB: Asociación Campesina de Buenos Aires.
ASPU: Asociación de Profesores Universitarios.
ASTRACATOL: Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima.
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia.
BACRIM: Bandas Emergentes Criminales.
BP: British Petroleum Company.
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
CODDEHU Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos.
CRIC: Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca.
CTI: Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía.
CUT: Central Unitaria de Trabajadores.
DAABON: Grupo Dávila Abondano.
DAS: Departamento Administrativo de Seguridad.
DIH: Derecho Internacional Humanitario.
ESMAD: Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional.
FEU: Federación de Estudiantes Universitarios.
FECODE: Federación Colombiana de Educadores.
FCSPP: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
ELN: Ejército de Liberación Nacional.
ERPAC: Ejército Revolucionario Popular Anticomunista.
FARC-EP: Fuerzas Armadas GAULA: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal.
FENSUAGRO: Federación Sindical Unitaria Agropecuaria.
INPEC: Instituto Penitenciario y Carcelario.
INDEPAZ: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

INCORA: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
IIRSA: Iniciativa de Integración Regional Sudamericana.
LGBT: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.
MAP: Minas Antipersonal.
MAPP/OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos.
MUSE: Municiones Sin Explotar.
MOVICE: Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
ONU: Organización de Naciones Unidas.
OACNUDH: Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

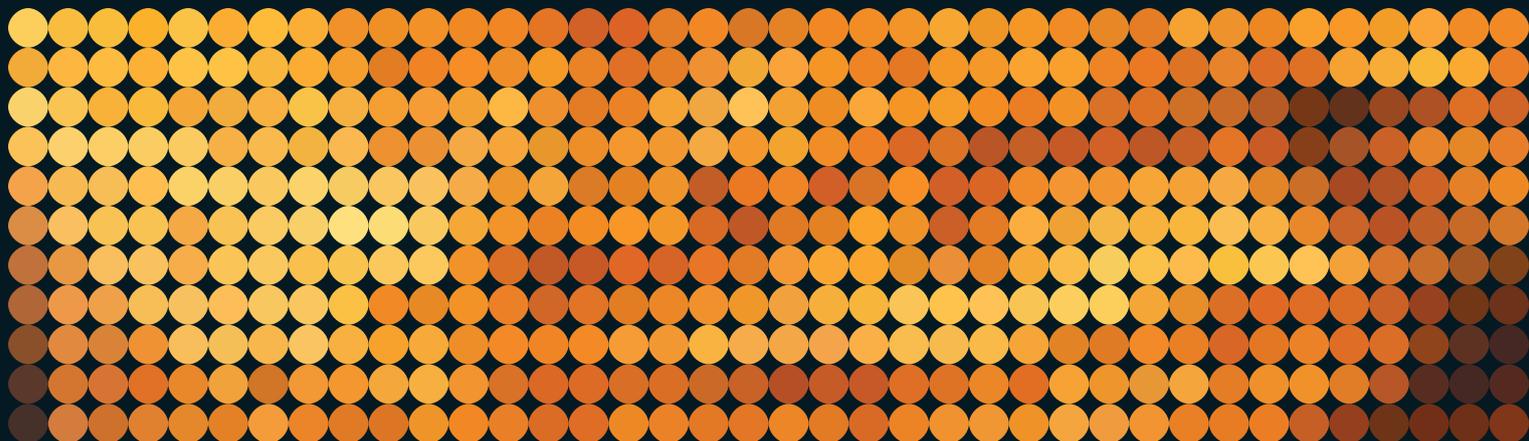
OEA: Organización de Estados Americanos.
PCC: Partido Comunista Colombiano.
PDA: Polo Democrático Alternativo.
REDHER: Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
SINTRABECOLICAS: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas.
SINTRAGRIM: Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta.
SIJIN: Servicio de Investigación Judicial de la Policía Nacional.
SIMATOL: Sindicato de Maestros del Tolima.
SUTEC: Sindicato Unitario de Trabajadores de la Enseñanza del Cauca.
TLC: Tratado de Libre Comercio.
UIS: Universidad Industrial de Santander.



GOBIERNO DEL PRINCIPALDU D'ASTURIAS
CONSEYERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA



VII INFORME DE LA DELEGACIÓN ASTURIANA DE REPASU A LA SITUACIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 2011



VII INFORME DE LA DELEGACIÓN ASTURIANA DE REPASU A LA SITUACIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN **COLOMBIA** 2011

ÍNDICE

■ Presentación	3
La VII Delegación Asturiana	5
■ Entamu	6
Colombia, datos xenerales.....	6
Metodoloxía.....	6
Oxetivos.....	6
Rexones visitaes.....	7
■ Violaciones de los derechos humanos	8
1. Execuciones estraxudiciales y masacres	22
2. Amenaces	25
3. Desapaición forzada.....	31
4. Tortures, tratu cruel o degradante.....	32
5. Detenciones arbitrarias y situación carcelaria.....	33
6. Violencia sexual, neños/es.....	36
7. Impunidá.....	38
8. Desplazamientu forzáu	43
■ Violaciones del Derechu Internacional Humanitariu, mines antipersones	48
■ Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales	52
■ Pueblos indíxenes y afrocolombianos	55
■ Conclusiones	58
■ Encamientos	60
Al Gobiernu de Colombia.....	60
Al Gobiernu d'España	60
A los grupos armaos ilegales	61
A los gobiernos del mundu	61
■ Anexos	62
Instituciones y organizaciones sociales entrevistaes.....	62
Sigles utilizaes.....	63

■ Presentación

La solidaridad internacional y la defensa y promoción de los Derechos Humanos tuvieron presentes desde el principio y constituyen, hasta anguaño, los elementos fundamentales de las acciones políticas de cooperación y ayuda al desarrollo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Y es tal este compromiso que para seguir progresando firmemente en esta línea configuráronse herramientas específicas que garanticen un avance cuantitativo y cualitativo.

Por un lado, hay que destacar la «Comisión Asturiana de Derechos Humanos», en la que se centra el trabajo de asesoramiento y el apoyo técnico correspondiente a la propia Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Y por otro, la «Estrategia Asturiana de Derechos Humanos», un mecanismo de orientación y evaluación de las políticas públicas de Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos representa un ideal común por el que todos los pueblos y naciones debemos esforzarnos para que tanto los individuos como las instituciones los promovamos y los respetemos. En diciendo esto, también es necesario constatar que la realidad actual en muchísimas partes de este mundo globalizado, donde los intereses políticos, económicos y belicistas prevalecen por encima de los valores colectivos y individuales de libertad, igualdad, justicia y solidaridad, está mucho a la hora de consolidarse como una promesa universal de obligación para todos y todas.

La vulneración de los derechos humanos causa y agudiza el empobrecimiento ya impide el desarrollo de individuos y poblaciones. Al mismo tiempo, la si-

tuación de injusticia social y pobreza embreda a nuevas violaciones de los derechos humanos, provocando un círculo vicioso.

Millones de personas carecen del acceso a los derechos básicos y necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado. Las condiciones de insalubridad, falta de acceso al agua potable, saneamiento, atención médica, seguridad o educación que sufren decenas de millones de personas son, en mayor parte de las ocasiones, fruto de decisiones de gobiernos, empresas y otros agentes con intereses económicos. Por eso los que ostentamos responsabilidades públicas y nos sentimos herederos de los valores más nobles que tienen que estar presentes en cualquier sociedad y democracia avanzada debemos estar solertes a aquellos conflictos sobre los que es necesario llamar la atención y evitar que se silencien, que queden abandonados a la suerte o condergades al ostracismo.

Colombia es un buen ejemplo. Un país sumergido en un conflicto político, social y militar, con más de cincuenta años de historia, con sus consecuencias, que lo condergan a asitiarse en un lugar destacado en el ámbito de las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El cambio gubernamental de discurso unió por nuevo presidente Santos en su acompañamiento con hechos palpables que demuestran ese compromiso firme del Gobierno colombiano para instituir un verdadero Estado de Derecho, que acabe con las desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes sociales. Esta es una cuestión clave que puede visualizarse en las conclusiones extraídas de determinados informes de organismos y organizaciones internacionales, de las agencias dependientes directamente de las mismas Naciones Unidas.

Cola VII visita de la Delegación Asturiana a Colombia, na que per primer vegada participó una representación del Gobiernu Vascu personalizada na directora xeneral de Derechos Humanos, quedó demostrao otra vuelta la implicación política y la solidaridá institucional de la que gocia'l problema colombianu nel nuestro Estáu. Esti trabayu enmárcase na llínea d'acompañamientu y denuncia internacional del dañu a los derechos individuales y colectivos más elementales que recueye'l Plan Director de la Cooperación Asturiana (2009-2012).

Equí, tamién ye mester resaltar los resultaos del Programa d'atención temporal a activistes y defensores de Derechos Humanos que, dende hai once años, venimos desenvolviendo dende'l Gobiernu d'Asturies y que garantizó protección a un total de 76 persones. Estos exemplos demuestren que l'Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu nun permanez neutral nin impasible ante situaciones dañibles de derechos humanos.

Esti informe pretende ser un preséu más al serviciu de la sociedá asturiana y a la comunidá internacional. Un espeyu de les distintes espresiones y facetes que son consecuencia directa de la enemistá recíproca que caltienen ente sí los diferentes actores d'esti profanable conflictu. A lo llargo los díes que tuvimos viviendo en carne propio la realidá colombiana fuimos testigos directos de determinaos contestos, ambientes o situaciones que embreden a reafirmar esa inesplicable humildación política, social y humana que tamién forma parte d'esta sociedá imperfecta na que vivimos.

Dicía'l filósofu que «l'home ye un llobu pal home» y en dellos momentos, al tenor de lo vivió, nun-y faltaba razón dalguna: asesinatos, desapareiciones, desplazamientos forzaos, humildaciones y violaciones, amenaces, presiones, afalamientos y controles ferriales

sobre comunidaes... formen parte d'esa idiosincrasia que se vive nes tierres de la otra parte del océanu.

Siéntome na obligación de revelar y desvelar ante la opinión pública dalgunos de los fechos que causaron plasmu demientes la nuesa visita. Ún d'ellos, lo asocedió díes enantes de la nuestra visita nel Correximientu de la Marina (conceyu de Chaparral), con un balance de tres militares y un civil muertu y otru mancáu. L'otru, l'aparente división esistente ente dellos departamentos del gobiernu colombianu actual a la hora d'esclariar y/o depurar responsabilidaes imputaes a dalgunes estructures xerárquiques del Exércitu que, en vez de dir a la escontra d'una salida definitiva del llaberintu, enzanca entá más el mentáu oxetivu.

Como de conclusión, sí me prestaría conseñar tres cuestiones finales. La primera d'elles, animar a toles partes armaes (fuercies militares del Estáu, paramilitares y grupos guerrilleros) pa que depongan l'usu de les armes y se comprometan col respetu y cumplimentu de los Derechos Humanos y del Derechu Internacional Humanitariu. La segunda d'elles, que'l Gobiernu colombianu seya'l que lidere un procesu de paz verdaderu que fine esti conflictu actuando con tol pesu de la llei y la xusticia contra quien correspuenda, seya quien seya. La tercera y cabera, faer un llamáu a la Comunidá Internacional, incluyida la española y la asturiana, pa que tea sollerte a los asocedíos que se produzcan en Colombia, esixendo'l compromisu firme y seriú de les autoridaes colombianes pa liderar l'arranque d'un mecanismu que traiga consigo un final dialogáu y negociáu ente toles partes implicaes.

❖ **Marcos Cienfuegos Marqués**

Director de l'Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu

La VII Delegación Asturiana

La visita de la VII Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia fízose ente'l 6 y el 12 de marzu de 2011.

La Delegación tuvo conformada por:

- **Marcos Cienfuegos Marqués**, Director de l'Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu.
- **Inés Ibáñez de Maeztu**, Directora de Derechos Humanos del Gobiernu Vascu.
- **Leire Lasa Fernández**, de la Comisión Española d'Ayuda al Refuxáu n'Euskadi, CEAR-Euskadi.
- **Javier Arjona Muñoz**, de SOLdePAZ PACHAKU-TI.
- **Javier Orozco Peñaranda**, coordinador del Programa Asturianu d'Atención a Víctimes de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia.



■ Entamu

Colombia, datos xenerales

Xefe del Estáu y del gobiernu: Juan Manuel Santos Calderón (7 d'agostu 2010-2014).

Pena de muerte: abolicionista pa tolos delitos.

Población: 45,7 millones.

Esperanza de vida: 72,7 años.

Mortandá infantil (<5 años) (h/m): 30/22 por cada 1.000.

Población adulta alfabetizada: 92,7 por cientu.

Población afrodescendiente: apros. 11%.

Población indíxena: 102 pueblos, apros. 1,5 millones de persones.

Pueblu Rom o xitanu: apros. 5.000 persones.

Idioma oficial: el castellán en tol país y les 64 llingües indíxenes nos sos territorios, amás del bandé, el palenqueru y el romanín.

El salariu mínimu mensual llegal nel 2010 foi 200 euros.

Colombia formalmente ye un Estáu social de derechu, entamáu en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de les sos entidaes territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada nel respetu de la dignidá humana, nel trabayu y la solidaridá de les persones que la integren y na prevalencia del interés xeneral (Art. 1º de la Constitución Política del 2001).

L'Estáu colombianu ratificó: el Pactu Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pactu Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, les Con-

venciones de Xeneva y los sos Protocolos adicionales, la Convención de la ONU sobre la Muyer, l'Estatutu de la Corte Penal Internacional, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penes crueles, inhumanos o humildantes, y el Conveniu 169 de la OIT sobre Pueblos Indíxenes.

Según la Constitución de Colombia estos Pactos y Convenciones ratificaes son d'obligatoriu cumplimientu, inclusive baxo estaos d'escepción tendríen que prevalecer nel orde internu.

Nel contestu del conflictu armáu, aplícase tamién les normes consuetudinaries y Convencionales del Derechu Internacional Humanitariu (DIH).

Metodoloxía

El presente informe ye productu del trabayu de campu de la Delegación Asturiana en cinco rexones del país, que toma la receición de testimonios de les víctimes y/o los sos familiares, xuntes con organizaciones de derechos humanos y coles autoridaes civil y militar, documentos ya informes d'organizaciones especializaes en derechos humanos y rexistros de los medios de comunicación.

Oxetivos

1. Conocer la situación de los Derechos Humanos en cinco departamentos.
2. Informar de les sos constataciones a les instancies pertinentes nel Estáu español, Xunión Europea, ONX, OEA y OIT.
3. Contribuyir al espardimientu y protecciónde los Derechos Humanos en Colombia.

Rexones visitaes

Atlántico

Correximientu Pital de Megua, conceyu de Baranoa.

Conceyu de Galapa.

Conceyu de Barranquilla.

Sucre

Conceyu d'Ovejas.

Conceyu de Sincelejo.

Tolima

Ibagué.

Correximientu d'Anaime, conceyu de Cajamarca.

Correximientu de La Marina, conceyu de Chaparral.

Huila

Neiva.

Algeciras.

Valle del Cauca

Conceyu de Trujillo.



■ Violaciones de los Derechos Humanos

Considérense violaciones de los derechos humanos las acciones y omisiones tocante a derechos reconocidos internacionalmente, cuando l'autoría ye de servidores públicos o d'axentes non estatales cuando l'Estáu promueve les sos acciones, tolera o nun tien capacidá de dar respuesta.

«En Colombia hebio crímenes pergraves cometíos por axentes del Estáu. La doctrina militar colombiana favorez les aliances criminales pal control de territorios. La guerra civil de 40 años nun terminó y nella l'Estáu perdió'l control de diferentes rexones. Nos setenta los llabradores llograron recuperar tierras y amedrentaron a los latifundistes que, asustaos, crearon les fuerces paramilitares (n'alianza colos empresarios y los narcotraficantes) y pa faer recular a los llabradores fixeron masacres como les de los Montes de María...».¹

«Magar hai un cambéu d'actitú y orientación per parte del gobiernu Santos, nun vimos cambeos na trayectoria d'abusos en Colombia, que siguen siendo mui graves». José Miguel Vivanco, Director de *Human Rights Watch*, 17 de marzu de 2011.

1. Colombia sigue somorguiada nun álxidu conflictu social y armáu pal que nun s'acolumbra de mano una salida diferente a la continuidá de la confrontación.

¹ Germán Reyes, asesor del Ministeriu d'Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

2. Demientres el 2010 en Colombia afondó la esclusión, la desigualdá ya incrementáronse les tases de ganancia de les empreses estranxeres y la concentración de la propiedá de les tierras, la renta y l'ingresu en poques manes.

3. En Colombia «el coeficiente de Gini alcanzó en 2010 un valor de 0,585, lo que sitúa al país ente los siete más desiguales del planeta».²

4. Continuaron les violaciones impunes, masives y sistemátiques de los derechos humanos, los homicidios, la desapaición forzada de persones, les detenciones arbitraries, les amenazas de muerte y el desplazamientu forzáu, al tiempu que se entama a conocer la dimensión de la violencia escontra les muyeres na sociedá y dientro del conflictu armáu.

5. «Toles partes implicaes nel conflictu —fuerces de seguridá, paramilitares y grupos guerrilleros— fueron responsables de graves abusos escontra los derechos humanos y violaciones del derechu internacional humanitariu».³

6. Los militares asumieron *de facto* funciones de policía xudicial en munches rexones del país onde avencen a realizar actividaes ilegales, como empadronamientos, allanadures ensin orde xudicial, captures, interceptación de comunicaciones, ente otres atribuciones, magar que'l 30 d'agostu de 2004 la Corte Constitucional, per aciú la Sentencia C-816/04, declaró irrealizable l'Actu Llexislativu 02 del 18 d'avientu de 2003 llamáu «Estatutu antiterrorista» que lu facía posible.

² Informe de l'Alta Comisionada pa los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22. Febreru de 2011.

³ Informe 2010 Amnistía Internacional. Estáu de los Derechos Humanos nel Mundu.

7. Colombia siguió recibiendo ayuda militar d'Estaos Xuníos y otros países viénden-y armes magar tengan un conflictu internu y antecedentes de violaciones masives de los derechos humanos cola responsabilidad de la fuerzia pública. «Estaos Xuníos apurrió a Bogotá cerca de 6.000 millones de dólares dende l'año 2000, cuando s'aprobó'l Plan Colombia de llucha contra les guerrilles y el narcotráficu».⁴

8. Les partes en conflictu nun estremaron ente civiles y combatientes. Delles ciudaes bien grandes del país rexistren una medría de la violencia atribuyible al conflictu armáu, a los delitos relacionaos col narcotráficu y a los actos de «llimpieza social».

9. «Ye vezu qu'ente les persones escoyíes como blancu d'homicidios poles fuercies estatales y los grupos armaos ilegales de Colombia figuren de manera bultable defensores de los derechos humanos; sindicalistes; defensores de los derechos de les muyeres, les víctimes y les minoríes; llesbianes, gais, bisexuales y transexuales; o persones con discapacidá física o mental».⁵

10. El Gobiernu colombianu informa que fai un esfuerzu importante al emprestar seguridá a cerca de 10.500 persones mediante'l Programa de Protección a Víctimes y Testigos del Ministeriu del Interior y Xusticia, consistente n'escoltes, coches, armes, 6.000 llinees de comunicación, que s'axunten al trabayu per exes temátiques como la Mesa Nacional de Garantíes pa los y les Defensores de Derechos Humanos, la mesa de Xusticia ya Impunidá, la mesa de Defensa, la mesa de Muyer y la mesa de Tierres.⁶

⁴ *El Espectador*, 15 de septiembre de 2010.

⁵ Informe A/HRC/14/24 del relator especial Philip Alston sobre les execuciones estraxudiciales, sumaries o arbitrarias. 31 de marzu de 2010.

⁶ Entrevista con María Paulina Riveros, *Directora de Derechos Humanos del Ministeriu del Interior y Xusticia*.

11. El conflictu social sigue recibiendo tratamientu militar, avezando l'usu desproporcionáu de la fuerzia y l'usu ilegal y clandestín de los servicios de intelixencia del Estáu pa escorrer o amedranar a opositores sociales y defensores de los derechos humanos.

12. «Ente 1986 y 2009 una docena de trabayadores y sindicalistes de la NESTLÉ en Colombia foron asesinaos polos paramilitares qu'actuaron xunta miembros de les fuercies armaes. Les amenaces de muerte xeneren una situación bien grave pa Sinaltrainal y los sos afiliados yá que nun ye la primer vegada que lo faen, mueven, torturen y terminen matando a los nuevos collacios. Ente 1986 y 2009 dellos trabayadores y ex trabayadores de Nestlé fueron asesinaos: Luciano Enrique Romero Molina, Héctor Daniel Useche Beron, Víctor Eloy Mielles Opino y la so muyer Rosa Ramírez, Alejandro Matías Hernández V., Harry Laguna Triana, Toribio de la Hoz Escorcía, Omar Darío Rodríguez, Hernando Cuartas, Luis Alfonso Vélez Vinazco, José Manuel Becerra Pacheco, José de Jesús Marín y Gustavo Gómez. Ensin cuntar los movíos y desterraos del país pa que nun los mataren evitar... Les tresnacionales declaráronnos la guerra, Colombia tien munches riqueces naturales que desafortunadamente nun nos pertenecen. Ta demostrao qu'onde hai riqueces, hai tresnacionales y onde hai tresnacionales hai grupos paramilitares y, poro, hai violencia».⁷

13. Demientres el 2010 demostróse xudicialmente la práctica de les execuciones estraxudiciales o «falsos positivos» de siquier 2.547⁸ persones asesinaes pola fuerzia pública en distintes rexones y dómines y con similares maneres d'operación, lo que fai duldar de

⁷ Alfonso Barón, Vicepresidente del Sindicatu Sinaltrainal - CUT. Xeneva, Suazilandia, avientu de 2010.

⁸ La Fiscalía, na so Unidá Nacional de Derechos Humanos, investiga anguaño 1.488 casos con 2.547 víctimes.

que se trate de «casos aisllaos» como diz l'altu mandu militar.

14. «Los grupos guerrilleros siguen matando a civiles, n'especial a los que tán atrapaos nuna situación de neutralidá imposible ente la guerrilla y les fuerces armaes del Estáu. Tamién se producen muertes de civiles pola mor del emplegu indiscrimináu de la fuercia y la utilización illegal de mines terrestres pola guerrilla».⁹

15. Nel 2010 hebio un aumentu de les acciones delictives de los grupos paramilitares que según el Gobiernu dexaren d'existir. Los paramilitares son los principales autores de la medría del númeru de masacres y amenaces de muerte demientres el 2010.

16. «Metanes los combates queda la xente del común. Nenguna de la partes en conflictu respeta a la población civil, nin los derechos humanos, nin el derechu internacional humanitariu, col agravante de que'l Gobiernu sí lo tenía que faer, pero ye precisamente l'exércitu'l que más los viola».¹⁰

17. «El gobiernu de JUAN MANUEL SANTOS ye la continuidá del gobiernu anterior; los cambios d'estilu foron sobrevaloraos y presentaos como si foren cambeos de fondo, pero continúa coles memes polítiques antipopulares y antinacionales d'Uribe, y anque diz que «les puertes del diálogu nun tán zarraes» contradizse tolos díes pola so intransixencia imponiendo a la guerrilla condiciones de rindición que resulten inaceptables y qu'enllarguen el conflictu».¹¹

⁹ Informe A/HRC/14/24 del relator especial Philip Alston so les execuciones estraxudiciales, sumaries o arbitraries. 31 de marzu de 2010.

¹⁰ Testimoniu Re de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes. V Alcuentru del MOVICE, Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹¹ Gloria Inés Ramírez, Senadora de la República. Intervención nel V Alcuentru del MOVICE, Bogotá, 10 de marzu de 2011.

18. El gobiernu de JUAN MANUEL SANTOS, a diferencia del so antecesor Álvaro Uribe Vélez, emplega un tonu conciliador al referise a la llexítima actividá desenvuelta por sindicalistes y defensores de los derechos humanos, pero esa actitú entá nun se reflexa na merma de les graves violaciones de los derechos humanos que se comenten na so mayoría cola complicitá o alcuertu de la fuercia pública. «El cambéu nel llinguaxe del discursu gubernamental de Seguridá Democrática a Prosperidá Democrática, de supuesta concertación y respetu a los derechos humanos, nun trescendió a los fechos y caltiénse la violencia socio-política, impunidá y el conflictu social y armáu».¹²

19. El gobiernu de JUAN MANUEL SANTOS anunció que va trabayar cinco exes prioritarios pa superar la crisis de los derechos humanos: llucha contra la impunidá; la Llei de Víctimes; la llucha escontra los grupos armaos ilegales; la realización de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos y el desenvolvimientu d'una política a favor de la promoción y espardimientu del respetu, dafechamente, de los Derechos Humanos y de les normes del Derechu Internacional Humanitariu.

20. «Magar el gobiernu de Santos impulsó iniciatives importantes de derechos humanos, les midíes entá han de ser mayores y los resultaos tovía nun son visibles... Ye crucial que Colombia amenorgue la cantidá d'asesinatos y ataques contra sindicalistes y lleve a los responsables d'estos delitos énte la xusticia. Estos estándares inclúin midides concretes y factibles que tien qu'adoptar el gobiernu colombianu».¹³

¹² Declaración Política del V Alcuentru Nacional del MOVICE. Bogotá, 10, 11 y 12 de marzu de 2011.

¹³ José Miguel Vivanco, Director pa les Amériques d'*Human Rights Watch*. 17 de marzu de 2011.

21. «Colombia tuvo innegables avances en derechos humanos ente'l 2010 y el 2011, hai un discursu distintu y desafíos antiguos. Les meyores refiérense al desarme de la pallabra, acercamientos colos defensores de derechos humanos, disminución del enfren-tamientu ente'l Gobiernu y la fiscalía, reactivación de les meses temátiques de garantías; la preparación d'una conferencia nacional de derechos humanos col envís d'una política global, y consolidar les meyores nuna axenda de derechos humanos. En derechos humanos ye mester reconocer la existencia d'ataques sistemáticos, amenazas de muerte, robos d'información, montaxes xudiciales, detenciones arbitrarias, asesinatu de líderes de los procesos de devuelta de tierras y defensores de derechos humanos. Y ye una meyora y una oportunidá'l que tea en discutiniu una llei pa les víctimes, cola asesoría de la OACNXDH na qu'había incluyise a los axentes del Estáu como responsables de violar los derechos humanos, y nun estremar a víctimes d'actores irregulares: la llei de tierras, amás, ye un apueste coraxosu empobináu al llogru d'una política global de protección a la devuelta de tierras».¹⁴

22. «Consideramos que'l proyectu de llei que llueu se va debatir nel Senáu ye una meyora en rrellación cola actitú política del gobiernu d'Uribe, no tocante a la reconocencia de dalgunes de les demandes históricas que víctimes, sectores sociales y políticos tienen fecho, y reconoz la crítica situación de derechos humanos que traviesa'l país, espresando que la violencia ye dramática, xeneralizada y sistemática, y qu'hebio un robu violentu de tierras... Por esa razón, vemos con gran esmolición que'l proyectu de Llei de Víctimes y de Devuelta de Tierras, escarez a d'un enfoque global de la política d'igua y produza retrocesos sustanciales

¹⁴ Portavoz de la OACNXDH en Colombia. V Alcuentru Nacional del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

tocantes a los estándares nacionales ya internacionales en materia de derechos de les víctimes».¹⁵

23. «Magar hai un cambéu d'actitú y orientación per parte del gobiernu Santos, nun vimos cambeos na trayectoria d'abusos en Colombia, que siguen siendo bien graves».¹⁶

24. L'aumentu de les masacres da cuenta del agravamientu de la situación de los derechos humanos en delles rexones del país. «Les 38 masacres asocedies ente xineru y payares de 2010 representen un incrementu del 41 per cientu respectu del mesmu períodu del añu anterior».¹⁷

25. «Valoramos la disposición de la guerrilla de les FARC-EP de realizar la entrega unilateral de cinco persones nel so poder y la respuesta del presidente Santos de crear condiciones aparentes pa qu'esta decisión humanitaria se concrete. La decisión mentada, xunta les expresiones públiques de les comandancies de les FARC-EP y del ELN de tar dispuestes a entamar diálogos na busca de la terminación del conflictu social y armáu, ye un signu importante qu'habría tratase con responsabilidad per parte de l'alministración Santos. Tien d'avanzase nel reconocimientu de la existencia d'un conflictu armáu internu, el cese na militarización territorial y social y la creación d'un mecanismu que facilite estes conversaciones embredaes a la solución política y negociada, cola participación amplia de la sociedá civil».¹⁸

¹⁵ Iván Cepeda, Diputáu na Cámara de Representantes. Intervención nel V Alcuentru del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹⁶ *Human Rights Watch*, José Miguel Vivanco. *El Tiempo*, 25 de xineru de 2011.

¹⁷ José Miguel Vivanco, Director d'*Human Rights Watch*.

¹⁸ MOVICE, Declaración Pública «Frente a les polítiques del gobiernu del presidente Juan Manuel Santos». Bogotá 30 de xineru de 2011.

26. Siguiéron los ataques contra les víctimas de violaciones de los derechos humanos. «Acabo de salir del xulgáu 6º de dar testimoniú contra'l DAS pol so espionaxe illegal. El DAS saboteó'l II Alcuentru del MOVICE y mató a LUCIANO ROMERO; el DAS amenació y afaló'l III Alcuentru xuntu colos paramilitares; y nel IV Alcuentru, que se movilizó per tol país, prindaron ilegalmente y mataron. Esti V Alcuentru tuvo precedíu d'amenaces de muerte; pretenden que seya más difícil reconocer la criminalidá del Estáu. El Presidente Santos, rezongando, reconozlo parcialmente».¹⁹

27. «ALEXANDER QUINTERO MARTÍNEZ, líder llabrador, miembru de la Xunión Territorial Interétnica del Naya-XTINAYA y presidente de l'Asociación de Xuntes Comunales del Altu Naya, organización miembru de la Rede d'Iniciatives y Comunidaes de Paz dende la Base, foi asasináu'l 23 de mayu de 2010, cuando tornaba pa la so residencia... foi atacáu con arma de fueu por cuatro homes que se movíen en dos motos».²⁰

28. Siguen los ataques contra'l movimientu sindical colombianu. «La violencia contra'l movimientu sindical costó más de 3.000 asesinaos. Nel 2009 el 50% de los sindicalistes asesinaos nel mundu yeren colombianos, nel 2010 mataron a 52 sindicalistes, que ye'l 51%. La campaña p'acabar cola CUT y afarar l'acción y la llibertá sindical refléxase al ver qu'en poco más de 20 años pasemos de tener un millón d'afiliaos a menos de 500.000. Un sindicalista d'esta rexón del Tolima, HENRY RAMÍREZ DAZA, pensionáu y dirixente comuñal d'Ambalema qu'aspiraba a ser el so alcalde, foi asasináu hai menos d'un añu en so casa, delantre'l fíu, después de que'l Gobiernu-y quitara l'esquema de

¹⁹ Ibídem.

²⁰ Comunicáu de la REDE D'INICIATIVAS Y COMUNIDAES DE PAZ DENDE LA BASE: «Un camín hacia la paz». Santander de Quilichao, Cauca, Colombia.

seguridá ensin estudiu previu de riesgu. Nel sector agrariu afararon FENSUAGRO nel Tolima. ASTRACATOL lleva 3 asesinaos. HENRY MOYA, asasináu'l 22 de xineru de 2010; ADOLFO TIQUE, asasináu'l 1 de xineru de 2009; IVÁN TOVAR, asasináu'l 25 d'ochobre de 2009, y van 25 profesores asesinaos. Hai un constante acorralamientu nel Tolima dende aparatos de seguridá del Estáu contra'l movimientu sindical como parte d'un plan d'esterminiu selectivu contra les organizaciones sindicales como ANTHOC, SIMATOL, con impunidá del 100% n'asesinatos de sindicalistes. El Gobiernu vien construyendo un discursu falsu qu'affirma que los derechos humanos ameyoren. Pretenden llavar la cara pa la llegada de la inversión internacional, por eso amontaron la presión diplomática pa que se roble'l TLC cola XE y EXA. Na 99ª asamblea de la OIT les presiones de los empresarios llograron que Colombia nun fora sancionada y, a cambéu, unviáron-y una comisión permanente».²¹

29. Les midíes de protecció pa los y les sindicalistes nun abasten si atendemos pal númberu d'asesinatos, pero'l Gobiernu tien otra opinión. «La materialización de la voluntá del Gobiernu reflexóse nuna amplia cobertoria pa los dirixentes sindicales y amás, na adopción de midíes aparentes de protecció como esquemes móviles compuestos por vehículos, personal escolta y medios de comunicació, asina como blindaxe de sedes, ente otros».²²

30. Hai una persecució contra MARCO REINE-RIO MONTEALEGRE, Presidente de la Seccional Rovira d'ASTRACATOL, a quien-y unviaron «un emisariu» p'amenacialu demientres acorralen tamién a la tesorera de l'Asociación, FENY JULIETH VELEZ, per parte

²¹ Luis Alberto Vanegas, Director del Depto. de Derechos Humanos de CUT Colombia. Ibagué, 7 de marzu de 2011.

²² Comunicáu del Ministeriu del Interior. 9 de xunu de 2010.

d'un grupu d'homes qu'actúen cola complicitá de les fuerces militares na rexón.²³

31. «El día 30 de marzu de 2011, siendo aproximao les 6 de la tarde, los llabradores Héctor Orozco y Gildardo García dirixense a so casa en moto pela carretera que comunica'l cascu urbanu de Chaparral col correximientu La Marina, siendo asesinaos al altor de la sienda Espíritu Santo-Albania con armes de fueu. Nun existiendo testigos presenciales de los fechos, sicasí hai que dicir qu'ésta zona atópase dafechu militarizada y a menos de 400 metros del llugar de los asocedíos y qu'hai presencia permanente de tropes del Exércitu Nacional al altor del denomináu cruce del Espíritu Santu. Héctor Orozco yera un llabrador de la sienda San Fernando del correximientu de La Marina, como destacáu dirixente de la comunidá exercía como vicepresidente de la Xunta d'Acción Comunal de la so sienda y vicepresidente de la Seccional Chaparral d'ASTRACATOL. Tenía 35 años d'edá, yera pá de 3 fíos menores. Gildardo García yera un llabrador de la sienda Florestal - Ambeima del correximientu de La Marina, sociu de la Xunta d'Acción Comunal de la so sienda. Tenía 32 años d'edá, yera pá de 4 fíos menores».

32. Sigue la persecución impune contra la población LGTB (llesbianes, gais, bisexuales y transexuales) y contra los que reivindiquen y defenden los derechos humanos d'estes persones. Mientres el 2010 rexistráronse 50 homicidios y numerosos amenaces de muerte.

33. Constatóse l'aumentu de les amenaces de muerte contra defensores de los derechos humanos. «Normalmente, los autores de les amenaces, incluyíes les amenaces de muerte, los intentos d'asesinatos y les agresiones físicas son desconocíos o persones ensin

²³ Testimoniu n'Ibagué, 7 de marzu de 2011.

identificar, magar se denunció que se trata de persones o grupos que se ven afectaos dalguna forma pol llabor fechu poles sos víctimes, o que tienen dalgún tipu de rellación con elles».

34. «Al respective, los grupos paramilitares y otros grupos armaos, n'especial en Colombia, suelen ser los autores de los asesinatos y de les amenaces de muerte, que puen tar empobinaes a persones pertenecientes a amplios sectores de la sociedá civil, y que, de cutiu, van acompañaos de la estigmatización del llabor que realicen los defensores, a los que se declara "oxetivos militares". En dellos casos asocedíos n'América identificóse a funcionarios encargaos de faer cumplir la llei o a militares como responsables d'asesinatos y amenaces, incluyíes amenaces de muerte. Nesos casos, los mentaos defensores dedicábense polo xeneral a cuestiones relatives a la impunidá por presuntes violaciones cometíes por axentes estatales».²⁴

35. Siguieron los ataques contra los pueblos indíxenes. Son especialmente numerosos los ataques en municipios del Cauca, como Toribío, Xambaló, Caloto, Santander de Quilichao, Corinto, Caldono, Miranda, Paéz, Morales, Coconuco, Puracé, Popayán, Suárez, Silvia, Inzá, Bolívar, Piendamó, La Vega, San Xuan, Silvia y Tororó.²⁵

36. Especialmente grave ye'l sufrimiento de les víctimes por amenaces de muerte y los asesinatos de líderes llabradores que vienen reclamando la devuelta de les sos tierres, llueu de sufrir el robu violentu de les sos piedraes.

²⁴ Informe A/HRC/16/44 de la Sra. Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Conseyu de Derechos Humanos de la ONU. 16º período de sesiones, 20 d'avientu de 2010.

²⁵ Programa de Derechos Humanos del CRIC. Informe a xunetu de 2010.

37. La violencia y la impunidad en Trujillo, Valle, siguen dende hai 23 años, agora cola presencia de los grupos paramilitares «Los Machos» y «Los Rastrojos».²⁶

38. «Los desplazamientos de los Montes de María organizámonos n'ASOCARE, Asociación de Llabradores Retornaos, pero amenaciáronnos y volvieron a convertinos en víctimes. Tenemos varios muertos, como'l secretariu NAZID JIMÉNEZ, asesináu'l 28 de xineru de 2006, y el so reemplazu VÍCTOR OLIVERA, asesináu'l 4 d'abril; EUCLIDES CAUSADO, asesináu'l 3 de marzu, y MARCIAL SALAZAR, asesináu'l 23 de febreru, lo que provocó otru desplazamientu masivu de 22 families».²⁷

39. Metanes del conflictu armáu la población civil sigue siendo la principal víctima. «Asina ye como vien funcionando'l negociu de la guerra en Colombia. Los grupos armaos desplazando con terror y con mentires. Les multinacionales sirviéndose d'esto y ocupando la tierra con proyectos granibles qu'empobrecen entá más a la xente. La población civil, que pon los muertos, ye obligada a tomar partíu por un grupu armáu, lo que la convierte en oxetivu militar del otru bandu».²⁸

40. «Que con gran indignación vémosnos obligaos a denunciar ante los medios nacionales ya internacionales el remanar del Exércitu colombianu, qu'a pesar de les concertaciones feches na Gobernación colos Pueblos Indíxenes Vallecaucanos sigue poniendo en grave riesgu a los sos habitantes del Resguardu Indíxena «NASA KWE'SX KIWE» allugáu na parte alta de la sienda Les Brises y Los Alpes del conceyu de Florida. Asina foi nel día d'ayer, a escasos dos hores

²⁶ Reunión con ASFAVIT en Trujillo, 12 de marzu de 2011.

²⁷ Testimoniu n'Ovejas, Sucre, 5 de marzu de 2011.

²⁸ Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ACIN. Textu de Comunicación y de relaciones esternes pa la verdá y la Vida. Comunicáu «El terror a gran escala». 17 de marzu de 2011.

de finar la gran asamblea NASA, cuando NOVENTA Y SEIS (96) indíxenes de les comunidaes d'Altamira y Granates diben tornar a les sos viviendes; nel llugar conocíu como Los Alpes, entamó un tirotéu ente l'EXÉRCITU NACIONAL y guerrilles de les FARC, quedando los NOVENTA Y SEIS (96) indíxenes en medio'l fueu cruzao. A los actores en conflictu nun-yos importó disparar penriba de les cabeces de los neños, vieyos, muyeres y demás indíxenes que pasaben pelí. Pa salvar les sos vides los nuestros hermanos NASAS tuvieron que tar echaos en suelu 2 hores, espuestos a les bales de parte y parte, bombes y demás artefactos de guerra».²⁹

41. El Gobiernu colombianu niega la existencia de los grupos paramilitares, pero ye bultable la so presencia, influencia, creciente actividá y articulación colos axentes del Estáu y del narcotráficu nos poderes públicos, como'l Congresu de la República, la fuercia pública, el poder xudicial y l'executivu en delles llocalidaes, incluyies les llamaes zones d'afitamientu nes que se supón que l'Estáu acabó col paramilitarismu y algamó'l control del orden públicu. Sicasí, «estos grupos cunten n'ocasiones cola aquiescencia, tolerancia ya inclusive connivencia, yá seya por corrupción o amenaces, dellos miembros de la fuercia pública, incluyida la Policía Nacional».³⁰

42. Nes zones d'afitamientu creaes pol Gobiernu en marzu de 2009, que cubren 86 conceyos de 11 departamentos con 200.000 kilómetros de estensión y cuatro millones d'habitantes, siguen violándose los derechos humanos, anque se suponga que neses arees el conflictu yá terminó. Neses zones los militares —pa lexitimase ante les comunidaes que foron les sos víc-

²⁹ Comunicáu del Comité Executivu de la ORIVAC.

³⁰ Informe de l'Alta Comisionada pa los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22, numberal 36, px. 8. Febreru de 2011.

times— faen la xestión de los proyectos sociales de la cooperación de los Estaos Xuníos y d’Holanda.³¹

43. L’acción coordinada de los paramilitares, el GAULA del exércitu y la policía ye la retención, desapaición, tortura y posterior asinatu’l 28 d’agostu de 2001 del profesor de la Universidá del Atlántico JORGE ADOLFO FREYTER.

44. La influencia del narcotráficu y los paramilitares nes instituciones sigue. «De los 268 congresistes electos, 13, que fueron reelegíos, tán siendo investigaos penalmente pola Corte Suprema. Amás, recibéronse informaciones de posibles casos de “testaferratu políticu” ente congresistes escoyíos per primer vez y persones venceyaes a procesos de “parapolítica”». ³²

45. Grupos armaos conocíos oficialmente como Bandas Criminales Emerxentes, BACRIM, delinquen con impunidá en tolos departamentos del país y de manera más bultable n’Antioquia, Cauca, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle y Sucre.³³

46. «Lo que’l gobiernu llama «BACRIM» nun son simples grupos mafiosos, son la espresión d’unes actiúes polítiques y económiques criminales». ³⁴

47. «Los paramilitares Machos y Rastrojos muévense llibremente por Trujillo, Valle. L’añu pasáu y anguaño foron asesinaes delles persones, escuartícenles y tírenles en sacos, cola complicidá de la policía local

³¹ Alcuentru del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

³² Informe de l’Alta Comisionada de les Naciones Xuníes pa los Derechos Humanos. A/HRC/16/22. 3 de febreru de 2011.

³³ Institutu pal Desenvolvimientu y la Paz, INDEPAZ. V Informe sobre narcoparamilitares nel 2010. Bogotá, 16 de marzu de 2011.

³⁴ Iván Cepeda, Diputáu na Cámara de Representantes. Intervención nel V Alcuentru del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

y del exércitu, que los protexe. Esto sigue lo mesmo qu’hai años. Na finca “La Mina” hai una base del exércitu y hai un cementeriu clandestín». ³⁵

48. «Los paramilitares entraron a la rexón a cobrar a los llabradores el paru cafeteru de 1995, ficiéronlo amenaciando, desplazando y asinando. Yera’l grupu paramilitar de RAMÓN ISAZA, que montó campamentos en Fresno, Hatillo, Palocabildo y San Gerónimo. L’Estáu sabíalo y nun fizo nada demientres asesinaben dirixentes llabradores y aspirantes opositores a alcaldíes como la de San Luis. Asinaron a más de 100 persones en pocu tiempu, la familia ARREDONDO, LEONEL ARBELAEZ, los hermanos AMÉZQUITA, los hermanos ECHEVERRY, presidentes de Xuntes d’Acción Comunal como GONZALO GARCÍA y GUILLERMO GARCÍA, que yera conceyal, a ellos escuartizáronlos, HERNANDO MORENO y munchos otros. La rexón del Norte del Tolima yera un corredor de les guerrilles y eso cobráron-ylo a la población civil. Perhí pasaba’l frente Tulio Barón y el Bloque José María Córdoba de les FARC y los Bolcheviques del Líbano del ELN. Hata anguaño, hai paramilitares na rexón y l’Estáu sigue ensin faer nada». ³⁶

49. El gobiernu de JUAN MANUEL SANTOS afirma que les BACRIM son estructures que se combaten nel marcu de la llucha contra les drogues. Esto ye, trátenles como un asuntu de policía y non como un tema de seguridá nacional, como sí lo ye la llucha contra les guerrilles. Esta distorsión, que foi alvertía por *Human Rights Watch*, esplicaría en parte’l descuidu o falta de voluntá pa combatir y erradicar les estructures polítiques y económiques del paramilitarismu.

³⁵ Testimoniu en Trujillo, Vale. ASFAVIT, 12 de marzu de 2011.

³⁶ Entrevista col ex alcalde de Casabianca Luis E. Rodríguez Rivera. Ibagué, 7 de marzu de 2011.

50. La presencia de los grupos paramilitares afecta la vida de las personas, el funcionamiento de las organizaciones sociales y a las mismas instituciones públicas, al eliminar de facto el estado de derecho. «En el desenvolvimiento de la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad tápase so la denominación de Bandas Criminales —BACRIM— que ye parte de la reinxeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las movilizaciones, persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en estructuras paramilitares».³⁷

51. La persistencia del remanar de los grupos paramilitares desde el éxito de los procesos de desmovilización y los comunicados de la Misión de Sofo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, MAPP/OEA. «... el destape de las falsas desmovilizaciones realizaes cola complicidad de las autoridades civiles y militares, más las declaraciones de varios exnarcoparamilitares que muestren el engaño no solo de desmovilizaciones montadas, como la del supuesto frente Cacica La Gaitana de las FARC, sino de todas realizaes que presentaron 32.000 combatientes de las AUC y otros, cuando en realidad nun yeren más de 14.000. Según declaró “Don Berna”, ya Iván Duque, reclutáronse desempleados pa engrandar los cifras y dexaron vivos estructuras encabezadas por mandos medios pa que continuaran con los negocios legales ya ilegales y las relaciones con los parapolíticos nos departamentos, conceyos ya instituciones centrales del Estado».³⁸

52. «Nel Tolima montáronse dos falsas desmovilizaciones. La del llamado Bloque Tolima de los paramilitares AUC, comandados por EDUARDO RESTREPO VIC-

³⁷ Declaración Política del V Alcuentru Nacional del MOVICE. Bogotá, 10, 11 y 12 de marzo de 2011.

³⁸ Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. V Informe sobre narcoparamilitares en 2010. Bogotá, 16 de marzo de 2011.

TORIA, alias “El Socio”, na que reclutaron a Ambalema a muchos folgazanes y pagaron-yos \$400.000 pesos (160 euros) pa que apaecieren como combatientes desmovilizados, y la farsa de la desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC, entramada por “Olivo Saldaña” onde el Gobierno pagó a personas ensin empleo pa que apaecieren como guerrilleros predaos».³⁹

53. «Un grupo de 50 paramilitares anda pela sienda Les Paves de Dolores asesinando xente per Coyaima, Natagaima y Purificación, escuerren a los que denuncien los atropellos y dicen que “nun va quedar nin un vivu”».⁴⁰

54. «El grupo paramilitar de La Dorada de RAMÓN ISAZA defiende los intereses de la AngloGold Ashanti y ya punxo cámaras guardadas en dellos sitios del pueblu. Xixilennos ilegalmente, entamen daqué col jefe de seguridad de la empresa, que ye un coronel espulsáu del ejército por executar civiles en Urabá. Los pares lleguen a escondielles a Cajamarca y quedense en instalaciones de la empresa que llogró mercar hasta a la guerrilla de las FARC, que foi del área cuando llegó la multinacional».⁴¹

55. «San Onofre ye un enorme nial paramilitar d’Águilas Negras, Rastrojos y Paisas. En Trujillo operen nel cascu urbanu en contuberniu cola fuerza pública Los Machos y Los Rastrojos. En Sabanagrande anda peleando amenazando y asesinando un grupo paramilitar de civil al mandu d’alias “Chiquito Cuello y Don Antonio”. En Barranquilla, nel barriu 7 d’Abril, onde viven muchos familiares de víctimas, hai presencia de paramilitares de los grupos Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños».⁴²

³⁹ Testimoniu n’Ibagué, 7 de marzo de 2011.

⁴⁰ Testimoniu en La Marina, Chaparral, 8 de marzo de 2011.

⁴¹ Testimoniu n’Anaimé, 7 de marzo de 2011.

⁴² Testimonios en Barranquilla y Trujillo.

56. «Los principales dirixentes políticos del departamentu del Tolima fueron venceyaos a investigaciones por tener llazos colos paramilitares: CARLOS GARCÍA ORJUELA, POMPILIO AVENDAÑO, GONZALO GARCÍA y LUIS GÓMEZ GALLO. Según INDEPAZ mientres el 2010 operaron nun terciu de los municipios de Colombia seis estructures narcoparamilitares, responsables del 90% de les acciones atribuyíes a estes bandes que se denominen Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, l'Exércitu Revolucionariu Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC), les Águilas Negres y la Oficina d'Envigáu. Tarién integraes por unos 7.100 miembros, cifra qu'algama'l doble si se incluyen les sos redes d'afitu, ente les que se cunten instancias del poder políticu y de la fuercia pública.⁴³

57. Los paramilitares gocien d'impunidá. «Magar los nomes, los uniformes o táctiques de los grupos armaos ilegales puen camudar, persiste la violencia en forma de asesinatos selectivos, desapareiciones, intimidaciones y confinamientos forzosos... La verdá sobre por qué morrieron decenes de miles de persones y quiénes fueron los responsables permanez guardada, y nin les víctimes nin los sos seres queríos recibieron arreglu».⁴⁴

58. En sectores populares de ciudaes como Barranquilla y Soledad los paramilitares amenaciaron y mataron a cuantísimos vendedores ambulantes y pequeños y medianos comerciantes. Amás faen reclutamientu forzáu de mozos, a otros vuélvenlos adictos a les drogues pa xenera-yos dependencia y ponelos a delinquir.⁴⁵

⁴³ Informe del Institutu pal Desarrollu y la Paz, INDEPAZ, citáu pola agencia EFE. Bogotá, marzu 16 de 2011.

⁴⁴ Intervención de Gay McDougall, relatora de Minoríes ante'l Conseyu de Derechos Humanos de la ONU. Xeneva, Suiza, 15 de marzu de 2011.

⁴⁵ Testimoniu en Barranquilla.

59. En ciudaes como Manizales son vezu diariu les muertes violentes ya impunes d'indixentes y habitantes de y na cai.⁴⁶

60. «Nel Tolima l'Exércitu asegura les árees pa que los paramilitares asienten, como n'El Fresno, Casabianca, Villahermosa, Palo Cabildo, Playarica, Falán, Frías, Armero, San Pedro, Lérida, Las Delicias, Líbano, Tierradentro, Zelandia y Santa Teresa, pero non solo cuntaron col apoyu del Exércitu, tamién de funcionarios y gobernantes. Finánciense obligando a les Xuntes d'Acción Comunal a faer asamblea a la que ye obligatoriu asistir. Ellí censan a la xente y faen una llista de los sos bienes. En media hora yá tienen un empadronamientu económicu social, incluyíu l'usu de les tierres y el ganáu. Lluen imponen la vacuna como si fuera un impuestu, pues tienen el permisu de la fuercia pública. Los pares llograron cooptar l'Alministración de Xusticia, como nel casu del crime por achaplamiento del craniu de JAIME BEJARANO FORERO cometíu por paramilitares el 21 de marzu de 2004 en Palocabildo, pero'l comandante de la policía certificó qu'esta persona foi muerta n'accidente de tránsitu, colo que nun s'investigó como un homicidiu».⁴⁷

61. «Nel Tolima les desmovilizaciones paramilitares y guerrilleres fueron una farsa. Dende'l 2006 los paramilitares llamaos pol Gobiernu "Bandes emerxentes" llámense Nueva Generación Futuro Verde, Águilas Negras, Bloque Pijao, Nuevas Autodefensas y Buitres Chupasangre. A finales de 2010, nel municipiu de Coyaima, los paramilitares apaecen pidiendo perres al resguardu indixena y repartiendo amenaces en panfle-

⁴⁶ Declaración Pública del MOVICE Capítulu Caldas. Manizales, 4 de marzu de 2011.

⁴⁷ Testimoniu n'Ibagué, 7 de marzu de 2011.

tos. D'eses llistes yá fueron asesinaes dos persones a empiezos del 2011».⁴⁸

62. «Nel sur del Tolima l'Exércitu anda xunto colos paramilitares de les Águilas Negras; y el 7 de marzu de 2011 l'Exércitu polos llaos d'El Cambrín púnxose distintivos de los paramilitares de les AUC pa rexistrar tola casería de Peñas Blancas y Angosturas, asina nun se sabe quién actúa; pero ún estrémalos y sabe que nos nuegos correximientos son lo mesmo».⁴⁹

63. «Na Mariña del Pacíficu hai una re-paramilitarización cola presencia de Los Rastrojos y La Nueva Generación. Ellos trabayen n'alianza col Exércitu y la policía. N'Argel, Cauca, la retoma paramilitar dexa más amenaces de muerte y más foses comunes. Nesa zona los paras ponen retenes a 500 metros de la policía y fala con ellos. Nes sos narices los paras fai 15 díes esgargolaron a una persona y la policía nun fai nada por torgalo».⁵⁰

64. «El Frente 60 de les FARC mató a unos 30 paramilitares, los demás fuxeron escontra Popayán onde agora s'atopen executando un plan de "llimpieza social", matando xente qu'aparez nos panfletos amenzaos, desamarrando una cacería contra los líderes sociales del Cauca, como los del Proceso d'Unidad Popular del Suroccidente, SUTEC, PCC, ACEU, Coordinadora Estudiantil Tuto González, sindicalistes, maestros y funcionarios públicos, dicen que va haber otu "plan pistola" frente al qu'hai silenciu na alcaldía municipal, na Universidá del Cauca, namás la Defensoría del Pueblu se pronunció y eso qu'a diariu maten xente, sobremanera na comuna 7».⁵¹

⁴⁸ Informe de les organizaciones sociales del Tolima a la VII Delegación Asturiana. Ibagué, 7 de marzu de 2011.

⁴⁹ Testimoniu en La Marina, Chaparral, 8 de marzu de 2011.

⁵⁰ Testimoniu nel V Alcuentru del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

⁵¹ Testimoniu en V Alcuentru del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

65. Funcionarios y funcionaries del Gobiernu colombianu adscritos al DAS, con dependencia directa del despachu del Presidente de la República, cometieron delitos n'España, Bélxica y otros países de la Xunión Europea contra defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales ya instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Parlamentu Europeu, según informe del 2009 de la Fiscalía Xeneral de la Nación ante la Corte Suprema de Xusticia.

66. Les actividaes ilegales d'espionax realizóles el Grupu Especial d'Intelixencia G-3 demientres los años 2004 y 2005 como parte d'un plan pa neutralizar, vencyer a organizaciones guerrilleres y desprestixar a defensores de derechos humanos y a persones opositores del gobiernu d'ÁLVARO URIBE VÉLEZ al cargu de GERMÁN VILLALBA, quien yá aceptó ante la Fiscalía Xeneral la so responsabilidad nos delitos de seguimientos ilegales, interceptación ilegal de comunicaciones, concierto pa delinquir y abusu d'autoridá.

67. Los oxetivos n'España foron la Coordinación Valenciana de Solidaridá con Colombia, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, con allugamientu en Barcelona, y la Rede d'Hermandá y Solidaridá con Colombia, con sede en Zaragoza, tres colombianos defensores de los derechos humanos y refuxaos n'España, la periodista española que trabaya en Colombia ALEXIA AGUILERA, l'abogáu español JOSÉ LUIS GALÁN y la ex diputada del Congresu español ISAURA NAVARRO.⁵²

68. La impunidá sigue abellugando a los autores de crímenes, sobremanera de sindicalistes, defenso-

⁵² Al respective foi almitida a trámite una querella per parte de la Xueza del Xulgáu d'Instrucción nº 46 de Madrid, España, contra Álvaro Uribe Vélez, Jorge Aurelio Noguera y Germán Villalba Chávez.

res de los derechos humanos, dirixentes llabradores, indíxenes, población afrocolombiana, estudiantes y población LGBT.

69. Les altes tases de impunida siguen como resultáu de la falta de recursos na xusticia y pola asunción de la competencia per parte de la xusticia penal militar pa investigar crímenes de la mancada humanidá cometíos poles tropes del exércitu nacional, magar de les repitíes sentencies nes que los xulgaos civiles espresen que «les violaciones a los DD.HH. y DIH incorporaos como crímenes internacionales a nivel internu, rumpen el nexu causal col serviciu y por tanto'l procesu nun tien que ser asumíu pola xusticia penal militar».⁵³

70. En delles rexones del país como nos departamentos de Sucre, Córdoba, Atlánticu, Bolívar, Magdalena y Cesar foron puestas al borde'l desaniciu les organizaciones sociales, siendo especialmente graves y sistemátiques les persecuciones contra les organizaciones llabriegues, indíxenes, negres, sindicales, de población desplazada y de víctimes del conflictu.

71. Colombia sigue siendo'l país col mayor númeru d'asesinatos de sindicalistes en tol mundu. Dende la fundación en 1986 de la Central Unitaria de Trabayadores, CUT, más de 2.800 sindicalistes foron asesinaos. La cifra anual d'asesinatos amenorga a 39 en 2007 y aumenta, otra vegada, a 51 nel 2008, y a 47 en 2009. Nel 2010 foron asesinaos 51 sindicalistes. La impunida ye del 98%, pues estos asesinatos nun s'investiguen, anque existen pruebas de que les organizaciones paramilitares son responsables d'un altu porcentax d'estos crímenes.

⁵³ 8 de marzu del 2011, Sala Penal del Tribunal Superior Xudicial de Popayán. Sentencia condenatoria contra miembros del pelotón Galeón nº 7 adscritos al Batallón José Hilario López, pol asinatu del comuneru indíxena JOSÉ EDWIN LEGARDA VÁSQUEZ.

72. «El sindicalista y dirixente popular HENRY RAMÍREZ DAZA, que tuvo abellugáu n'Asturies nel segundu semestre del 2003 acoyíu pol Programa Asturianu d'Atención a Víctimes de la Violencia en Colombia, foi asesináu a balazos en so casa de la ciudá d'Ibagué, delante de so familia, el 11 d'abril del 2010».⁵⁴ Henry foi presidente del Sindicatu de Trabayadores de la Industria de Bebides Alcohóliques, SINTRABECOLICASCUT, y nel momentu del asinatu yera conceyal pol Partíu Lliberal nel conceyu d'Ambalema/Tolima, onde venía denunciando la corrupción de la alministración llocal. La persecución a los y les sindicalistes ye bultable nel departamentu del Tolima. «A los sindicalistes de la educación y la salú persíguenlos por oponese a les privatizaciones; n'entidaes como l'Hospital Federico Lleras imperen la contratación llaboral sin derechos al traviés de les llamaes cooperatives de trabayu asociáu. Hai atrasos nel pagu de salarios y nun se paga la segurida social a la mayoría. Viólase'l derechu de güelga. Miembros del GAULA del Exércitu allanaron les residencies de directivos de la CUT seccional Tolima».⁵⁵

73. «A ANTHOC seccional Tolima persíguenlu por oponese al desmonte del sector salú. Hai despidos masivos, cierre d'hospitales públicos, amenaces de muerte y presión pa que los trabayadores dexen el sindicatu. Tenemos 3 asesinaos, dos desaparecíos, 30 amenazaos de muerte, 26 desplazaos forzosos y 4 detenciones arbitrarias. A la Xunta Directiva de ANTHOC Tolima contrólenla nel sindicatu, llamen a les cases. De 2.500 afiliaos al sindicatu quédennos 850. Les organizaciones tamos sometíes al terrorismu del Estáu».⁵⁶

⁵⁴ Comunicáu del Colectivu de Colombianos refuxaos n'Asturies «Luciano Romero Molina». Xixón, 30 d'abril de 2010.

⁵⁵ Alcuentru con organizaciones sociales n'Ibagué. 7 de marzu de 2011.

⁵⁶ Testimoniu d'una dirixente sindical d'ANTHOC Tolima. Ibagué, 7 de marzu de 2011.

74. L'Asociación de Llabradores del Altu Ariari denunció l'asesinatu del afiliáu al sindicatu SINTRAGRIM, NELSON MURILLO TABORDA, el 9 de setiembre de 2010 na sienda Caño Lindo, xurisdicción del conceyu d'El Castillo, Meta. «... un suxetu que s'identificó como miembru de les autodefenses, quien-y propinó varios disparos y fuxó pa contra un matorral». ⁵⁷

75. «El 29 d'agostu de 2010 unidaes del Batallón 21 Vargas allanaron ilegalmente la casa de LIDERMAN MURILLO TABORDA y acusáronlu de tener armamentos de la guerrilla, la mesma acusación fixieron contra FERNEY MURILLO TABORDA, que ye dirixente del sindicatu SINTRAGRIM». ⁵⁸

76. L'usu de la violencia, por parte de tolos actores armaos, pa quita-yos les tierres a los llabradores y los territorios de los pueblos indixenas y afrodescendientes convirtióse en dalgo habitual ya impune.

77. El 18 de mayu de 2010 foi asesináu'l dirixente llabriegu ROGELIO MARTÍNEZ, quien actuaba como representante llegal de 52 families integrantes de la Empresa Comunitaria de la finca «La Alemania», ubicada en San Onofre, Sucre, entregada en 1997 pol Estáu a la población llabradoru pa un programa de reforma agraria. Esti prediu foi usurpáu con violencia tres l'asesinatu de 12 llabradores, incluyíu un hermanu de Rogelio y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía.

78. El robu violentu de les tierres foi comandáu por EDWARD COBO TELLEZ, alies «Diego Vecino», y RODRIGO MERCADO PELUFFO, alies «Cadena», comandantes del grupu paramilitar Bloque Héroe de los Montes de María, ente 1998 y el 2001. «El 30 de marzu del 2000 los pares asesinaron al representante de la comunidá y esparidióse'l mieu. Marchemos toos de la tierra menos el

⁵⁷ Comunicáu de SINTRAGRIM, 11 de setiembre de 2010.

⁵⁸ Ibídem.

parceleru Alacín Becerra Mexía, que se quedó resistiendo solu y desaparecieronlu. Esta xente armao xuntó 670 cabecees del nuestru ganáu y robáronlo. Como fuimos desplazaos, nun pudimos paga-y los créditos al Bancu Caxa Agraria, que nos embargó y remató la finca dándola a los empresarios y completando la tarea de robu de los pares. Rogelio, como presidente de la comunidá, denunció too esto, pero vinieron-y más amenaces nel 2005 hasta que lu mataron l'año pasáu. Allá funciona la llei de "presidente puestu presidente muertu". Van dos presidentes asesinaos, pero yo remplacélu. Tócanos ser valientes o vuelven a ponenos el fierro na espalda. Mataron al mio home, pero nun voi marchar de la finca. Yá m'amenazaron, pero resistiré hasta'l final. La tierra nun se merca nin se viende, llibérase y defiéndese». ⁵⁹

79. Rogelio encabezaba la esixencia comunitaria al gobiernu de restitución de les tierres axudicaes pol INCORA y ocupaes pol grupu paramilitar que montó na finca, cola aquiescencia de les autoridaes, un centru de tortures, asesinatos y foses comunes. Tanto'l gobiernu nacional y departamental, como'l Subcomité de Protección a Víctimes y Testigos y les autoridaes civiles y militares de San Onofre, conocíen oficialmente dende había dos años les graves amenaces proferíes polos paramilitares contra Rogelio y los demás miembros de la comunidá por encabezar la torna de los llabradores a la finca, pero nun dispuxeron les midíes de protección necesaries. Rogelio foi asesináu dos díes enantes d'intervenir na reunión de países del G24 na que rendiría'l so testimoniu sobre'l robu violentu de tierres y los vínculos ente los paramilitares y los poderes políticos llocales. ⁶⁰

⁵⁹ Testimoniu de la señora JULIA TORRES, viuda de ROGELIO MARTINEZ. Ovejas, Sucre, 5 de marzu de 2011.

⁶⁰ Testimoniu na finca «La Europa», conceyu de Ovejas, Sucre, 5 de marzu de 2011.

80. Quince personas fueron asesinaes na finca «La Europa», d'Ovejas, Sucre, ente 1984 y el 2010, per parte de grupos paramilitares y de la fuercia pública. Nel 2008 cortáron-y la cabeza a un llabrador na finca y el 11 de febreru de 2011 un grupu d'homos armaos amedrentaron a les families que trabayen eses tierres dende fai 50 años dientro d'un programa de reforma agraria adelantáu pol Estáu. Ordenaron-yos dexar de trabayar y abandonar la hacienda, que foi adquirida pol empresariu JUAN GABRIEL VELEZ URIBE. Ante la pasividá de les autoridaes les 80 families llabradoras, que yá fueron desplazaes hai quince años, temen un nuevu desplazamientu forzáu. «Esto de amenazanos y desplazananos va como per etapes, enantes fueron les AUC y la Infantería de Marina, ahora son los Paisas que nos amenacen con pallabres y mostrando les sos armes, estrócennos la sema y les llendes, anden con perros, paecen un ensame que da mieu pues conocémos-y la intención, paecen *paracos* pero nós nun somos violentos, nin-y peleamos tierres, ellos son los invasores, nós non, nós tamos nes nueses propiedaes».⁶¹

81. «N'abril del 2010 llegaron unos homes a Caño Cholé, dixeron que yeren paramilitares Águilas Negras. Sacáronnos de les cases, encañonaronnos, amarraron a los homes y tiráronlos al suelu boca abaxo, quitáron-yos los cuchiellos de trabayar y sacáronlos amarraos pa la oriella del regueru a la vista de tola xente de la comunidá. "Traemos orden de matar al Profe y al presidente del comité llabrador", como nun taben dixeron que diben volver pa matalos. Marcharon y nós viaxemos hasta San Benito a denunciar esti atropellu, pero l'alcalde nun fixo nada, nin el procurador municipal, que ye primu de los De La Ossa. Fuimos a denunciar énte l'Inspector de Policía, pero dixo qu'él nun podía

faer nada, "nun ven que'l que tien más saliva traga más farina", díxonos. Los tipos quemáronnos too, les cases, la ropa, too. Los *paracos* volvieron y depués de les amenaces de los RODRÍGUEZ y los DE LA OSSA, el 21 de mayu del 2010 mataron a BETY LAMBRAÑO y al so fiu JOSÉ FRANCISCO VIVES LAMBRAÑO. Torturáronlos, fixieron-yos de too, depués cortáron-yos la cabeza y escuartizáronlos y tiraron los trozos al ríu. Ehí marchemos toes desplazaes, les 23 families, pero Acción Social de la Presidencia nun nos recibió la denuncia diciendo qu'en Colombia yá nun hai paramilitares. Hai nueves amenaces y los que manden nel pueblu de la Villa de San Benito son los que mandaron a matar a estes dos persones, anden pel pueblu como si nada nun debieren».⁶²

82. La casa de DELFÍN USECHE PEÑA, nel correximientu de La Marina, conceyu de Chaparral, foi allanada ilegalmente por miembros del Exércitu Nacional el 11 de setiembre del 2010. La tropa desembarcó en seis helicópteros y sometieron a interrogatorios a tres adultos y a cinco menores d'edá.⁶³

83. «El 10 de xunu de 2007 na madrugada dos soldaos del Batallón Colombia queríen entrar a la fuercia nuna actividá del colexu y nun se-yos permitió por mal comportamientu, entós levantaron la fiesta a tiros y mataron a tres persones. Caminaron 3 kilómetros y d'una casa sacaron y mataron a 4 persones más, un neñu salvóse porque se fíxo'l muertu. L'Exércitu nun fixo nada pa detenelos hasta les 3 de la tarde, llevó a los soldaos non a los firíos. Si yo nun tuviera una familia taría empuñando les armes porque nun hai otru camín, nun respeten la vida de los llabradors. El colexu quedó abandonáu, agora ocúpalo l'Exércitu».⁶⁴

⁶² Ibídem.

⁶³ Testimoniu en La Marina, Chaparral, 8 de marzu de 2011.

⁶⁴ Testimoniu n'Algeciras, 9 de marzu de 2011.

⁶¹ Ibídem.

84. «Hai doce años l'Exércitu mató al mio fiu ALBENIS PINILLA, yera conductor y la tropa matólu. Too quedó impune. Depués tiroteáronme otros fíos, EDISON y MIGUEL ALFONSO».⁶⁵

85. «Yo llucho cola xusticia pa qu'entreguen el cadabre del mio hermanu FERNANDO PAEZ QUIZA, de 28 años, miembru de les FARC que morrió el 15 de febreru de 2011, pero nun me lu entreguen diz que por nun habelu identificao, pero yá-y lu presentaron a la prensa col nome. Él tá enterráu como NN, el casu llévalu la xusticia penal militar, pero el fiscal militar dizme que pa qué quiero'l cuerpu, que si ye pa vendelu o pa qué. Creyemos que ye porque foi torturáu y quieren desaparecer pruebas».⁶⁶

86. «Na Procuraduría recibo munches quexes contra l'Exércitu, nenguna contra la guerrilla. Hai praos minaos que l'Exércitu esixió que se denunciaren. Preocúpame l'estigma de la población d'Algeciras. Hai dos díes hebíu un acorralamientu del cuartel de policía, xunta la ilesia, ensin firíos nin muertos. Contáronse 18 robos, pero ési nun paez ser el *modus-operandi* de la guerrilla y coinciden cola llegada de más militares. En dalguna ocasión l'Exércitu supo de les quexes tramitades y amenazaron a la xente que denunció, polo qu'esti despachu decidió remitir toles quexes a la Procuraduría Xeneral en Bogotá, onde fueron archivaes».⁶⁷

87. La inversión social qu'habría resolver los problemes d'esclusión y probeza extrema tán llandada pol inxente gastu militar. «Hai 7.000 efectivos militares nel conceyu, ún por cada 3 habitantes y existe preocu-

pación por esti nivel de tropa. La esperiencia indica qu'aumenten les anomalíes nel área rural, como pasó cola "operación Aurora", na qu'hebíu captures masives de unes 1.000 persones señalaes por un encapucháu, pero salieron absueltas a los 6 y 18 meses».⁶⁸

88. L'Exércitu colombianu punxo en marcha campañes y cursos pa la tropa como les llamaes «Fe na causa» y «Comportamientu Ético Superior», que, baaes na disciplina, traten d'evitar conductes fuera de la llei nes tropes.⁶⁹

89. Pal Exércitu tamién ye bien costosu'l conflictu armáu. «Nel 2009 tuvimos 372 muertos y 1.033 firíos; nel 2010 fueron 318 militares muertos y 924 firíos».⁷⁰

90. Énte la falta d'oportunidaes y metanes d'una cultura onde tán presentes les armes, munchos xóvenes de sectores escluyíos solo tienen como perspectiva vital la vinculación a dalguna de les partes del conflictu armáu, polo que resulta dañina la figura del serviciu militar obligatoriu.

1. Execuciones estraxudiciales y masacres

«Yo temblo cuando m'alcuentro colos militares, pero nun baxo la cabeza porque ellos son culpables, incluyíu'l Presidente JUAN MANUEL SANTOS, que yera'l Ministru de Defensa cuando ellos cometieron

⁶⁵ Ibídem.

⁶⁶ Ibídem.

⁶⁷ Reunión con MARLY YANETH LOSADA ROMERO, procuradora municipal d'Algeciras. Huila, 9 de mayu de 2011.

⁶⁸ Reunión con MARLY YANETH LOSADA ROMERO, procuradora municipal d'Algeciras. Huila, 9 de mayu de 2011.

⁶⁹ Reunión col Brigadier General Emilio Torres Ariza, Xefe de Derechos Humanos y DIH del exércitu nacional. Bogotá, 11 de marzu de 2011.

⁷⁰ Ibídem.

tantos crímenes». Testimoniu d'un familiar de víctima d'execución estraxudicial. Ibagué, 7 de marzu de 2011.

91. Les execuciones estraxudiciales son una práctica denunciada como antigua na fuercia pública, pero foi nos últimos años cuando la sociedad reaccionó y se pudo conocer parcialmente la dimensión d'estos delitos que pol so carácter sistemáticu y masivu constituyen crímenes de lesa humanidá cometíos pola fuercia pública.

92. «La oficina en Colombia estima que más de 3.000 persones pudieron ser víctimes d'execuciones estraxudiciales, atribuyies principalmente al Exércitu. La gran mayoría de casos foi ente los años 2004 y 2008»⁷¹, siendo Ministru de Defensa l'actual Presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, responsable polo tanto del mandu y les acciones de los tropes y de la seguridá de la ciudadanía.

93. «Hebio abondos asesinatos de carácter asemeyáu pa caracterizalos como incidentes aisllaos fechos por malapenes dalgunos soldaos o unidaes renegaes, o “mazanes apodrecies”».⁷²

94. Les execuciones estraxudiciales tienen ente los sos causes: la presión al Exércitu por mostrar resultaos nel combate a los guerrilles, la directriz presidencial autorizando recompenses por baxes de guerrilleros (perres, vacaciones, cursos, ascensos) y la impunidá.

95. «La falta d'atribución de la responsabilidá penal foi un factor crucial pa que sigan produciéndose

casos de falsos positivos. La tasa d'impunidá de los homicidios atribuyíos a les fuercies de seguridá estimase anguaño na alarmante cifra del 98,5%. Simplemente, los soldados sabíen que podíen cometer tales actos y salir impunes».⁷³

96. «El mio fiu Douglas Tavera Díaz, que sufría retrasu mental, foi asesináu por tropes del batallón La Popa, del Exércitu Nacional, al mandu del Mayor VARGAS RIVAS el 28 de marzu de 2006 en San Juan del Cesar y presentáronlu como “guerrilleru del Frente 54 de les FARC dau de baxa en combate”. Siete militares implicaos aceptaron los cargos y acoyéronse a sentencia anticipada, pero a los otros 12 dexaron que-yos vencieran los términos pa la audiencia y puen quedar en llibertá. Sé que van matame por esixir xusticia; búsqenme, acorralénme en casa, llámenme pa amenazame. Por mieu munchos familiares d'ínocentes executaos nun denuncien; ye que se siente muncha rabia, impotencia y sobre too mieu».⁷⁴

97. «Hai una zuna que siguen nestos casos los militares: primero escueyen la víctima de baxos recursos, al saber que los familiares d'esos persones nun tienen plata pa buscales; después planien el viaxe y la desapaición forzada. Ehí entama l'angustia de les families. Llueu mátenlos en sitios allonxaos y desaparecen-yos el cuerpu y los documentos d'identidá; a dalgunos tamién-yos desaparecen los güelgues dixitales en complicidá con melicina llegal, pues cola identidá sí podríen alcontrar a les families, pero trátase de desaparecelos del too. Llueu “llegalícenlos” énte los mandos militares y a vegaes énte la prensa como guerrilleros muertos en combate, y entiérrenlos como NN. Ehí yá queden perdíos. A dalgunes families que descubrie-

⁷¹ Informe de l'Alta Comisionada de les Naciones Xunies pa los Derechos Humanos. A/HRC/16/22, 3 de febreru de 2011.

⁷² Informe A/HRC/14/24 del relator especial Philip Alston sobre les execuciones estraxudiciales, sumaries o arbitrarias. 31 de marzu de 2010.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ Testimoniu en Barranquilla, 4 de marzu de 2011.

ron la patraña los militares ofrecen-yos dineru pa que nun los denuncien, pero a la mayoría amenácnalos de muerte. N'AFUSODO hai 12 familiares d'executaos amenazaos de muerte. Si se llogra qu'haya investigación pol crime, asúmela la Xusticia Penal Militar, y ente ellos nun se condenen. Hai que lluchar muncho y esponese p'alcontrar los cuerpos y pa qu'investigue la xusticia ordinaria y non la de los militares, y a veces déxense vencer los términos pa que los militares queden en llibertá, riéndose d'ún y amenazando a los familiares». ⁷⁵

98. La persecución a los llabradores de la finca «La Europa» incluye execuciones estraxudiciales. «En 1998 foi executáu pola Policía Nacional nel correximientu La Haya de San Xuan Nepomuceno'l llabrador JOSÉ DEL CARMEN PÉREZ CHAMORRO, quien foi presentáu como guerrilleru dau de baxa en combate. La so hermana, RUBY MARÍA PÉREZ CHAMORRO, que denunció esta execución, foi sacada de so casa na finca «Villa Colombia», d'Ovejasm y alcuéntrase desaparecida dende'l 2004, pero esti últimu casu nun lu denunciemos por mieu a que se repitiera la historia». ⁷⁶

99. «A CARLOS ARTURO GUAÑAS executólu l'Exércitu pel Cocal, cerca de Río Manso, baxó a mercar la remesa, pero al nun tornar a casa la so muyer buscólu y alcontró'l so caballu sueltu cerca d'una base militar, preguntó por él y un soldáu díxo-y «sí, ési yera guerrilleru y dímoslu de baxa ayer». ⁷⁷

100. «N'Altamira creóse un grupu paramilitar pa matar llabradores. L'Exércitu retirábase pa que pudieren asesinar, o facien-yos el cordón de seguridá pa

protexelos. A un llabrador sacáronlu de so casa a les 6 de la mañana y ametralláronlu. La prensa mostrólu como muertu en combate, pero una muyer ye testigu de cómo la tropa-y ponía uniforme camufláu al muertu». ⁷⁸

101. «A ELMER ECHEVERRI executáronlu'l 14 de febreru de 2008. Salió de prisión por robu agraváu. La prensa mostrólu xunta otros muertos como "5 muertos, l'últimu reductu de la Tulio Varón". Dixerón que yeren estorsionistes que desobedecieron la orde 'alto', pero ye falso. La investigación llévala la Xusticia Penal Militar, pero los familiares nun tenemos cómo pagar abogaos». ⁷⁹

102. Nel departamentu del Tolima hai documentaos 31 casos d'execuciones estraxudiciales ente'l 2006 y el 2010, como la de DEMER VERJÁ JEREZ, asesináu'l 5 de mayu de 2008 n'El Limón, Chaparral; TIBERIO GARCÍA CUÉLLAR, Presidente de la Xunta d'Acción Comunal de la sienda Aguas Claras, del correximientu de La Marina, Chaparral, asesináu'l 28 de mayu de 2006; CAMILO AVILEZ y JESÚS MARÍA RIAÑO el 19 de xunetu de 2007 en La Marina; CARLOS VARGAS SEDANO, asesináu en Rovira'l 30 de mayu de 2008; LUIS GONZAGA CARDOSO, asesináu en La Islandia, Rovira, el 7 de agostu de 2008; MANUEL CUÉLLAR MAJE'l 18 d'avientu de 2008. Énte esto les comunidaes movilizáronse a primeros d'agostu y llogró coles autoridaes un alcuertu de non repetición, pero a los pocos díes, el 23 de agostu de 2007, l'Exércitu Nacional sacó de so casa, torturó y mató a RUBÉN DARÍO LUNA TRIANA, al que presentó como guerrilleru dau de baxa en combate». ⁸⁰

⁷⁵ Testimoniu d'un familiar de persona víctima d'execución estraxudicial. Barranquilla, 4 de marzu de 2011.

⁷⁶ Testimoniu na finca «La Europa». Oveyes, Sucre, 5 de marzu de 2011.

⁷⁷ Testimoniu n'Ibagué, 7 de marzu de 2011.

⁷⁸ Ibídem.

⁷⁹ Ibídem.

⁸⁰ Informe de les organizaciones sociales del Sur del Tolima a la VII Delegación Asturiana. La Marina, Chaparral, 8 de marzu de 2011.

103. «El temor de les comunidaes llabriegues a nueves execuciones básase nestos antecedentes y al reforzamientu nel 2010 hasta completar 12.000 soldaos nel sur del Tolima cola Sexta Brigada y les Brigadas Móviles 8, 20 y 26, el batallón d'Alta Montaña General Santos Gutiérrez Prieto y el Batallón Energético y Vial nº 6. Estes tropes realicen bombardeos y ametrallamientos cerca de centros poblaos».⁸¹

104. «A ELDER VALDERRAMA sacáronlu de so casa, na sienda El Silencio, a les 6 de la mañana. A los diez minutos sonaron 12 disparos. Yo salí coles neñes gritando que nun lu mataran, que yera un civil, pero nun nos dexaron dir tres dellos, llevábenlu andando coles manes na ñuca. "El so home tá muertu", dixo ún, que lu matáron a les 8 de la mañana. Taba con tiros na columna, partieron-y los brazos y la mandíbula, entregáronlu'l fin de selmana y pasáronlu como guerrilleru. ¿Qué espera l'Estáu de los güérfanos que dexó?"».⁸²

105. «El 28 de marzu de 2004 garraron a varios llabradores inocentes. El 30 de mayu l'Exércitu asesinó al mió fíu, que curiaba una finca. El crime tá impune y los neños, que son los míos nietos, vieron matar a so pá y viven con rabia ¿ye xusto o non? L'Exércitu llega al llau de la escuela pero nun se-yos pue dicir nada porque tienen les armes».⁸³

106. «Al mio home, EDGAR JOSÉ MOLINA, que yera de la Xunión Patriótica matólu l'Exércitu nun retén que montaron de sópitu a cinco minutos d'Algeciras, el 28 de febreru de 2008. Dos soldaos y un mayor dicen que lu mataron por nun detenese cola moto nel retén, pero otru militar dixo que paró y sacó una pistola y tocó-yos matalu. Comprobóse que mienten. Él

foi torturáu, golpeáu nes uñes, mandíbula, testículos, brazos, piernes y pies partíos. Dexáronlu irreconocible, por eso nun nos dexaben velu. El comandu operativu nº 5 foi como cuatro veces a la casa a preguntar que si yera guerrilleru o milicianu. Agora la tropa permanez metida n'antoxana de mio casa y acosen a la mió fía, que ye menor d'edá».⁸⁴

107. «El 11 de febreru de 2011 al mediu día desconocíos irrumpieron na sienda "Dios Peña", conceyu de San Miguel, Putumayo, oriella del ríu San Miguel. Ellí cortáron-y la cabeza a machetazos a LUZ ROA ALFONSO, de 59 años, LUZ MERY ROA ROA, de 35 años y Vicepresidenta de la Xunta d'Acción Comunal, y a la menor SORITH JULIET ALFONSO ROA, de 5 años, a quien amás de corta-y la cabeza cortáron-y les manes. Tamién asesinaron con arma de fueu a dos trabayadores de la finca. Too esto asocedió bien cerca de los efectivos de la Brigada 27 de Selva, el Grupu Mecanizáu José María Melo y la Fuerzia Naval del Sur».⁸⁵

2. Amenaces

«Equí amenacen p'aforrar les bales; cuando quieren matar a dalguien búsqenlu y sáquenlu de debaxo les piedres». Estudiante de la Universidá de Sucre. Sincelejo, 5 de marzu de 2011.

108. Aumentó'l númeru de persones amenazaes de muerte, pero les denúncies por esta violación de los derechos humanos queden na impunidá al nun s'investigar, magar que les víctimes aporten a les autoridaes datos y pistes de los presuntos responsables.

⁸¹ Ibídem.

⁸² Testimoniu n'Algeciras, 9 de marzu de 2011.

⁸³ Ibídem.

⁸⁴ Ibídem.

⁸⁵ Comunicáu de l'AUDIENCIA CIUDADANA POLA VERDÁ. Puertu Asís, 12 de febreru de 2011.

Hai la sensación xeneralizada de desamparu énte'l pe-ligru de muerte violenta y programada.

109. «La organización estadounidense WOLA y otres 80 ONG en Derechos Humanos denunciaron güei amenaces de muerte al paecer feches poles Águilas Negras, herederes de los antiguos paramilitares. Según WOLA, el vienres de la selmana pasada recibieron un corréu ellectrónicu nel que-yos decía: “Por ser defensores de los DD.HH. nun crean que puen escondese tres les Fiscalíes y otres instituciones. Tamos vixilando y puen considerase muertes”. Nel corréu ellectrónicu acúsase a estes ONG de tener nexos coles FARC y declárenles “oxetivu militar”. Na llista de amenazaos figuren Codhes, Indepaz, Afrodes, ACIN y el Colectivu d’Abogaos José Alvear».⁸⁶

110. Tamién fueron amenazaos de muerte dalgunos dirixentes políticos de la oposición y persones dedicaes a buscar una solución política al conflictu armáu, como la exsenadora PIEDAD CÓRDOBA, quien denunció la persecución énte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Lo que se fixo foi tipificar tolo que se vieno dando, la campaña de desprestixu, les declaraciones del presidente Uribe en contra de mio, que se mostraron na audiencia. La muerte moral y psicolóxica a la que tuvi sometida durante tou esti tiempu».⁸⁷

111. «HÉCTOR IVÁN SANMARTÍN RIVERA, capataz del empresariu que nos invade la finca, amenázanos y nun-y pasa nada; fai un mes la policía decomisó-y un arma ilegal y el tipu salió fotografiáu na prensa⁸⁸ por porte ilegal, pero volvió a les tierres con más xente

⁸⁶ *El Tiempo*. Bogotá, 17 de mayu de 2010.

⁸⁷ *El Tiempo*, 26 de marzu de 2011.

⁸⁸ <http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/caen-dos-personas-por-porte-ilegal-de-armas-11745>.

armao y vistíos de camuflaxe. Dixo que si-y quitaben una sacaba dos armes más, que si siguiémos metiendo ganáu na tierra prendíanos fueu y agora amenázanos diciendo que va traer al Exércitu».⁸⁹

112. Son vezu les amenaces de muerte contra defensores del mediu ambiente por defender los territorios y oponese a los planes d’esplotación de recursos naturales por parte d’empresas tresnacionales, o por denunciar la corrupción y los vínculos ente políticos, paramilitares y redes del narcotráficu, tamién por defender el carácter de serviciu públicu de derechos como la educación o la salú en víes de privatización. «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la persistencia de la situación d’amenaces, acorralamientu y asesinatos de familiares de les defensores de derechos humanos María del Socorro Mosquera Londoño y Mery Naranjo Jiménez. Les dos son beneficiaries de midíes cautelares de la CIDH dende 2004 y de midíes provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dende 2006, ensin que l’Estáu tomare midíes efectives de protección. Esti fechu enmárcase nel patrón de persecución y desprotección en que s’alcuentren les defensores de derechos humanos na Comuna XIII de Medellín, Colombia».⁹⁰

113. Vixilantes armaos de la empresa ilegal ⁹¹ «Seguridad 911», propiedá de la empresaria ENILCE GÓMEZ, vienen amenazando de muerte a los y les di-

⁸⁹ *Ibíd.*

⁹⁰ Comunicáu de Prensa de la CIDH «CIDH CONDENA PERSISTENCIA D’AMENACES Y ASESINATOS CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LES SOS FAMILIES EN COLOMBIA». Washington, D.C., 7 de marzu de 2011.

⁹¹ La Superintendencia Delegada pal Control de la Vixilancia Privada, mediante comunicación n° 019488 de 2010, informó que la empresa Seguridad 911 nun tien llicencia de funcionamientu y en consecuencia nun pue portar armes.

rixentes de la comunidá llabriegu ocupante de la finca «El Tamarindo», asitiada ente Galapa y Barranquilla, Atlánticu. Les amenaces fueron denunciaes énte les autoridaes competentes y afecten a 187 families (cerca de 500 persones) desplazaes na dómina de los 90 polos paramilitares de Sucre y Bolívar.⁹²

114. El grupu illegal de vixilancia envenenó los estanques piscícolas de la comunidá y en delles ocasiones actuó xuntu col ESMAD de la Policía Nacional, destruyendo los ranchos emplegaos como viviendes pola población desplazada. N'hores de la nueche acúen xunta les patrulles del Exércitu Nacional.⁹³

115. HENRY BLANCO OROZCO, dirixente de la comunidá desplazada asitiada na finca «El Tamarindo», vien recibiendo amenaces de muerte por parte de los vixilantes de la empresa “Seguridad 911”, los que'l 13 d'avientu del 2010, mazcaraos de fuerzia pública, intentaron asesinalu⁹⁴.

116. El mesmu grupu de vixilancia privada amenació de muerte a la funcionaria de la Defensoría del Pueblu, ANA MARÍA GÓMEZ, y a MARÍA CEDEÑO, dirixente de la FCSPP. Tamién fueron amenazaos ALEIDA PINEDA, ÁLVARO SÁNCHEZ y ANDRÉS ORTEGA, integrantes de la comunidá.

117. La llabradora EUNICE ROBLES foi amenaziada de muerte pola inspectora de policía PERLY ROA, quien-y espresó «téngote na mira».⁹⁵

118. Detrás de los desallugos ilegales y de les amenancies de muerte n'El Tamarindo hai intereses económicos venceyaos al proyectu de la zona franca,

de mou especial la familia Char, empresarios como Julio Muvdi, y empreses arreyaes al narcotráficu, como Inversiones El Prado y Finanzas del Norte, qu'apaecen na llamada «Lista Clinton».⁹⁶

119. La familia del Sr. NATALIO ESCOBAR RAMÍREZ foi amenazada de muerte. «Natalio foi asesinau'l 14 de xunu del 2004 pol grupu paramilitar comandáu por alies Omega, cumpliendo una orde de MATÍAS OLIVEROS DEL VILLAR, alcalde d'El Banco, Magdalena, pa evitar pagar un dineru que-y debía a la familia. Los paramilitares amenaziaron de muerte a tola familia, esixieron que vendiéramos tierres y ganaos y diéronnos veinte díes de plazu pa marchar del pueblu. Eso fiximos, desplazámonos y mudámonos varies vegaes de casa y de ciudá, pero descúbrennos siempre. Del crime de Natalio hebio un testigu, pero asesinaronlu'l 1 de xunetu de 2010, y tamién asesinaron hai una selmana en Bogotá al nuesu abogáu'l Dr. JULIO PISCOTTI VAN STRAHLEN. Tenemos mieu, pues hai informaciones de que nos van a matar a toos. Somos 4 fíos, la viuda y dos nietos. El paramilitar alies «El Flacu» diba matanos hai poco pero garráronlu. Somos testigos protexíos pola Llei de Xusticia y Paz de los crímenes cometíos pol xefe paramilitar Jorge 40, y tenemos un policía como escolta, pero la mano de los paramilitares ye mui llarga y van matanos a toos, amás l'alcalde sigue en llibertá. Pidimos por Dios que nos saquen del país».⁹⁷

120. «Varios líderes comunitarios de barrios asiataos na oriella del ríu Magdalena y dirixentes de l'Asociación contra la contaminación del carbón, foron amenazaos de muerte por grupos paramilitares al

⁹² Testimonios de los desplazaos asentaos na finca «El Tamarindo».

⁹³ Ibídem.

⁹⁴ Ibídem.

⁹⁵ Ibídem.

⁹⁶ Comunicáu del 5 de agostu de 2010 soscritu pol MOVICE Capítulu Atlánticu, y la Coordinación Colombia-Europa. EUA.

⁹⁷ Entrevista con familiares de NATALIO ESCOBAR RAMÍREZ. Barranquilla, 4 de marzu de 2011.

serviciu de la empresa Michellmar, coles operaciones d'embarque de carbón contaminaron el ríu y les cais de los barrios averaos al puertu». ⁹⁸

121. «Na Universidá del Atlántico aumenten les amenancies de muerte contra profesores y estudiantes metanes dispositivos de seguridá que supuestamente deben garantizar la seguridá dientro del *alma mater*. Foron amenanciaos de muerte los xóvenes integrantes de la Coordinadora Estudiantil, los estudiantes CRISTÓBAL COLÓN MARÍN, HENRY MOLINA (víctima d'un atentáu'l 14 de xineru de 2011), FABIÁN ESCOBAR DURÁN y GARY MARTÍNEZ, que tuvo acoyíu pol Programa Asturianu d'Atención a Víctimes de la Violencia en Colombia nel 2010. Amás recibió amenancies de muerte'l profesor JOSÉ GABRIEL COLEY, representante énte'l Conseyu Superior de la Universidá, y la estudiante VICTORIA CAÑAS GONZÁLEZ, dirixente de la FEU, dambos amenazaos por oponese a la reelección de la rectora ANA SOFÍA MESA DE CUERVO. L'antecedente que preocupa ye que nesta Universidá fueron asesinaos con impunidá más de venti persones ente profesores, estudiantes y trabayadores nos últimos años». ⁹⁹

122. Na Universidá de Sucre hai amenancies de muerte contra alumnáu afiliáu a ACEU y contra trabayadores afiliaos n'ASPU por denunciar la corrupción. «La Universidá alministrativamente tá baxo'l control de los paramilitares. Les amenancies arrecien cada vez qu'hai elecciones al Conseyu Superior. Varios dirixentes de los estudiantes tuvieron que desplazase, como TATIANA NIEBLES y PAOLA ROMERO, amás amenanciaron a PEDRO GENEY por defender los derechos de la

⁹⁸ Entrevista con MOVICE Atlántico. Barranquilla, 4 de marzu de 2011.

⁹⁹ Testimoniu de un dirixente de l'ACEU. Barranquilla, 4 de marzu de 2011.

comunidá LGBT, y a EDUARDO CASTRO y MAIRA SIERRA, que foi detenida inxustamente dos veces». ¹⁰⁰

123. Dende hai dos años un grupu paramilitar maniobra na Universidá del Tolima. «Les organizaciones estudiantiles foron declaraes oxetivu militar poles Águilas Negras, pero amás dientro la Universidá hai represión y detenciones arbitrarias». ¹⁰¹

124. «El 1 de agostu de 2009 foi asesináu en Barranquilla MAURY DE ÁVILA, integrante de la Fundación Infancia Feliz. El crime continúa impune. La Directora de la Fundación, ROSARIO MONTOYA, sufrió un intentu de desapaición forzada'l 2 de xunetu de 2010. Dende qu'anició la entrega de restos de víctimes d'execuciones estraxudiciales y coles Audiencies de la Llei de Xusticia y Paz, incrementáronse les amenancies contra otros miembros de la organización. Dalgunes llamaes amenazantes tán faciéndose dende teléfonos del GAULA del Exércitu Nacional. La nuesa organización fai acompañamientu a víctimes de violaciones de los derechos humanos na rexón Caribe. L'esquema de seguridá que nos asignaron ye insuficiente». ¹⁰²

125. El 25 de febreru de 2011 la fía de la Presidenta del Comité de Derechos Humanos del baxo Ariari, DORIS RIVERA RÍOS, recibió una llamada amenanciantena que-y dixerón «alcuéntrome en frente de so casa en Compartir, perra *hijueputa*, a usté vamos fae-y lo mesmo que a so madre, que nos escapó por poquitín, pero con usté nun va pasar lo mesmo». Doris Rivera foi amenazada de muerte, polo que foi acoyida dende agostu del 2010 nel Programa Temporal de Protección

¹⁰⁰ Testimoniu de dirixente estudiantil. Sincelexo, Sucre, 5 de marzu de 2011.

¹⁰¹ Testimoniu de dirixente estudiantil. Ibagué, 7 de marzu de 2011.

¹⁰² Testimoniu d'integrantes d'Infancia Feliz en Barranquilla, 4 de marzu de 2011.

de Defensores de Derechos Humanos auspiciáu pol Gobiernu de Catalunya. Les amenancies contra Doris y la so fía provienen de los grupos paramilitares qu'operen llibremente en zones baxo estrictu control de la Brigada Móvil nº 12 del Exércitu Nacional.

126. El 8 de marzu de 2011 el grupu paramilitar Águilas Negras amenanció de muerte a persones integrantes de les siguientes organizaciones: Comité Permanente pola Defensa de los Derechos Humanos del Risaralda, Nodo de Derechos Humanos del Exe Cafeteru, Antioquia y Choco adscritu a la federación sindical FECODE, Conseyu Departamental de Paz, Plataformes y Ongs de derechos humanos nacionales y a líderes y lidereses de les organizaciones de población desplazada. Afirman que «toa esta basoria d'auxiliadores de la guerrilla bien ceo será eliminada» y declaren como oxetivu militar a: MARÍA EUGENIA LONDOÑO, VICENTE VILLADA, JUAN CARLOS VALENCIA, GERARDO SANTIBÁÑEZ, DIEGO OSORIO M., GUILLERMO CASTAÑO, JAIRO QUINTERO, GUSTAVO MARÍN, HERNANDO AGUIRE y CARLOS VALENCIA». ¹⁰³

127. El 15 de marzu de 2011 fáense nueves amenancies de muerte contra dirixentes de la federación llabrador de la CUT. «Anque'l Gobiernu se niegue a dar protección a los miembros de FENSUAGRO, les amenancies siguen poles BACRIM. La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria —FENSUAGRO—CUT— denuncia énte la comunidá nacional ya internacional, l'amenancia fecha poles BANDES EMERXENTES ÁGUILAS NEGRES —BANCRIM— a la nuestra organización y a dirixentes filiales de FENSUAGRO, como a dirixentes sociales y agrarios de los departamentos de Caquetá, Huila y Putumayo, como son: ÁLEX GÓMEZ, OCTAVIO CO-

LLAZOS, MARTA BAQUIRO, ROSMERY LONDOÑO, HÉCTOR VALENCIA, LIBARDO PÉREZ, LUZ MILA BELTRÁN, CARLOS SILVA, WILSON PÉREZ, YESID DONCEL, YOLANDA FAJARDO, MAIDE SALCEDO, JORGE LONDOÑO, FERNACO JOJOA, FERNANDO MECAYA y ANTONIO VELEN». ¹⁰⁴

128. INGRID VERGARA, secretaria técnica del MOVICE Capítulu Sucre, beneficiaria de Midíes Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibió 26 amenancies de muerte por documentar y denunciar el desallugu violentu de tierres y el desenvolvimientu d'agronegocios que desconocen los derechos de les víctimes nos Montes de María. Ta clara la falta de voluntá del Gobiernu pa evitar que la sigan intimidando y persiguiendo. «Dícenme que nun me meta colos asuntos de tierres y amenanciaron a la mio fía CENDY TORRES, de 15 años, pa presioname y pa cobra-y el que promueva los derechos humanos énte los estudiantes de Bachilleratu. N'ochobre de 2010 salvéme d'un atentáu na plaza Majagual porque los asesinos pensaron que tenía dos escoltes y solo víen a ún. El 18 de payares de 2010 llamáronme dende una cabina en Sincelejo, de propiedá d'un paramilitar desmovilizáu. Dixéronme «Quieta colo de les tierres, nun te metas neso». El 1 d'avientu de 2010 dos homes armaos entraron en mio casa, grabaron y golpearon a Cendy, dicíen-y que nun los mirara a la cara, buscaron per tola casa documentos, llevaron el discu duru del computador. Tengo un esquema duru de seguridá, pero siéntome dañable».

129. Les amenancies contra los abogaos y abogaes de les víctimes son frecuentes. «Al abogáu ADI MELÉNDEZ, representante de les víctimes del MOVICE capítulu Sucre y de los llabradores de la finca «La Eu-

¹⁰³ Comunicáu de la Comisión de Derechos Humanos del Sindicatu d'Educadores de Risaralda. Manizales, 8 de marzu de 2011.

¹⁰⁴ Comunicáu del Comité Executivu de FENSUAGRO, Secretaría de Derechos Humanos.

ropa», d'El Guamo, y de la familia Lambraño asesinada en Caño Cholé, amenazólu de muerte la so propia escolta que yera un policía, por eso renunció al esquema de seguridá y muévese sin protección defendiendo víctimes humildes».¹⁰⁵

130. «La tarea de defender derechos humanos y recoyer datos de violaciones paralizóse nel municipio de Rovira por temor a les presiones de la xente armada; tamos retomándolo faciendo dalgunos talleres de derechos humanos baxo amenancies».¹⁰⁶

131. JOSÉ MANUEL GARCÍA, xerente del hospital Santa Lucía del conceyu de Roncesvalles, vien siendo amenazáu y estorsionáu por dalguien que diz ser alies «Wilmer», del Frente 50 de las FARC, quien se desmovilizó l'año 2009.¹⁰⁷

132. Periodistes que denunciaron les execuciones estraxudiciales foron amenazaos de muerte. «Soi LUIS REINOSO, denuncié nel mio periódicu les execuciones estraxudiciales y por eso foi golpeáu y tres veces amenazáu de muerte. Fui desplazáu por fuerces del Estáu que pretenden qu'Algeciras solo salga nes noticies polo que fai la guerrilla»¹⁰⁸. «Tamién por tar en medio del conflictu armáu, censuráronme participar n'asamblees comunales en dalgunes siendes».

133. Una vecina denuncia que'l Presidente de la Xunta Comunal de Quebrado del Sur aperta a la vecindá pa evitar que se denuncien les amenancies recibíes por grupos guerrilleros qu'operen na zona.

134. «Tán llegando amenancies de los paramilitares contra la asociación afrocolombiana Jóvenes Unidos

¹⁰⁵ Testimoniu en Sincelajo, Sucre, 5 de marzu de 2011.

¹⁰⁶ Testimoniu n'Ibagué, 7 de marzu de 2011.

¹⁰⁷ Informe de les organizaciones sociales del Tolima a la VII Delegación Asturiana. Ibagué, 7 de marzu de 2011.

¹⁰⁸ Testimoniu n'Algeciras. Huila, 9 de marzu de 2011.

por el Bienestar del Calima y contra toles comunidaes pues dicen «toa organización acaba o muerren».¹⁰⁹

135. El defensor de derechos humanos LUIS MORALES, que tuvo acoyíu nel 2010 pol Programa Asturianu d'Atención a Víctimes de la Violencia en Colombia, foi amenazáu en Medellín, otra vegada, pol grupu paramilitar Los Rastrojos.¹¹⁰

136. «Na Universidá amenazáronse a cerca de 49 persones dende 2007, ente los que s'alcuentren estudiantes, trabayadores y miembros del sindicatu. Mal contaes efectuáronse cuatro amenancies por parte de grupos paramilitares: dos en 2007, otra en 2009 por parte d'un grupu identificáu como bloque Nueva Generación de les Águilas Negras y ésta de 2011 de les Autodefensas Gaitanistas», informó Ávila. «Toes estes intimidaciones punxéronse en conocimientu de la Fiscalía y otres autoridaes competentes, pero nenguna denuncia tuvo respuesta o avance dalgún. Lo que nun queremos ye qu'estes investigaciones s'archiven por inoperancia de les autoridaes o por vencimientu de términos porque fixéronse daños que hai que reparar, ente esos la campaña d'estigmatización a la que tuvimos sometíos».¹¹¹

137. «Dende'l 2010 hai graves amenancies de muerte de xente armao y ensin control de la policía, contra les persones que conformamos ASFAVIT. Amenazaron a la monxa MARITZE TRIGOS, a la so hermana, al grupu bíblicu y a los que vivimos na casa muséu. Yá hebio un atentáu y la xente entama a desplazase otra vegada, anden presionando pa que nos desafilieemos d'ASFAVIT y dícenos “o marches o espelleyámoste”».¹¹²

¹⁰⁹ Testimoniu na V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹¹⁰ Ibídem.

¹¹¹ *Vanguardia Liberal*. Declaraciones d'Oscar Dávila, estudiante de la UIS, voceru na Mesa Nacional de Garantías pa Defensores de Derechos Humanos.

¹¹² Testimoniu en Trujillo, Valle. ASFAVIT, 12 de marzu de 2011.

138. «En xineru d'esti añu llegaron tres carros a la casa Muséu de La Memoria, amenazáronme de muerte por ser quien cuida la casa, son amigos d'El Alacrán, hai peligru pues la casa muséu nun tien vixilancia nin seguridá magar d'habela pidió». ¹¹³

139. «Hai amenances de muerte dende'l 2009 contra'l MOVICE Capítulu Valle del Cauca. El propiu Exércitu regó la comuna 18 de Cali con un panfletu amenazando de muerte "por guerrilleros"; hai paramilitares nel distritu d'Agua Blanca de Cali, nes comunes 18 y 20, en Yumbo los paramilitares Rastrojos y Águilas Negras tán asesinando xóvenes». ¹¹⁴

140. Un vecín del Correximientu de La Marina asegura qu'existen presiones de ciertas persones del pueblu lligaes a colectivos sociales pa evitar la denuncia sobre les estorsiones y aguuyamientos que reciben por parte de la guerrilla.

3. Desapaición forzada

141. Ye una grave violación de los derechos humanos, negándose la so existencia. «Los desapaecíos tán nel monte» yera una afirmación habitual de los militares al preguntáseles pol paraderu de persones desapaecies. ¹¹⁵

142. Nun se conoz la cifra real de persones desapaecies. El subrexistru dase pol temor de les families de les víctimes de denunciar ante les autoridaes, qu'en

muchos casos son vistes como executores o colaboradores de la desapaición forzada.

143. Sin embargo, ye un avance que'l Congresu de la República foi aprobáu la Convención Internacional pa la protecció de toles persones contra les desapaiciones forzaes.

144. A finales del 2010 rexistráronse 51.310 persones desapaecies en Colombia, de les que 12.632 foron consideraes hasta agora como desapaiciones forzaes, ente elles 3.073 muyeres y 3.042 persones menores de 20 años. Nel 2010 hebo un incrementu del 40% de les denuncies por desapaición forzada en rellación col 2009. ¹¹⁶

145. «El númberu de desapaecíos en Colombia nos últimos tres años ascende a 38.255 persones, que se dríen víctimes de la violencia de la guerrilla y de los grupos paramilitares qu'actúen nel país y asina como de la función represiva d'axentes estatales, según un informe del Institutu de Melicina Llegal. De la cifra total de persones desapaecies, 18.236 casos denunciáronse nel últimu añu, mientras que 15.696 corresponden al 2008 y 4.323 al 2007, lo qu'evidencia una moderación paulatina del fenómenu». ¹¹⁷

146. Con base en confesiones de los paramilitares eshumáronse 3.037 foses y alcontráronse 3.678 cadáveres; solamente 1.323 foron identificaos plenamente. ¹¹⁸

147. La impunidá pal delitu de desapaición forzada ye bien alta. La Oficina de la ONU en Colombia espresó la so preocupación «pola impunidá qu'existe en tornu a los 27.300 casos de desapaiciones forzo-

¹¹³ Ibídem.

¹¹⁴ Entrevista con MOVICE Capítulu Valle del Cauca y con CPDH Valle. Cali, 12 de marzu de 2011.

¹¹⁵ Testimoniu de familiar d'un sindicalista desapaecíu. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹¹⁶ Sistema d'Información Rede de Desapaecíos y Cadáveres (SIR-DEC).

¹¹⁷ Diariu «ABC», 11 de mayu de 2010.

¹¹⁸ Ibídem.

ses qu'investiga la Fiscalía... fago un llamamientu al Gobiernu de Juan Manuel Santos a fortalecer a les organizaciones xudiciales pa procesar a los responsables d'estos delitos».¹¹⁹

148. Nel cementeriu de La Macarena hai al menos 446 cuerpos de persones ensin identificar, dalgunes reportaes como desaparecíes, que foron entregaes poles fuerces militares como persones daes de baxa en combates.

149. ALBA NELLY MURILLO TABORDA, de 34 años d'edá, llabrador, defensora de derechos humanos, presidenta de la Xunta d'Acción Comunal de la sienda La Esmeralda, conceyu d'El Castillu, Meta, ta desaparecida dende'l 15 de febreru de 2009 cuando cruzó'l puente sobre'l ríu Llamanes controláu por tropes del Batallón 21 Vargas. Como defensora de Derechos Humanos ALBA NELLY dio el so testimoni u pal IV Informe de la Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia na so visita a la zona del Alto Ariari en xunetu de 2008. Regresó a la so rexón cola so familia dempués de sufrir un desplazamientu forzáu poles amenances y señalamientos que fixeron contra ella y contra los habitantes de la rexón los grupos paramilitares y los militares de la Sétima Brigada, IV División del Exércitu. Alba Nelly denunció que nun altercáu verbal el mayor Baquero y otros integrantes del Batallón 21 Vargas amenazáronla de muerte por denunciar los atropellos que cometen contra los llabradores del Alto Ariari. Un hermanu d'Alba Nelly, sindicalista afiliáu del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta, SINTRAGRIM-FENSUAGRO-CUT, y otros miembros de la so familia tán recibiendo amenances de muerte por militares del mesmu batallón, quienes

¹¹⁹ Declaraciones del Altu Comisionáu de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Christian Salazar. Bogotá, 23 de marzu de 2011. EUROPA PRESS.

esixen que cesen les denuncies de la familia pola desapareición d'Alba Nelly "o va pasa-yos lo mesmo".¹²⁰

150. «Llueu d'un enfrentamientu ente la guerrilla del M19 y l'Exércitu, que perdió 7 soldaos, llegó l'Exércitu a la Finca «La Sonora» y a los pocos díes los paramilitares del Bloque Calima, comandadu por alíes «Rasguño», el 1º d'abril de 1990 lleváronse a 11 persones y desapareciéronles como represalia por un supuestu apoyu al ELN. Muchos d'estos crímenes siguen impunes».¹²¹

151. El xueves 17 de febreru desapareció en Cali l'ambientalista SANDRA VIVIANA CUÉLLAR, cuando facía la ruta hacia el so sitiu de trabayu na Universidá Nacional seccional de Palmira. Sandra tien una llabor reconocida na llucha pola defensa del mediu ambiente y la naturaleza, ye activista del Referendu pol Agua y la protecció n d'humedales, asina como pola recuperación del ríu Cauca. Venía denunciando a empreses multinacionales que s'apropien y contaminen la riqueza hídrica del Valle del Cauca.

4. Tortures, tratu cruel o degradante

152. Les tortures son una práctica habitual, subreixtrada ya impune.

153. «La oficina en Colombia continuó rexistrando casos de tortura por miembros de la fuerca pública, y observó con gran preocupación la repetida ocurrencia d'esta violación en departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Meta, Valle del Cauca y Vichada. Preocupa en particular la situación en Mede-

¹²⁰ Denuncies ante la Delegación Asturiana de la Comisión de Derechos Humanos del Alto Ariari. Febreru de 2009.

¹²¹ Testimoni u en Trujillo, Valle. ASFAVIT, 12 de marzu de 2011.

llín, onde varies persones, incluyendo presuntos delincuentes, foron víctimes de tortura y malos tratos de forma reiterada. Varies persones baxo custodia policial sufrieron castigos físicos y psicológicos, n'ocasiones acompañaos d'insultos racistas. Los maltratos consistieron, ente otros, en golpes en varies partes del cuerpu, mediante puñetazos y pataes o con armes de dotación, asina como descargues eléctriques, quemadures, aspersión con gas pimienta y asfisia con bolsos de plásticu». ¹²²

154. «Ente los años 2002 y 2008 rexistróse que polo menos 173 muyeres foron víctimes de tortura. D'elles, 89 foron asesinaes dempués de ser torturaes, 38 quedaron con vida y 46 foron víctimes de tortura psicológica. Nos casos nos que se conoz la edá de la víctima (73), 30 yeren neñes, 18 yeran xóvenes, 24 yeran adultes y una yera adulta mayor». ¹²³

5. Detenciones arbitrarias y situación carcelaria

155. El nuevu tonu del gobiernu de JUAN MAUNEL SANTOS colos interlocutores tanto nacionales como internacionales nel tema de los derechos humanos nun se corresponde cola negativa del permisu por parte del INPEC a la VII Delegación Asturiana pa que constatará les condiciones de reclusión de les persones deteníes por delitos políticos na cárcel de La Picota en Bogotá, col precedente de que nel 2010 tampoco s'autorizó l'ingresu de la VI Delegación Asturiana a la cárcel de máxima seguridá de Valledupar.

¹²² Informe de l'Alta Comisionada pa los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22, numeral 36, px. 8. Febreru de 2011.

¹²³ X Informe sobre violencia sociopolítica contra muyeres, xóvenes y neñes en Colombia. Mesa de trabayu Muyer y Conflictu armáu.

156. «El Comité observa con preocupación l'alta incidencia d'hacinamientu y les quexes de tortura y otros tratos o penes crueles, inhumanos o degradantes dientro de los centros penitenciarios y en llugares de detención temporal». ¹²⁴

157. «La población reclusa nel país crez constantemente, pasóse de 60.175 persones internes en xunu de 2007, a 81.486 en xunetu de 2010, de les que'l 6,5% son muyeres, ye dicir, 5.331 anguaño. Del total xeneral, según cifres manexaes pol Comité de Solidaridá colos Presos Políticos, estímase qu'hai más de 7.000 persones deteníes por razones políticas —nun se conoz cifres esactes de cuántes deteníes polítiques hai». ¹²⁵

158. La situación carcelaria vulnera los derechos básicos de les persones deteníes. «La situación na cárcel de Picalaña n'Ibagué ye d'hacinamientu nun 60%, tratu cruel, inhumanu y degradante, confinación en sitios inadecuaos por nun tener lluz, agua nin comunicación, mala alimentación, ausencia de servicios de salú operativos y d'útiles d'aseu, ausencia d'anesos psiquiátricos, el 25% de los presos nun tien accesu a estudios o trabayos pa redimir pena, abusos y humillaciones de la guardia a los familiares de deteníos por delitos políticos... solicitamos un estudiu verdaderu por entes non gubernamentales, preferiblemente una comisión internacional esperta en temas carcelarios pa que elaboren mediante visites a diferentes cárceles del país, un informe sobre l'estáu de los derechos humanos dientro de prisiones». ¹²⁶

¹²⁴ CCPR/C/COL/CO/6 Comité de Derechos Humanos ONU. 99º período de sesiones. Xeneva, 12 a 30 de xunetu de 2010.

¹²⁵ X Informe sobre violencia sociopolítica contra muyeres, xóvenes y neñes en Colombia. Mesa de trabayu Muyer y Conflictu armáu.

¹²⁶ Carta unviada dende la cárcel de Pica Leña a la Comisión Asturiana por «Los prisioneros políticos y de conciencia integrantes de les FARC-EP». Ibagué, 3 d'abril de 2011.

159. Continúa la práctica de los montaxes xudiciales mediante l'usu de testigos falsos que, a cambio de dineru o de rebaxa de penes, sindiquen a dirixentes sociales y persones defensores de los derechos humanos de pertenecer a organizaciones armaes al marxen de la llei, especialmente grupos guerrilleros. Estes persones permanecen deteníes hasta dos años sin xuicio y al recuperar la llibertá alcuéntrense socialmente estigmatizaes y na mayoría de los casos revictimizaes poles amenances de muerte y pol desplazamientu forzáu.

160. «Al Comité preocupa-y l'alta incidencia de detenciones arbitraries, y en particular l'usu de la detención preventiva alministrativa por parte de la policía y la realización de detenciones masives por parte de la policía y l'exércitu. El Comité observa qu'órdenes de captures a menudo carecen de suficientes elementos probatorios y que les detenciones estigmaticen a ciertos grupos como líderes sociales, mozos, indíxenes, afrocolombianos y llabradores».¹²⁷

161. «El 6 de payares de 2010 en Bucaramanga foi capturada la defensora de derechos humanos ya integrante de la FCSPP, CAROLINA RUBIO ESGUERRA, acusada de rebelión por pertenecer al frente 24 de FARC por dos testigos sin identidá. Tien llibertá condicional por estáu avanzáu de gravidez».¹²⁸

162. Ye frecuente l'uso d'esta modalidá pa facer apresar a les y los dirixentes llabradores nos conflictos por tierras, como ocurre con varios llabriegos de la Finca «La Europa», d'Ovejas, Sucre, y n'otros conflictos de tierras, lo que traí como consecuencia la pérdida de la llibertá y la destrucción de les organizaciones

llabradores, oxetivu que persiguen los usurpadores de tierras. «Nuesa fuercia yera'l sindicatu que tenía llabradores afiliaos en Chalán, Ovejas, Colosó, y por tola sabana, pero vieno la guerra y la estigmatización y les mentires de los militares y los terratenientes cola Operación Orión diciendo que yéramos del Frente 35 de las FARC y metiéronnos a la cárcel Modelu a los collacios de la Xunta Directiva, a otros matáronlos o desplazáronlos y acabaron col nuestru sindicatu. Llamábase Sindicato de Agricultores de Sucre, filial de FENSUAGRO. Agora finamos de fundar otro sindicatu, tou ye llegal pero tenemos mieu, equí la institucionalidá solo protexe a los ricos».¹²⁹

163. Dalgunos paramilitares presos adoptaron como venganza la modalidá d'involucrar, mediante falsos testimonios, nos sos propios procesos penales a los defensores de los derechos humanos que tuvieron el valor de denuncialos. Pa ello declaren que «yo reuníme con esi señor», dando detalles falsos de supuestos alcuentros y acuerdos que finen colos testigos encarcelaos al llau de los sos enemigos.

164. Ési ye'l casu de los defensores de derechos humanos CARMELO AGAMEZ, presu na cárcel de Corozal, Sucre, y de DAVID RAVELO, presu na cárcel La Picota de Bogotá.

165. El defensor de derechos humanos CARMELO AGAMEZ ta presu na Cárcel de Corozal, Sucre. «El 14 de payares de 2008 mediante un montax xudicial cola complicidá del fiscal RODOLFO MARTÍNEZ, apresaron a Carmelo acusándolu de ser paramilitar, cuando yera él quien los venía denunciando poles masacres en San Onofre. La xusticia vien-y escamoteando el derechu a la defensa, negaron-y la llibertá condicional diz que

¹²⁷ CCPR/C/COL/CO/6. Comité de Derechos Humanos ONU. 99º período de sesiones. Xeneva, 12 a 30 de xunetu de 2010.

¹²⁸ Comunicáu «Pol derechu a la oposición política». Organizaciones sociales de Santander.

¹²⁹ Testimoniu na finca «La Europa». Ovejas, Sucre, 5 de marzu de 2011.

por ser “un peligru social”, pero de los 27 paracos qu’él denunció solo 3 siguen deteníos, a los demás dexáronlos en llibertá o dieron-yos la casa por cárcel. Lleva 28 meses preso inxustamente y na mesma cárcel recibió amenances de muerte de les Águilas Negras». ¹³⁰

166. «Toi procesado fai 28 meses por concierto pa delinquir diz que por reunime colos paramilitares cuando foi yo quien acusó a estos grupos. Dos años y mediu ensin llibertad y aún nun hai sentencia, nin data de xuicio. El fiscal que lleva’l casu ta prevaricando, lo que quieren ye qu’acepte los cargos y m’acueye a sentencia anticipada. Nun lo voi facer. Nun soi culpable». ¹³¹

167. El 14 de setiembre de 2010 foi deteníu DAVID RAVELO CRESPO, miembru de la Xunta Directiva de la Corporación Rexonal pa la defensa de los Derechos Humanos del Magdalena Medio —CREDHOS—, organización beneficiaria de medidas cautelares otorgaes nel añu 2000 pola Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esti dirixente popular ye sobreviviente del esterminiu del partíu Xunión Patriótica, miembru del Partíu Comunista Colombianu y del Movimientu de Víctimes de Crímenes de Estau —MOVICE—. Vien recibiendo amenances de muerte contra él y la so familia por parte de los grupos paramilitares qu’en venganza acúsenlu de tener vínculos cola so organización y d’haber asesinau a un candidatu a la alcaldía de Barrancabermeja en 1990. ¹³²

168. Continúa la práctica de les detenciones masives con base en testigos falsos. «El viernes 14 de

¹³⁰ Entrevista na cárcel de Corozal, domingu 6 de marzu de 2011.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² Denuncia de CREDHOS. Bogotá, setiembre del 2010.

xineru de 2011 foi capturada na ciudá de Cúcuta la estudiante de Español y Lliteratura, y poeta de la Universidá Industrial de Santander ANGIE MARCELA GAONA, al momentu de rexistrar la so entrada al país na frontera con Venezuela, n’onde alcontrábase xestionando actividaes culturales. Tres días dempués, el llunes 17 de xineru, nel municipiu de Floridablanca, produzse la captura del estudiante universitariu JULIÁN ALDONI DOMÍNGUEZ, miembru activu del Comité de Derechos Humanos de la CUT, del Bloque Estudiantil y del Colectivu de Defensa de los Derechos Humanos CODDEHU de la UIS; igualmente l’estudiante de derechu de la Universidá UNICIENCIA, miembru activu del Comité de Derechos Humanos de la CUT y miembru del sindicatu de vendedores informales USDEVI, WILLIAM RIVERA RUEDA». ¹³³

169. POMPILIO DÍAZ REINOSO y les sos fíes DALIA DÍAZ BERMÚDEZ y DANIA DÍAZ —menor d’edá— tán deteníos arbitrariamente dende’l 22 de xunetu de 2010 y el 16 de ochobre de 2010. ¹³⁴

170. El señor JOSÉ VICENTE MÉNDEZ ZAMBRANO foi víctima de seis (6) detenciones arbitraries: 3 de xunu de 2004, 2 d’agostu de 2008, 11 de xunetu de 2009, 21 de febreru de 2010, 9 de xunu de 2010 y 6 d’agostu de 2010. Actualmente ta deteníu acusáu de rebelión na cárcel Picaleña d’Ibagué. ¹³⁵

171. Tamién son frecuentes les detenciones masives y arbitraries. El 13 de xunu de 2009 l’Exércitu Nacional detuvo a 14 llabradores acusándolos del delitu de rebelión nel Correximientu Las Hermosas de Chaparral. Trátase d’EVER QUIJANO, WILSON MEDINA,

¹³³ Comunicau «Pol derechu a la oposición política». Organizaciones sociales de Santander.

¹³⁴ Informe de les organizaciones sociales del Tolima ante la VII Delegación Asturiana. Ibagué, 7 de marzu de 2011.

¹³⁵ *Ibidem*.

MAURICIO COLLAZOS, JESÚS PORTELA, EDWIN MEDINA, MILLER TAPICERO, JORGE GARCÍA, MARTHA CECILIA OROZCO, TRELIVIO GUZMÁN, NORBERTO FERNÁNDEZ, MAURICIO CRIOLLO, ALCIBIADES ROMERO, ALBEIRO SERNA y ARNULFO TRIANA.¹³⁶

172. «Soy ALBEIRO QUINTERO y tuve preso 9 meses por un montaje judicial. Ahora aparezco en una lista del Ejército que dexaron apuntada detrás de un mapa. Dicen por ahí que van a pistolearme».¹³⁷

173. «El alcalde de Algeciras nos da la espalda y la mentira que te amenaza. Si el Ejército, que es la fuerza del orden y quien debería cuidarnos, en vez de eso mátanos, ¿qué hacer?»¹³⁸

6. Violencia sexual, niños/es

174. La violencia contra las mujeres y niños es habitual y impune en Colombia dentro de las familias y en zonas con conflicto armado, donde el cuerpo fue convertido en botín de guerra.

175. Comprende formas de control o amenazas a la forma de vestir, restricciones a las relaciones sociales, trabajo doméstico forzado, acoso y violencia sexual, sobre todo en zonas de conflicto armado.

176. «El Comité expresa la preocupación ante información que indica cifras alarmantes de violencia sexual contra mujeres y niños. Al Comité preocupa la cantidad de estas violaciones cuya responsabilidad es atribuida a miembros de las FARC-EP y de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares. Además, el Comi-

té expresa la preocupación acerca de casos en los que los presuntos responsables son miembros de la fuerza pública y que en la mayoría de estos casos las víctimas son niños. El Comité lamenta que no se tomaron las medidas necesarias para avanzar en investigaciones de los 183 casos de violaciones sexuales remitidos por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación. Eso mismo, preocupa y la invisibilidad de los crímenes de violencia sexual y los mecanismos establecidos por la Ley n.º 975 de 2005».¹³⁹

177. La violencia sexual contra las mujeres y los niños en zonas de confrontación armada es una práctica generalizada y impune. Al menos medio millón de mujeres fueron abusadas en los últimos diez años, pero la cifra puede ser superior por el subregistro originado en el temor y el pudor, y sobre todo por la impunidad que queda esta modalidad de violencia. «La violencia sexual contra las mujeres es habitual, sistemática y invisible».¹⁴⁰

178. «Tuve 4 hijos y a uno se lo querían llevar los paramilitares, opuse y uno de ellos, al que llamo "Alex", sacóme a entrevista con el comandante. Por el camino tomé el pelo y tumbéme en una zanja, resistí y metíme a un cafetal. Violóme, hizo lo que quiso conmigo. Nadie me auxilió por mí, aunque grité y escapé varias veces, hasta que desnuda aventéme por un barranco. Entonces grité que les pagaría. La policía ayudó y a huir al responsable. Al año siguiente mi hijo FREDY HUMBERTO RUIZ, de 24 años, desapareció. Lleváronse los paramilitares por venganza, algunos vecinos vieron que teníanlo amarrado con alambres».¹⁴¹

¹³⁶ *Ibidem.*

¹³⁷ Testimonio en Algeciras. Huila, 9 de marzo de 2011.

¹³⁸ *Ibidem.*

¹³⁹ CCPR/C/COL/CO/6. Comité de Derechos Humanos ONU. 99º período de sesiones. Ginebra, 12 a 30 de octubre de 2010.

¹⁴⁰ *Diario Público*, «La Voz de Asturias», 10/09/2010.

¹⁴¹ Testimonio en Trujillo. ASFAVIT, 12 de marzo de 2011.

179. «La principal conclusión de la encuesta ye l'eleváu númeru d'actos de violencia sexual contra les muyeres en Colombia n'aquellos conceyos con presencia d'actores armaos. La investigación indica que, nel periodu 2001-2009, nos 407 conceyos con presencia de Fuerza Pública, guerrilla y paramilitares el 17,58% de les muyeres —ye dicir, un total de 489.687 muyeres— foron víctimes directes de violencia sexual. Esti datu significa qu'annualmente, en promediú, 54.410 muyeres foron víctimes directes de dalgún tipu de violencia sexual; 149 diariamente y 6 cada hora en conceyos colombianos con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitares u otros actores armaos».

180. «Ye frecuente'l reclutamientu de neños y neñes pa llabores rellacionaes col conflictu armáu».¹⁴²

181. «El Comité observa con preocupación el reclutamientu de neños por parte de grupos armaos ilegales y en particular por parte de les FARC-EP y l'ELN. Al Comité tamién-y preocupa que la fuerza pública siga usando neños n'actos cívicos militares, como'l programa "soldáu por un día", y que realícese interrogatorios de neños col propóscitu de recoyer intelixencia».¹⁴³

182. «La oficina en Colombia recuerda que la llínea ente'l reclutamientu forzáu y el voluntariu de neños y neñes ye llegalmente irrelevante y que'l conceptu d' "utilización" debe ser interpretáu de la manera más amplia. Los grupos armaos ilegales tán obligaos, en cualquier circunstancia, a nun incorporar, nin aceptar la incorporación de menores de 18 años nes sos files, nin utilízalos nes hostilidaes, nin en funciones d'apoyu, como cocineros o mensaxeros. L'Estáu debe

considerar como víctimes a los menores reclutaos o utilizados polos grupos armaos ilegales».¹⁴⁴

183. «En xunu de 2009 los paramilitares queríen reclutar forzadamente a xóvenes de la escuela de la sienda Puente Blanco. Teníamos d'axuntar a los neños y ellos escoyeríen a cinco "pa enseñalos a ser berrakitos", y anque ante la denuncia vieno l'alcalde, la ONU y el comandante del Batallón Palacé, los pas de familia optamos por nun unviar más los nuestros fíos a la escuela y pidimos el retiru del Exércitu de la rexón pola so tolerancia colos paramilitares. A los pocos meses regresaron colo mesmo».¹⁴⁵

184. En xunetu del 2010 el Ministeriu de Defensa espidió la Directiva nº 11 pa prevenir toles formes de violencia contra muyeres y neñes, sin embargo resulta insuficiente. El día 14 d'ochobre, nel Conceyu del Tame, Arauca, tres neños, hermanos ente sí, JEFFERSON TORRES, de 6 años, JIMMY, de 9 años, y JENNY, de 14 años, foron torturaos, violaos y degollaos por soldados de la Octava división del Exércitu, que arroxaron los sos cuerpos a una fosa común. Anque'l suboficial al mandu reconoció los fechos, nin l'Exércitu nin la Fiscalía actuaron con dilixencia.

185. «El 13 d'abril de 2007 golpearon na puerta de la casa, dixeron que yeren de la guerrilla. Nun-yos abrí pero metiéronse pol techu y obligáronme a salir al patiu y ehí vi que parecíen militares. Taben encapuchaos, dixéronme que nun gritara, sentáronme a empuxones pa violame».¹⁴⁶

186. «Amás de la estigmatización "política" en determinaos contestos de los defensores d'ambos

¹⁴² OXFAM. La violencia sexual en Colombia. Primera Encuesta de Prevalencia. 9 d'avientu de 2010.

¹⁴³ CCPR/C/COL/CO/6. Comité de Derechos Humanos ONU. 99º peñónu de sesiones. Xeneva, 12 a 30 de xunetu de 2010.

¹⁴⁴ Informe de l'Alta Comisionada pa los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22, numberal 36, px. 8. Febreru de 2011.

¹⁴⁵ Testimoniu en Trujillo, Valle. ASFAVIT, 12 de marzu de 2011.

¹⁴⁶ Testimoniu n'Algeciras. Huila, 9 de marzu de 2011.

sexos, a quienes acusase de representar a movimientos guerrilleros, terroristas, extremistas políticos, separatistas y países o intereses extranjeros, el sexo o los derechos que propugnen en relación con el género o la sexualidad suelen agravar la estigmatización de los defensores de los derechos humanos».¹⁴⁷

187. «Como reiteraron ambos titulares del mandatu en varias ocasiones, los defensores de los derechos humanos corren riesgos a los que los compañeros varones nun tan tan espuestos».

188. «La relatora especial ta consternada polos extraordinarios riesgos que corren los defensores de los derechos humanos y quienes dedíquense a los derechos de la mujer o les cuestiones de género debido a la so llabor. La mayoría d'estos riesgos afecta directamente a la so integridad física y a la de los sos familiares».

189. Una mujer denuncia l'acoso, por parte d'integrantes del Comando nº 5 del Ejército, a la so neña de 15 años que, a su vez, ye fía d'un dirixente de la Xunta Accional y militar de la Unión Patriótica, asesínalu'l 23 de febreru de 2008.

7. Impunidad

*«Los asesinos falen a diariu pola boca del Estáu. Les víctimes tenemos agora la pallabra y gritaremos la nuesa verdá».*¹⁴⁸

¹⁴⁷ Informe A/HRC/16/44 de la Sra. Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 16º período de sesiones, 20 d'avientu de 2010.

¹⁴⁸ Intervención d'una víctima na Audiencia Pública pola Verdá. San Onofre, Sucre, 26 de febreru de 2006.

«Los políticos que s'aliaron colos paramilitares van conociéndose y van pasando a manos de la xusticia, pero falta otru capítulu, el de axustar cuentas colos altos mandos militares qu'incrementaron el paramilitarismo y cometieron crímenes d'Estáu, xenerales matones del Ejército y de la policía creando grupos paramilitares, llucrándose cola guerra, mercando tierras. Los medios de transporte y el poder llocal, tou foi capturáu mediante el refugu violento del territorio».¹⁴⁹

190. La extradición a los Estaos Xuníos d'algunos xefes paramilitares convirtióse nuna fonte d'impunidad. «Al Comité preocupa-y que la extradición por orden del poder executivu de xefes paramilitares a los EE.UU. pa responder a cargos de narcotráficu resultó nuna situación qu'obstaculiza la realización d'investigaciones acerca de la so responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, les extradiciones so estes condiciones impiden el derechu a la xusticia, verdá y reparación de les víctimes y contravenien la responsabilidad del Estáu parte d'investigar, enxuiar y castigar les violaciones de los derechos humanos».¹⁵⁰

191. «Nun hai xusticia y a la víctima nun se-y pue dicir qu'hai pocos xueces, qu'hai pocos abogaos y pocos medios... el presupuestu disminuye, la criminalidad crez... hai millones de casos pendientes».¹⁵¹

¹⁴⁹ Germán Reyes, Asesor del Ministeriu d'Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹⁵⁰ CCPR/C/COL/CO/6. Comité de Derechos Humanos ONU. 99º período de sesiones. Xeneva, 12 a 30 de xunetu de 2010.

¹⁵¹ Hernando CASTANEDA ARIZA, Xefe de la Unidá de Derechos Humanos de la Fiscalía. Bogotá, 11 de marzu de 2011.

192. Los paramilitares siguen existiendo y atacando a la oposición social y política del establecimiento. La so actividá queda impune, asina como la de los sos socios o auspiciadores. «¿Qué papel xugaron y siguen xugando los empresarios y les multinacionales nel paramilitarismu? Sabemos que hai denuncies sobre 22 empreses feches polos xefes paramilitares, pero solo conocemos el casu de la Chiquita Brands ¿y les demás?». ¹⁵²

193. «L'acción permanente de cinco años de les víctimes dende'l MOVICE tá faciendo que la xusticia entame a funcionar. El proyectu de llei de víctimes ye un reconocimientu tácitu a les reivindicaciones y existencia del MOVICE, pero nun ye suficiente pa garantizar los derechos a la verdá, la xusticia, la reparación y la non repetición. Esti proyectu de llei nun garantiza xusticia, nin la permanencia nos territorios, nin la restitución de les tierres usurpaes sobre munches de les que se tán otorgando títulos mineros. Nel Gobiernu solo hai un cambiu de discursu, nun hai cambeos na política que favoreza a les víctimes, por eso hai que fortalecer la unidá del MOVICE, que cuenta con 19 capítulos n'igual númeru de departamentos agrupando a 15.000 víctimes que tiene tres temes sensibles: la paz, los derechos humanos y los derechos como víctimes». ¹⁵³

194. La Llei 975 de 2005, conocida como «Llei de Xusticia y Paz» o llei de xusticia de transición, foi un fracasu en términos d'accesu a la xusticia pa les víctimes del paramilitarismu y ye una fonte abierta d'impunidá. «Les persones que tán na sala, que vieron morrer a los sos familiares, que foron víctimes nesi momentu, son víctimes una segunda vez al traviés

d'esti procesu nel que les instrumentalicen pa vender una idea de que'l país va meyor, que yá nun hai conflictu y que se ta xulgando a los criminales». ¹⁵⁴

195. «... el progresu nel marcu de la Llei 975 de 2005 sigue siendo modestu: menos del 54% de los procesaos, que constituyen aproximadamente el 4,5% de tolos desmovilizaos, contribuyeron al derechu a la verdá por mediu de versiones llibres. Anque les sos confesiones revelaron un númeru importante d'homicidios, nun permiten conocer plenamente la diversidá, el contestu y el carácter sistemáticu de los actos cometíos poles organizaciones paramilitares». ¹⁵⁵

196. Según el Gobiernu colombianu desmovilizaronse cerca de 32.000 paramilitares de les AUC en seis años, «un modelu d'imitar» según l'espresidente Uribe Vélez, pero éstos nun confesaron los sos crímenes y cada vez hai más pruebes de que'l Gobiernu aceptó falses desmovilizaciones —persones civiles presentaes ante los medios de comunicación como paramilitares qu'abandonaben les armes— como parte d'una estratexa para preservar les estructures ilegales, mostrar resultaos y ganar opinión pública.

197. «La existencia y el crecimentu d'esos grupos débense en gran parte a los procesos de desmovilización y xusticia de transición que redundaron n'impunidá pa los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos... Al mes de setiembre de 2010 solo dos persones foron condenaes polos delitos tipificaos». ¹⁵⁶

¹⁵² Gloria Inés Ramírez, Senadora de la República. Intervención ante'l V Alcuentru del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹⁵³ Franklin Castañeda. V Alcuentru Nacional del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹⁵⁴ Cineasta Juan José Lozano nel documental sobre Colombia «Impunity».

¹⁵⁵ Informe de l'Alta Comisionada de les Naciones Xunies pa los Derechos Humanos. A/HRC/16/22, 3 de febreru de 2011

¹⁵⁶ Gay McDougall, relatora de Minorías ante'l Conseyu de Derechos Humanos de la ONU. Xeneva, Suiza, 15 de marzu de 2011.

198. Tamién ye fonte d'impunidá estructural la reiterada asunción pola Xusticia Penal Militar del conoci-mientu de graves violaciones de los derechos humanos cometíos por miembros de la fuercia pública, como si delinquir fora un actu propiu del serviciu, desconociéndose xurisprudencia de la Corte Suprema de Xusticia, que dixo al respectu: «El fueru militar asina concebíu na Carta Política, cobixa entós a los miembros de la fuercia pública en serviciu activu, esclusivamente poles conductes ilícites rellacionaes col serviciu, nexu sobre'l que pronuncióse la Corte Suprema en múltiples oportuni-daes, aclarando que nun pue entendese como una conexión xenérica que se presenta ente'l serviciu activu militar o policial y el delitu que realiza quien lo presta, sinón que ye imprescindible determinar una «correspon-dencia» ente'l fechu constitutivu de la infracción penal y los deberes que llegalmente atañen-y a esos servi-dores públicos, dado que les normes constitucionales imponen los llímites dientro de los cuales puese actuar nun Estáu Social de Derecho...D'esti modu, recabó la Sala, la competencia castrense, d'estirpe constitucional, solo s'atribuye cuando'l fechu que motiva'l procesu foi realizáu por un miembru de les Fuercies Armaes o de la Policía Nacional nel exerciciu activu de les sos funcio-nes, siempre y cuando la conducta tenga rellación col serviciu militar o policial, ye dicir, que nun basta que se trate d'un militar o d'un policía en serviciu activu, sinón que ye necesariu que la conducta ilícita foi realizada en rellación col serviciu oficial a desempeñar».¹⁵⁷

199. «Les investigaciones d'asesinatos estraxudi-ciales continúen pero llentamente, y ye preocupante que casos de derechos humanos nun seyan transferíes al sistema xudicial civil como se debería».¹⁵⁸

¹⁵⁷ Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Xusticia, Radicado 26137 del 6 de mayu de 2009.

¹⁵⁸ *L'Espectador*, 15 de setiembre de 2010.

200. «Protexer a les fuercies de seguridá de la xus-ticia convertiría nuna burla les manifestaciones del Gobiernu cuando fala de lluchar contra l'impunidá y de respetar la so obligación internacional de llevar ante los Tribunales a quienes violaron los derechos huma-nos... «Lluchar contra l'impunidá en Colombia ye un trabayu peligrosu. Les repetíes amenances contra Ma-ría Stella Jara Gutiérrez (la xuez que condenó a Places) y les amenances contra varios maxistraos de la Corte Suprema, asina como les informaciones de que foron espiaos y grabaos, susciten gran preocupación».¹⁵⁹

201. «Los ricos que mandaron matar a BETY LAM-BRAÑO y al so fíu JOSÉ FRANCISCO VIVES, torturaos y degollaos en Caño Cholé, llámanse MOISÉS RODRÍ-GUEZ, GUSTAVO DEL A OSSA y los sos hermanos JAIME y ÁLVARO, JOSÉ LUIS ATENCIO y SANTOS ACOSTA, toos viven na Villa de San Benito Abad. Les autoridaes del pueblu sábenlo y la policía avisa-yos de les nuestres denuncies, por eso los hacendaos llévense a los poli-cías a les sos finques y agasáyenlos con comíes y con tragos y nun los capturen, enantes protéxelos».¹⁶⁰

202. «El 8 de marzu del 2006 l'ESMAD de la Policía asesinó d'un disparu al estudiante ÓSCAR SALAS, quien participaba de les radios comunitaries. Anque un poli-cía confesó l'usu d'armes non convencionales pola poli-cía durante los tropeles d'esi día, el crime sigue sin castigu y la familia d'Óscar foi amenazada de muerte, lo mesmo que'l policía arrepentió. Seguimos creando radios comunitaries por ser d'interés públicu».¹⁶¹

203. El gobiernu de Juan Manuel Santos impul-só una Llei aprobada nel Congresu n'avientu del 2010

¹⁵⁹ Marcelo Pollack, investigador d'AI pa Colombia. *El Tiempo*, 11 de xunu de 2010.

¹⁶⁰ Testimoniu de desplaazos de Caño Cholé. Ovejas, Sucre, 5 de marzu de 2011.

¹⁶¹ Testimoniu n'Ibagué, 7 de marzu de 2011.

qu'agrava los niveles d'impunidá, al posibilital que, n'ares de la verdá, se sacrifique'l derechu de les víctimes a la xusticia, pues dexa ensin efectos xurídicos les confesiones de los paramilitares.

204. A pesar de que Colombia ye, formalmente, una democracia, varios movimientos políticos foron esterminaos con violencia, como'l Frente Popular, A Lluchar y La Unión Patriótica. «L'Estáu colombianu esterminó a la Unión Patriótica. Y lo que ye peor, nun foi capaz de superar la impunidá xudicial y disciplinaria d'esos crímenes. Ye triste, pero tenemos un rexistru de más de 10.000 víctimes, que ye apenes un subrejistru porque hai rexones a les que nun pudimos regresar, como la Costa Atlántica, onde'l paramilitarismu persiste, y la Fiscalía nun determinó nin siquiera una autoridá material... ...un estudiu de la Defensoría del Pueblu, por mandatu de la Corte Constitucional nuna acción de tutela, revela qu'en 717 casos d'homicidiu, solo hebo 10 casos con decisión de fondu: seis absoluciones y cuatro condenes. Esta impunidá nun nos dexó otra salida qu'acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y radicamos el casu por xenocidiu... nunca'l Gobiernu negó que existió l'homicidiu continuáu contra la UP. Nós entregamos un llistáu de 1.163 homicidios, 103 casos de desapaición forzada, 43 sobrevivientes con atentaos personales y 225 persones amenazaes. D'esi llistáu, depués mataron dalgunos. Yo soi una sobreviviente. En 1991 diba ser asesinada en Barrancabermeja, pero los sicarios equivocáronse y mataron a la mio amiga, Blanca Durán...».¹⁶² De los 14 congresistes de la Unión Patriótica que salieron electi-

¹⁶² Jahel Quiroga, Presidenta de REINICIAR, abogada de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *L'Espectador*, 19 marzu de 2011. «25 años de la elección de los primeros congresistes de la UP, L'Estado foi incapaz de superar la impunidá xudicial'.

dos el 9 de marzu de 1984 foron asesinaos BERNARDO JARAMILLO, HENRY MILLÁN, LEONARDO POSADA, ELSA ROJAS, OCTAVIO VARGAS, JAIME MONTOYA, PEDRO, LUIS VALENCIA y PEDRO NEL JIMÉNEZ». Nes elecciones posteriores hebo más parlamentarios y candidatos de la UP asesinaos. JAIME PARDO LEAL, MANUEL CEPEDA VARGAS, ALEJANDRO CÁRDENAS VILLA, GABRIEL JAIME SANTAMARÍA, ELKIN MARTÍNEZ y l'abogáu de les víctimes EDUARDO UMAÑANA MENDOZA, tamién asesinaos. Dos candidatos presidenciales, 8 senadores, 13 diputados, 70 conceyales, 11 alcaldes y miles de los sos militantes asesinaos, dalgunos en masacres cometíes por grupos paramilitares y narcotraficantes, con participación directa o complicitá d'axentes de seguridá del Estáu. En dalgunos casos conócese l'autoría material, pero los autores intelectuales permanecen na impunidá.

205. La búsqueda de xusticia convirtióse n'otra fonte de riesgos pa les víctimes. «De la xente que faló na Audiencia Pública pola verdá en San Onofre, yá amenazáu de muerte a varios; un testimoniante d'esa audiencia foi asesináu, otru tuvo qu'esiliase, otru sufrió un atentáu y quedó inválidu, a Carmelo Agámez apresáronlu, y a DAVID DÍAZ, el fíu d'EDUALDO DÍAZ, alcalde asesináu d'El Roble, acusáronlu de ser paramilitar, cuando él vieno denunciando a los paras como asesinos del so pá».¹⁶³

206. «ÓSCAR EDUARDO MARTÍNEZ PALMA, de 32 años, conceyal del PDA en Chaparral, quien venía denunciando la corrupción y violaciones de los derechos humanos polos militares, foi asesináu el 14 de ochobre de 2006 y nun hai deteníos, anque sospéchase que foron paramilitares y militares n'activu».¹⁶⁴

¹⁶³ Testimoniu col MOVICE, Sucre.

¹⁶⁴ Testimoniu n'Íbague, 7 de marzu de 2011.

207. «HENRY SAUL MOYA MOYA, activista sindical ASTRACATOL-CUT (Rovira- Tolima), foi asesináu por encapuchaos cuando trabayaba na so finca, tando l'Exércitu acantonáu na so zona».¹⁶⁵

208. «MANUEL FELINTO CUÉLLAR MAJE, Fiscal d'ASTRACATOL, foi asesináu por dos individuos vistíos de negro y encapuchaos, en presencia de llabradores de la zona. Los asesinos dixerón qu'ési yera un mensax a los líderes comunitarios yá que se teníen una llista con otros nomes. La comunidá responsabiliza a les fuerces militares d'esti fechu ocurriu na sienda Guadual del conceyu de Rovira, Tolima, el día 18 d'avientu de 2008».¹⁶⁶

209. «LUIS GONZAGA CARDOZO foi asesináu na sienda La Islandia, conceyu de Rovira, Tolima, el 7 de agostu de 2008 por miembros del Exércitu Nacional de Colombia qu'ingresaron al so quartu llocalizáu na finca Los Pinos «PINOS», siendo obligáu a salir por parte d'ún de los uniformaos, que tapaben la so cara con un pasamontañes, y lo abalearon pola espalda».¹⁶⁷

210. «Por execuciones estraxudiciales hai 500 persones deteníes, pero hai dos mil casos qu'involucren a un promediu de 5 persones, lo qu'arroxa 10.000 persones por llevar a xuiciu. Pa eso necesítense 100 fiscales más, solo tenemos 30. La Xusticia Penal Militar conoz d'esos casos, pero tarda muncho en pasalos a la Xurisdicción Ordinaria, xenérase un conflictu de competencies que fai más lenta la xusticia. La fuercia pública collabora poco cola xusticia, anque foi meyorando».¹⁶⁸

211. La impunidá cubre la mayoría de los 342 crímenes de la dañada humanidá cometíos polos pa-

¹⁶⁵ Ibídem.

¹⁶⁶ Ibídem.

¹⁶⁷ Ibídem.

¹⁶⁸ Hernando CASTANEDA ARIZA, Xefe de la Unidá de Derechos Humanos de la Fiscalía Xeneral. Bogotá, 11 de marzu de 2011.

ramilitares, l'Exércitu y la Policía Nacional en Trujillo dende 1986, a pesar de que foi condenáu'l mayor ALIRIO URUEÑA JARAMILLO pola so responsabilidá na masacre de Trujillo, y de que'l 31 de xineru de 1995, l'entós presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, reconoció la responsabilidá del Estáu por acción y omisión no qu'entós se denominaron los sucesos violentos de Trujillo. Les masacres entamaron en 1986 en Trujillo, Riofrío y Bolívar, al nororiente del Valle del Cauca, por acuerdu ente la policía, l'Exércitu y los narcotraficantes DIEGO MONTOYA, alíes «Don Diego», y HENRY LOAIZA, alíes «El Alacrán». Del total de víctimes d'homicidios, tortures y desapaición forzada, 235 tienen identificación precisa nos osarios/escultures del Parque Monumentu a la Memoria en Trujillo, según ASFAVIT. Les víctimes yeren xornaleros, tenderos, llabradores, tresportadores, dirixentes políticos, sindicalistes y líderes religiosos, ente ellos el padre TIBERIO FERNÁNDEZ, asesináu y descuartizáu. Él estimulaba la conformación de cooperatives y la construcción de texíu social comunitariu. Les persones desapaecíes yeren torturaes, troceades con motosierra y les sos partes arroxaes al ríu Cauca.¹⁶⁹

212. «De la finca “La Sonora”, en Trujillo, lleváronse al mio fíu de 14 años, torturáronlu y asesináronlu; dos fíos más tán desapaecíos y el mio home, que tamién foi torturáu, morrió de pena moral. A la mio fía hiriéronla fai un añu nun atentáu que nun ta claru en Tulúa. Nun hubo reparación, quedé sola».¹⁷⁰

213. «A la mio familia masacráronla nos 90. Torturaron y asesinaron al mio pá y al mio tíu na mio presencia, yera un neñu cuando eso. Nel veloriu un policía quería llevame a la fuercia por que “sabía mun-

¹⁶⁹ Reunión con ASFAVIT. Trujillo, 12 de marzu de 2011.

¹⁷⁰ Ibídem.

ches cosas”, pero nun pudo. El 23 de marzu de 1990 entraron con violencia na casa, tendiéronos a toos, mozos y grandes nel suelu, boca abaxo, mataron a cuatro de los mio familiares. Hai solo tres meses foi amenazáu de muerte por pertenecer a ASFAVIT». ¹⁷¹

214. «Al mio hermanu CARLOS CASTRILLÓN PATIÑO asesináronlu'l 26 de xunu de 1991. Yera conductor de tresporte públicu. Unos encapuchaos lleváronselu y pegáron-y 14 tiros. La so muyer desplazóse a Pereira y desapareció, y l'otru hermanu, SERGIO CASTRILLÓN, foi asesináu en 1993 Cali “por una bala perdida”». ¹⁷²

215. «Poles masacres de Trujillo hai 20 militares vinculaos pero nun se conoz la verdá completa. Hai munches pruebes y pocos xuicios, el procesu lleva 20 años, ta llenu de irregularidades y nun avanza, polo que la Corte Suprema de Xusticia ordenó reabrir y entamar de nuevo lo actuaos. Nun hai garantías de non repetición y ési ye'l mieu». ¹⁷³

8. Desplazamientu forzáu

«Nun volvíeron les masacres en Los Montes de María, pero hai xente armada que presiona a los llabradores pa que-yos vendan les parcelas. Son los mesmos d'enantés. La xente malvende la tierra porque el terror yá foi semáu». ¹⁷⁴

216. Continúa el desplazamientu forzáu de persones, tanto individualmente como en grupos, sobre tou

de llabradores, población afrocolombiana y comunidaes negres. Y continúa'l refogayu violentu de les sos tierres y territorios.

217. Colombia continúa siendo ún de los países del mundu con más desplazamientu internu como resultáu de la confrontación armada, pero sobre tou como una dinámica d'alta movilidad de la población lligada a proyectos d'inversión nacional y del capital internacional.

218. «Les cifres más recientes con que cuenta ACNUR muestren a Colombia como'l segundu país con más población desplazada nel mundu, con 3,5 millones de persones rexistraes pol Gobiernu como desplazaes, mientres en Sudán la cifra estímase alrededor de los cuatro millones». ¹⁷⁵

219. «La empresa tresnacional británica BP ye acusada de xenerar fuertes impactos ambientales, laborales, sociales y especialmente so los derechos humanos nel departamentu del Casanare, en Colombia. Nes árees d'esplotación se documentaron 2.653 casos de desapaición forzada y 9.000 casos d'asesinatos. La actividá petrolera causó'l desplazamientu forzáu y contribuyó a xeneralizar la cultura del mieu». ¹⁷⁶

220. «En Colombia colapsó'l derechu de propiedá. La restitución de tierres nun ye posible si l'Estáu nun recupera'l control del territoriu. Mientres les guerrilles repliéguense, el gran latifundiu incrementa la so estensión, y los llabradores vense espulsaos a los frentes de colonización, por eso hai que zarrar la frontera agrícola. Hai que llevar los títulos de propiedá a la

¹⁷¹ Ibídem.

¹⁷² Ibídem.

¹⁷³ Ibídem.

¹⁷⁴ Testimoniu d'un desplazáu pola violencia. Ovejas, Sucre, 5 de marzu de 2011.

¹⁷⁵ AFP citando fontes de la oficina del ACNUR. 10 de payares de 2010.

¹⁷⁶ Tribunal Permanente de los Pueblos. Madrid, 14 y 15 de mayu de 2010.

xusticia pa que'l conflictu salga del campu y pase a los Tribunales».¹⁷⁷

221. La Comisión de Seguimientu a la política pública so'l desplazamientu atribuye a los grupos paramilitares la responsabilidá del 45% del total del desplazamientu forzáu.

222. N'avientu del 2010 sumen 8 millones d'hectárees de tierra les abandonaes/despoxaes con violencia nos últimos 15 años, según datos d'Acción Social de la Presidencia de la República¹⁷⁸. La usurpación violenta de tierras agrávase col otorgamientu pol gobiernu de Títulos Mineros, pero'l desplazamientu crez tamién nes árees onde hai proyectos viales y enerxéticos.

223. Les empreses que promueven los agrocombustibles son responsables del desplazamientu forzáu de miles de persones. «Les firmas Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma tán nel centru d'una investigación polos delitos de desplazamientu forzáu, concierto pa delinquir ya invasión de árees d'especial importancia ecolóxica que podríen representa-yos penes de más de 20 años de cárcel a dellos de los sos executivos».¹⁷⁹

224. «Son casi cinco millones d'hectárees de tierra arramplada o en riesgu de desplazamientu, sabemos ónde ocurrió, usaremos la información pa da-y pesu xudicial. Hai que combinar la estratexia alministrativa y la xudicial».¹⁸⁰

¹⁷⁷ Germán Reyes, Asesor del Ministeriu d'Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹⁷⁸ Llibru «Tenencia y abandonu de tierras en Colombia», Capítulos 7 y 8. Acción Social de Presidencia de la República. Bogotá, avientu de 2010.

¹⁷⁹ *El Tiempu*, 19 de mayu de 2010.

¹⁸⁰ Germán Reyes, asesor del Ministeriu d'Agricultura. Intervención ante la V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

225. Hai temor ente les comunidaes llabriegues y de mineros artesanales pola presencia de la empresa AngloGold Ashanti y la so filial Kedahda, autorizada pol Gobiernu a explorar y esplotar oru en varies rexones del país. La empresa yá entamó a dividir a les comunidaes, coincidiendo cola llegada de grupos paramilitares y d'Exércitu, el que masacró a cinco miembros d'una mesma familia —incluyíu un bebé de 6 meses— na senda Potosí del correximientu d'Anaime n'abril del 2004. Otru antecedente preocupante ye qu'*Human Rights Watch* señaló a la AngloGold Ashanti por financiar grupos armaos na República Democrática del Congo.¹⁸¹

226. Les organizaciones sociales y les comunidaes del correximientu d'Anaime opónense a la minería del oru y denuncien que'l 86% del so conceyu foi entregáu pol Gobiernu nacional a la AngloGold Ashanti, sin consulta-yos y ensin prever l'impactu ambiental y humanu de la minería en gran escala.

227. «Hai violaciones de los derechos humanos orixinaes n'intereses económicos pola minería del oru, cobre, feldespatu, esmeraldes, y hai una visión del desarrollu que s'impón mediante la guerra a les xentes que tenemos una visión diferente, como pasa nel páramu de Santurbán, en Marmato y en La Colosa por Cajamarca. Soi profesor de la Universidá del Tolima pero retiréme de la docencia pa defender al mio pueblu de la mayor barbaridá inventada poles tresnacionales. Nun renunciamos nin al sentíu común, nin a la soberanía, nin al rigor científicu. Nun esiste la minería ambientalmente sostenible y socialmente responsable. L'AngloGold Ashanti intimidame al traviés de dos ex funcionarios. La SIJIN quiso individualizame y reseñame, diz que pa comprobar les mio huelles,

¹⁸¹ Testimonios n'Ibagué.

pero tampocu xuega llimpiu la Fiscalía. Toos trabayen pa l'AngloGold. Quieren que me desplace pero del mio pueblu nun me van sacar corriendo. Vívese una vez y renazse munches veces, si ye necesario muerro pol mio pueblu».¹⁸²

228. «Bienveníos a Colombia, el paraísu que va destruíse pol patrón oru que gobierna al mundu. Fagan dalgo por nós que somos persones humildes y perseguíes, somos seres humanos, nun somos basura, defendemos el nuestru territoriu sin face-y dañu a daquién».¹⁸³

229. «Tase consolidando un refugu de tierra, tase consolidando una inversión estranxera, especialmente en minería y palmicultura, que ta rellacionada col desplazamientu forzáu... Un 32% de les 280.000 persones desplazaes que se rexistraron en Colombia nel 2010 ocurrieron en zones onde eses dos actividaes económicques incrementáronse notoriamente».¹⁸⁴

230. «El 17 d'abril del 2010 quince homes armaos que dixeron ser policíes retiraos y 60 macheteros metiéronse a la finca "El Desengaño", en Pital de Megua, y tumbaron y quemaron tres cases de llabradores con toles nuestres coses. Dixéronme que nun volviera, qu'éhi yá nun tenía nada que buscar, qu'eses tierres las vendió hai pocu MANUEL POVEDA OSPINO, empresariu de Barranquilla, a un alemán que yera'l dueñu, pero eso ye falso pues esi señor morrió hai 21 años. Llueu amenazáronnos a toos y hasta la xueza de Juan d'Acosta foi amenazada y entamaron a tumbiar les cerques. Diéronnos dos díes de plazu pa dinos, o nos diba a pesar. A otros vecinos un tipu alíes "Niño grande"

fixo-yos lo mesmo, dixéron-yos que se tuvieren quietos y nun buscaran una mala hora. Tuvimos que dexar tou botáu y desplazanos. Somos 90 families, más de 300 persones contando los de la finca de Matavidi y Guaymaral. Parez que quieren esplotar minerales na finca y por eso hai dineru de por mediu y funcionarios corruptos del INCODER manipulando y la policía de Tubará collabora col empresariu amenazando llabradores. L'alcalde de Baranoa diz qu'esí problema nun-y toca a él y la Fiscalía tampoco actúa anque conoz los fechos. Lo mesmo pasa cola Presidencia de la República. Denunciamos pa evitar un derramamientu de sangre, pero nadie nel Gobiernu ponnos cuidáu».¹⁸⁵

231. «El conceyu de Soledad, Atlántico, ye un nial paramilitar de Los Mellos, Los Rastrojos y Los Paisas, qu'operen nel barriu La Central y vienen ocasionando'l desplazamientu interurbanu de munches persones so amenaces de muerte pol control del micro tráficu de drogues, a estos desplazaos súmense los miles de pobladores rurales del sur del Atlántico damnificaos pola ola ivernal, pa quienes el Gobiernu departamental nun tien soluciones de reubicación concreta. Los paras lleguen a les cases de la xente y obliguen-yos so graves amenaces de muerte a vende-yos la so propiedá a mui baxo preciu, llueu lleguen persones con contactos nes notaríes colos documentos llistos pa rubricar y llegar el refugu».¹⁸⁶

232. Les families llabradores ocupantes dende hai 50 años de la finca «La Europa», nel conceyu d'Ovejas, Sucre, denuncien la presencia d'homes armaos nes sos tierres, quienes amenacen de muerte a les families que retornaron al prediu tres varios años de destie-

¹⁸² Testimoniu de LUIS CARLOS HERNÁNDEZ. Anaimé, 7 de marzu de 2011.

¹⁸³ Testimoniu n'Anaimé, 7 de marzu de 2011.

¹⁸⁴ Jorge Rojas, Director de la Consultoría pa los Derechos Humanos y el Desplazamientu, CODHES.

¹⁸⁵ Testimoniu de un campesinu de la finca «El Desengaño», correximientu de Pital de Megua, conceyu de Baranoa, Atlántico.

¹⁸⁶ Testimoniu en Barranquilla, 4 de marzu de 2011.

rru. Temen un segundu desplazamientu forzáu. «Equí nesti ranchu vivía yo col mio pá que yá yera bien vieyu cuando se nos vieno la guerra. Eso a diariu yera plomu por toos llaos, entós alzaba al vieyu de la cama y escondíalu ente les palmes y decía-y al oídu “vieyu nun mueva nin la pepa de los güeyos que nos maten”. Un día nun camín l’Exércitu señalóme diciendo que yo andaba cola guerrilla y baxáronme del burru pa pegame. Tuve que deci-yos que si me pegaben me diben tener que matar ehí mesmu porque me diba a defender a machete. Nun soi un delincuente y nun-yos permito qu’actúen por fuera de la llei, díxe-yos. De toos moos tocóme abandonalo too y llevame al vieyu a vivir al pueblu d’Ovejas, onde morrióse. Agora que volvemos a la finca otra vez hai problemes, nun hai autoridá que nos atienda y solucione lo de nuestro regresu en paz».¹⁸⁷

233. «Yo nací, criéme y caséme equí na finca “La Europa”. Tenía fíos pequeños cuando llegaron grupos armaos y a los mis fíos díe-yos por xugar al pistoleru, eso yeren carreres y un pum pum con palitos poles esquines de la casa. Llueu llegó la Infantería de Marina de Corozal y quemó 24 cases de llabradores, incluyida la mía, destruyeron y quemaron tou diz que por ser auxiliadores de la guerrilla, asina que tocónos dinos. Estuve 20 años desplazada y agora que quiero volver otra vez hai xente armada equí diz que trabayadores de la empresa Arepas Don Juancho. Temo que se repita lo d’hai años cuando mataron a tres persones al llau de la mio casa. Llueu mataron a MANUEL REYES, al fiu d’Elisa Palencia, a LUIS MANUEL PÉREZ MERCADO, y a LINO el so primu, a JORGE LUIS ACOSTA, a JUAN CHAMORRO y a CARLOS ARRIETA. Cuando foi a denunciar que nos desplazaren y matao a muchos nun me

¹⁸⁷ Testimoniu na finca «La Europa». Ovejas, Sucre, 5 de marzu de 2011.

quixeron recibir la denuncia diciendo qu’equí en “La Europa” nun pasó nada. Agora ye peor, y nun se pue denunciar por mieu. Ún nun sabe con quién ta falando na Personería d’Ovejas, pues tolo qu’ún denuncia allá acaba sabiéndose na cai y a los que denunciaron matáronlos. Ye qu’equí manda dafechu la llei del silenciu».¹⁸⁸

234. La sedimentación de ríos como'l San Jorge va xenerando nuevos suelos que tienen el carácter de tierras baleres propiedá de la nación y que son ocupaes por población llabriegas ensin tierra, pero los latifundistes recurren a la violencia pa desaloxalos y agrandar les sos faciendes. «A 23 families llabradores sacáronnos a plomu de cañu Cholé na Villa de San Benito Abad. N’abril del 2009 los señores MOISÉS RODRÍGUEZ y GUSTAVO DE LA OSA punxeron unes banderes coloraes nes nuestres cases, picaron l’alambre de les cerques, amenazáronnos de muerte y quemáronnos les cases. Depués unos tipos que dixeron ser Águilas Negras mataron a dos persones y sacáronnos d’ellí, pero la oficina d’Acción de Presidencia de la República en Bogotá nun nos aceptó la denuncia de desplazamientu forzáu diciendo que yeren mentires porque en Colombia los paramilitares yá nun existen».¹⁸⁹

235. «A la sienda San Francisco, conceyu d’Ovejas, llegaron los paramilitares atropellando y amenazando, como n’El Saláu, y diciendo “o marchen de la tierra o van morrer”, y fixéronnos dir. Yá desapaecieron varies siendes y caseríos de pueblos como Ovejas y Carmen de Bolívar, porque la xente tuvo que se desplazar y agora les tierras son propiedá de la empresa AGROFO-

¹⁸⁸ Testimoniu na finca «La Europa». Ovejas, Sucre, 5 de marzu de 2011.

¹⁸⁹ Ibídem. Véase <http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/desplazan-familias-de-chole-casco-urbano-de-san-benito>.

RESTADORA DEL CARIBE, que sema teca, pinu, eucalipto, palma y acacia. D'ehí yá nun sal comida pa la xente, nin pa los animalinos».¹⁹⁰

236. «El sur del Tolima foi declaráu como una zona con altu riesgu de desplazamientu, en realidá lo que quieren como n'otros sitios del país ye quita-y les tierres a los llabradores y desenvolver proyectos como los que tien ISAGEN».¹⁹¹

237. «N'Algeciras vívese una situación difícil dende la confrontación bipartidista de 1948 y por eso ye un conceyu qu'espulsó al 25% de la so población, que son 23.942 habitantes; tamién hai desplazaos pel ivernu, avalanches, cayida de 10 puentes. Hai munchu desplazáu que nos llega del Caquetá, hai presencia de les FARC y ye un conceyu militarizáu con más de 3.000 soldaos. Na sienda El Silencio hai confrontaciones armaes cola población en mediu. El propiu presidente Uribe refirióse a un maxistráu d'esti pueblu como "el guerrilleru d'Algeciras"».¹⁹²

238. «Nel 97, nel correximientu Gaitania del conceyu de Planadas, el mio home engarróse con un home, foi acusaú pola guerrilla que nos amenazó y tocónos desplazan».¹⁹³

239. «Na finca "Las Pavas", correximientu de Buenos Aires, conceyu d'El Peñón, veníamos trabayando 122 families y fomos desplazaes el 14 de xunu de 2009, llueu de que nos quemaren les cases y envenenaren nuestros alimentos. Caltenímonos organizaes

n'ASOCAB, pero l'exércitu y los paramilitares persíguennos, un profesor y ún de los nuestros dirixentes tienen orde de captura. Nun tenemos ayuda, hai nueves amenaces y la situación de la comunidá ye caótica. El gobiernu dexa-y la finca al grupu DAABON pa que seme agrocombustibles como la palma africana na isla de Papayal».¹⁹⁴

240. «Nel 2003 foron desplazaes toles comunidaes d'El Bajo Calima y nel 2005 tornemos pero ensin garantías. Nesa rexón constrúyese el puertu d'Aguadulce y el Batallón 80 de la Infantería de Marina trabaya pa ellos, pues el 5 de payares de 2010 valtónos 11 ranchos, el 19 de xineru valtónos 24 ranchos y quemáronlos y el pasáu 7 de febreru quemáronnos 25 viviendes más, anque-y echen la culpa a la comunidá, pero vímoslos faer. P'amedrantanos más cada poca faen disparos y agora llegáronnos les amenaces».¹⁹⁵

241. «Dende'l 21 de febreru rexístrense combates ente l'exércitu y les FARC nos resguardos indixenes Awá de Magüi y Cuchilla del Palmar, conceyu de Ricaurte. La so amenaza del fueu cruzáu y el riesgu xeneráu pola esistencia de MAP y MUSE, 207 families (1.035 persones aprosimadamente) decidieron concentrase nos centros ya instituciones educatives de los dos resguardos declarándose en "Mingas Permanentes de Confianza o Asamblea permanente", como estratexa d'auto protección. Ente la población afectada alcuéntrense families que foron víctimes d'un desplazamientu masivu en 2008».¹⁹⁶

¹⁹⁰ Ibídem.

¹⁹¹ Testimoniu en La Marina, Chaparral, 8 de marzu de 2011.

¹⁹² Entrevista con RIGOBERTO SÁNCHEZ TAMAYO, Alcalde d'Algeciras. Neiva, 9 de marzu de 2011.

¹⁹³ Testimoniu n'Algeciras. Huila, 9 de marzu de 2011.

¹⁹⁴ Testimoniu na V Asamblea del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

¹⁹⁵ Ibídem.

¹⁹⁶ Comunicáu de la UNIPA. Pasto, 26 de marzu de 2011.

■ Violaciones del Derechu Internacional Humanitariu, mines antipersones

242. Los riesgos de la confrontación armada pa la población civil son enormes. «Esiximos dafechu, el respetu pa los nuestros territorios indixenes y que pare l'accionar violentu de les fuerces en combate nun conflictu que nun ye nuestro y que nos tien al borde de la desesperación. Sabemos que'l cometíu de les fuerces del Estáu ye combatir la guerrilla, pero que lo fagan lloñe de les nuestres tierres onde nun pongan en peligru les vides de la nuestra xente, sobre too cuando hai abondos de territorios baleros onde puen combatir lloñe de los nuestros Resguardos».¹⁹⁷

243. Anque les guerrilles son responsables d'ataques contra la población civil, les víctimes tienen temor de denunciar los fechos dau'l control qu'exercen en dalgunes zones del país.

244. «La oficina en Colombia rexistró ataques sistemáticos contra la población y bienes civiles: como masacres, asesinatos selectivos, reclutamientu y utilización de menores y amenaces atribuyíes a les FARC-EP y al ELN. En varios casos, estos grupos, especialmente les FARC-EP, dirixeron acciones directamente contra la población civil emplegando armes prohibíes y mines antipersones y atacando instalaciones y bienes civiles. La mayoría de les infracciones rexistráronse en zones remotas de departamentos como Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo».¹⁹⁸

¹⁹⁷ Comunicáu Comité Executivu ORIVAC.

¹⁹⁸ Informe de l'Alta Comisionada pa los Derechos Humanos en Colombia. A/HC16/22, numberal 36, px. 8. Febreru de 2011.

245. «A la guerrilla dicen-y que ye terrorista, pero al Exércitu se-y pue dicir lo mesmo polo que fai con nós».¹⁹⁹

246. Dientro de l'alta oficialidá del exércitu vese como llegal, normal, que los militares acampen n'edificios públicos de les comunidaes y pueblos, conducta proscrita pol DIH.²⁰⁰

247. Les tropes del exércitu nacional acampaben nel salón comunal del cascu urbanu del correximientu de La Marina, conceyu de Chaparral. El Frente 21 de les FARC atacólos. «El xueves 3 de marzu de 2011 a media nueche una esplosión tremenda sacudió al pueblu. Pensé nel mio negociu y na mio familia. Lluu hebo más esplosiones nel salón comunal, ocupáu facía trés meses pol exércitu y hubo ráfagues de fusil. Quedaron trés soldaos muertos y dos mancaos xunto con varios civiles. Causaron daños a varies cases y al salón comunal nel que 40 neños y neñes recibíen clases. Gárrennos de carne de cañón».²⁰¹

248. «Les tropes de la VI Brigada nel departamentu del Tolima comenten a diariu violaciones del DIH como: ametrallamientos y bombardeos cerca de centros poblaos afectando a bienes de la población y a bienes civiles; desembarcu y ocupación por tropes de centros educativos; controles ilegales so la población civil; restricciones a la circulación de víveres, gasolina, funxiciés y abonos usaos polos llabradores; bloqueos alimentarios que xeneren desabastecimientu a les comunidaes; señalamientos a los dirixentes de l'Asociación de Trabajadores Agrícolas del Tolima

¹⁹⁹ Testimoniu en La Marina, Chaparral, 8 de marzu de 2011.

²⁰⁰ Reunión col Brigadier Xeneral Emilio Torres Ariza, Xefe de Derechos Humanos y DIH del exércitu nacional. Bogotá, 11 de marzu de 2011.

²⁰¹ Testimoniu nel correximientu La Marina, conceyu de Chaparral. Tolima, 8 de marzu de 2011.

—ASTRACATOL— por parte de encapuchaos nos retenes militares».²⁰²

249. «L'Exércitu ocupa bienes protexíos como les escuelas y puestos de salú, destruye acueductos, amenaza xunto colos grupos paramilitares nes siendes Vegas del café, Café Las Pavas, Piñal, Palmira. Les comunidaes llabriegues de Rio Blanco, correximientu de Maracaibo, siendes Guadualejas, Los Pinos, Rio Negro, Peñas Blancas, Campo Alegre, La Reina, denuncien atropellos como'l robu de mercaos, la ocupación de la escuela Peñas Blancas onde estudien 48 neños, que ven a diario apresamientos ilegales, amenazas, robos de ganáu y actitudes hostiles que-yos fai temer por un prósimu desplazamientu masivu. Yá entamó'l desplazamientu de los líderes de les comunidaes con base nuna llista que tien l'exércitu qu'amás controla les reuniones comunitaries y fai censos ilegales. Los militares escuenden los sos nomes y rangos ante la población que debieran protexer».²⁰³

250. «En Rioblanco, Tolima, hai 8 muertos por execución estraxudicial dende'l 2006, amás l'exércitu xunto con encapuchaos monta combates en centros poblaos, róbanos los ganaos, diz que son de la guerrilla, detuvieron ensin orde xudicial al llabrador FABIÁN VALERO en xineru de 2011 y dicen-y que dexen les armes y se desmovilice; a EDISON MARTÍNEZ torturáronlu'l 17 d'avientu de 2010 nel batallón Pijao'l teniente Rojas; desembarquen tropes y bombardeen cerca de les viviendes, construyen helipuertos nos cultivos de los llabradors; amenacen a los neños de les siendes diciéndo-yos que "estos son los futuros guerrilleros, paga ye matalos", l'hospital más cercanu ta a diez

²⁰² Informe d'ASTRACATOL ante la VII Delegación Asturiana. Ibaqué, 7 de marzu de 2011.

²⁰³ Informe de les organizaciones sociales del Tolima a la VII Delegación Asturiana. Ibaqué, 7 de marzu de 2011.

hores y la tropa nes escuelas. Pel ríu Cambrín tamos abandonaos pol estáu que namás manda soldaos. En Rioblanco diz que somos "Zona colorada" pero'l terror llega col exércitu».²⁰⁴

251. «En Planadas el 14 de xunetu de 2010 a les 5 de la tarde llegó l'exércitu de la Brigada Móvil nº 8 y echó rabaseres contra la población civil y les cases. Un tiru de fusil mancó nel abdome a un neñu de 3 años d'edá que ta bien mal nel hospital; el 11 de xunetu de 2010 bombardearon el monte destruyendo delles hectárees d'árboles; el 1º de xineru de 2011 detuvieron ensin orde xudicial a 4 llabradors y dos menores d'edá que taben recoyendo lleña, la xunta comunal intervieno, pero los militares despintaron les sos identidaes y rexistráronnos a toos, depués fexéronnos semeyes «pa la base de datos»; acútennos les compres d'alimentos y quítennos los caminos, quieren ponenos a pasar fame; oblíguennos a malvender les tierres onde quieren poner bases militares».²⁰⁵

252. «En San José de Las Hermosas l'Exércitu acampa nes cases y nes escuelas, como en la sienda El Naranjal; la guerrilla fostigó al exércitu, que se refuxó ente los alumnos de la escuela a los que garró como escudu».²⁰⁶

253. Na sienda Betania, casería d'El Limón de Chaparral, l'Exércitu del Batallón Baraya, al mandu del cabu ORTIZ, ta involucrando a menores d'edá nel conflictu. «L'exércitu metióse en medio con tiros y ensin permisu nes nueses cases 1º de marzu de 2011, y a los neños l'exércitu daba-yos dulces y andaba sonsacádo-yos información de la guerrilla, que n'ónde entren y que quién son».²⁰⁷

²⁰⁴ Testimoniu en La Marina, Chaparral, 8 de marzu de 2011.

²⁰⁵ Ibídem.

²⁰⁶ Ibídem.

²⁰⁷ Ibídem.

254. «El 3 d'avientu de 2009 al alborecer un avión bombardeó y ametralló la finca “La Esperanza”, sienda Alto Ambeima, per La Marina. Depués aterrizaron dos helicópteros militares a la vera la casa y allanáronmela, mataron dellos d'animales, 3 vaques, 1 güe y 1 caballo, estropiaron l'acueductu, tengo mieu pola familia».²⁰⁸

255. «Tamos afectaos pol exércitu y pola guerrilla, pero a esta xente danos mieu denuncia la porque nun tienen nin obedecen lleis. Equí pasen coses graves, l'exércitu escuartizó delante de so familia a un llabrador y nada nun pasó».²⁰⁹

256. «Nos sitios onde hai bombardeos queden restos humanos perhí semaos y queden restos de bombes y otu material de guerra que nun lu recueye l'Exércitu y que son un peligru pa les comunidaes».²¹⁰

257. «El 5 de febreru de 2011 na sienda Altos de Río Neiva, Algeciras, hebio un enfrentamientu ente la 9ª Brigada del Exércitu y les FARC, y más tropa llegó a la sienda El Paraíso onde ficieron allanamientos ensin orde xudicial, ficieron un censu ilegal, ocuparon cases y escoles».²¹¹

258. «En 1988 al mio home HÉCTOR JULIO CARDOSO matólu la guerrilla. Al nietu explotó-y cerca una mina y quedó sordu. Esi mesmu añu les FARC matáronme tres fíos, HUBERTI ROMERO, de 16 años, ELVER y ALVEIRO, y depués desapareciéronme al más pequeñu de toos, quedé sola y con obligaciones, ensin consideranza, pidiendo pa sobrevivir».²¹²

259. «Fui conceyal, soi militante y sobreviviente de la Unión Patriótica. El 4 de marzu del 98 les FARC

matáronme a tres fíos: SALOMÓN ARIAS, CARLOS y la neña NINI JOHANA. Esi día hebio elecciones y los mozos taben deteníos pola policía, la guerrilla tiró una bomba sobre'l cuartel y morrieron los mios fíos. Pidí xusticia pero dixéronme que nada se podía facer al ser “una intervención de la guerrilla”. En 2002 la guerrilla matóme otra fía, ELENA PATRICIA ARIAS, de 18 años, y depués amenazáronme de muerte por falar col exércitu. El 8 d'avientu de 2002 metiéronme presu por un montaxe xudicial diz que por ser “xefe de les milicies” y pasé doce díes en calabozu, ensin retrete, incomunicáu. Depués, al baxar al pueblu un domingu, tiráronme dos tiros».²¹³

260. «Al mio fíu matómelu l'Exércitu'l 27 d'ochobre de 2001 y punxéron-y al cuerpu un uniforme camufláu y armes, fusil, pistola; al otro fíu amenácnelu y bilordien que ye “milicianu”; al otro fíu hai un añu quemaron-y la casa».²¹⁴

261. «El 15 de xineru d'esti añu na sienda Plumeros, dos mozos de la guerrilla llegaron a mio casa y pidiéronme que-yos ficiera comida. Al poco sintiéronse tiros al otro llau del monte y tropes del batallón nº 55 del exércitu llegaron a la casa, sacáronme colos cuatro fíos, entrugáronnos a toos, incluyíos los nenos. La guerrilla nomada “Marly” foi masacrada n'antoxana de la casa, yo tuvi que marchar del pueblu por medrana».²¹⁵

262. La guerrilla y en particular les FARC continuaron emplegando de manera xeneralizada mines antiperzones, dalgunes n'arees d'usu de la población civil.

263. «La unidá Índixena del pueblu Awá - UNIPA asoleya esta denuncia y refuga categóricamente los fechos presentaos el llunes 31 de xineru de 2011 onde

²⁰⁸ Ibídem.

²⁰⁹ Ibídem.

²¹⁰ Ibídem.

²¹¹ Ibídem.

²¹² Testimoniu n'Algeciras. Huila, 9 de marzu de 2011.

²¹³ Ibídem.

²¹⁴ Ibídem.

²¹⁵ Ibídem.

dos compañeros Awá, al movilizarse pel nuestro territorio, foron víctimes d'una mina antipersones, los fechos asocedieron nel resguardu Hojal la Turbia, comunidá Peña Caraño, conceyu de Tumaco, los nomes de los compañeros son Wilfrido Rodríguez, de 51 años, y el so fiu José Richard Rodríguez, de 14 años, onde por desgracia José Richard Rodríguez morrió. N'otros fechos asocedió el día 7 de febreru de 2011 siendo las 3:00 pm, María Fernanda Canticus Pascal, de 16 años, Rosa Aurelina Guanga, de 30 años, y Jhon Fabio Guanga, de 22 años, habitantes del Resguardo Hojal la Turbia, Comunidá Quejuambí la Liza per onde se desplazaban hacia so casa, foron víctimes d'una mina antipersones semada n'esta zona, dexando gravemente firida a la compañera Rosa Aurelina Guanga, y con bedernes del artefactu explosivu a los otros dos Indíxenes Awá».²¹⁶

²¹⁶ Comunicáu de les AUTORIDAES INDÍXENES AWÁ —UNIPA—. Territoriu d'alcuentru, convivencia, diálogu y paz. Nariño, 8 de febreru de 2011.

264. «Colombia ye l'únicu país d'América Llatina onde entá se semen mines antipersones (MAP) y municiones ensin esplotar (MUSE) de manera indiscriminada. Dende 1990 hasta mayu de 2010, 2.992 civiles foron víctimes de mines y municiones ensin esplotar (ensin contar los militares): d'éstes el 60 por cientu correspuende a homes mayores d'edá, el 27 por cientu a menores y el 13 a mujeres mayores».²¹⁷

265. Tropes del Batallón Palacé del Ejército Nacional operen al estilu paramilitar, ensin distintivos nin identificación. Ponen retenes ensin señalización a la salida de Trujillo, nel llugar Cementeriu, y baxen a la población civil de los medios de tresporte. Requisen ya identifiquen persones ensin tar facultaos pa ello.

²¹⁷ *El Tiempo*, 6 de payares de 2010.



■ Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

266. Colombia ye ún de los siete países con más desigualdá del mundu y eso refléxase nel indiz del 16% de la so población que ta asitiada na estrema probeza, ye dicir qu' ingresa menos d' ún (1) dólar al día.

267. Los gastos en defensa afecten negativamente a la inversión social. «El país d'América Llatina que más perres destina a gastu militar con respectu al so Productu Interior Bruto (PIB) ye Colombia, col 3,7 por cientu. En 2009, en total emplegáronse esi añu 10.055 millones de dólares nesi menester».²¹⁸

268. «El númberu de probes en Colombia en 2009 foi de 19.899.144 de persones. La probeza estrema ya indixencia pasó de 17,8% en 2008 a 16,4% en 2009, al asitiase en 7.159.172 de persones».²¹⁹

269. Dalgunes empreses contribuyen a la perda de calidá de vida de la población colombiana. «La empresa pública de la Comunidá de Madril, Canal de Isabel II, y el so grupu empresarial INASSA, va ser acusada énte'l Tribunal Permanente de los Pueblos porque «la so práctica empresarial como tresnacional permite que les sos empreses realicen actividaes qu'atenten contra los derechos de los pobladores, usuarios y trabayadores, y desarrollen práctiques empresariales qu'encarecen el preciu de los servicios públicos, amenorguen la so universalidá, fomenten la opacidá de la so xestión, precaricen a los trabayadores, menoscaben

²¹⁸ Revista «SEMANA». Colombia, el país d'A. Llatina que más destina del so PIB a gastu militar, 1 de xunu de 2010.

²¹⁹ «PORTAFOLIO», 30 d'abril de 2010.

y dañen el movimientu sindical, contaminen la naturaleza, perxudiquen a les comunidaes indíxenes y amenorguen el patrimoniu públicu de los ciudadanos».²²⁰

270. «La multinacional Carbones de Cerrejón Ltda., de capital suizu y británicu, implantóse en Colombia en tierres indíxenes y afrodescendientes arrodiaada de la violencia perpetrada pol Estáu colombianu y por grupos paramilitares. Hebío una cadena d'asesinatos de líderes opositores y l' acción de la fuercia pública y los servicios de seguridá provocaron el desplazamientu de la población».²²¹

271. «La empresa mista de Colombia ISAGEN ENDESA y la multinacional italiana Impregilo participan nel proyectu de construcción d'una presa hidroeléctrica sobre'l ríu Sogamoso nel nororiente de Colombia. La xestión, hasta agora, foi tremendamente escura, denuncióse la represión, persecución y asesinatu de líderes sociales opuestos al proyectu. Amás, prevénse fuertes impactos sociales y ambientales demientres la so construcción y puesta en marcha».²²²

272. «La multinacional española Unión Fenosa-Gas Natural tuvo fuertes impactos en Colombia, Guatemala, Nicaragua y Méxicu; foi consecuencia de l'actividá de la multinacional pa consiguir grandes beneficios d'un serviciu públicu como la llectricidá y tamién foi la consecuencia d'un conxuntu de polítiques dictaes pola banca multilateral, de la rellación privilexada ente la empresa y los Gobiernos de los países mentaos y del encontu asociáu a l' Ayuda Oficial al Desarrollu del Gobiernu español».²²³

²²⁰ Tribunal Permanente de los Pueblos. Madrid, 14 y 15 de mayu de 2010.

²²¹ Tribunal Permanente de los Pueblos. Madrid, 14 y 15 de mayu de 2010.

²²² Ibídem.

²²³ STC TPP, Madrid, 14-17 mayu de 2010.

273. Empresas como Unión Fenosa y Gas Natural son responsables del empeoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la costa atlántica colombiana por los altos costos y mala calidad de los servicios.²²⁴

274. El impacto negativo «también fue la consecuencia de un conjunto de políticas dictadas por la banca multilateral, de la relación privilegiada entre la empresa y los Gobiernos de países como Colombia y Guatemala y del encuentro asociado a la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español».²²⁵

275. Las reformas neoliberales del Código Sustantivo del Trabajo fechadas en la década de los 90, mediante la persecución a muerte de los y las sindicalistas, convirtió a Colombia en un país donde las relaciones del trabajo quedaron en el marco de simples relaciones comerciales, algo que es abundante la tercerización, el trabajo sin derechos, sin seguridad social, y es bien alta la informalidad en el empleo.

276. «(...) el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) con Colombia y Perú, que se aprobó en mayo de 2010 en el marco de la presidencia española de la UE, con lo que se desbarrió la dinámica de integración de la Comunidad Andina de Naciones, además de plasmar gravemente la exclusión de las mayorías, robándose sin consulta y consentimiento de los pueblos, caltendiendo el escurantismo de fecha y priorizando evidentemente los intereses de minorías privilegiadas. El acuerdo de libre comercio es en sí mismo una violación integral de los derechos humanos, de los derechos laborales, de la libertad de expresión, de participación, de asociación; una vulneración de los derechos ambientales y culturales; derechos a la alimentación

y a la autodeterminación. Como defensa y puesta en marcha benefició a las empresas multinacionales y a algunos grupos de gran poder económico y político en Perú y Colombia. Los impactos en la población trabajadora, la rotura sindical, la estropeada de comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas, los jóvenes y las mujeres, van a llevar tres si una pérdida de derechos, un agravamiento del conflicto social y armado en el caso colombiano, así como un aumento de las desigualdades regionales, de los daños ambientales irreparables y un marcado empeoramiento de derechos de los y las trabajadoras en Europa. El ataque a los derechos humanos, la desigualdad esbordante, el desempleo, el subempleo, el desastre bancario, la crisis alimentaria y ambiental y la migración derivada van a agravarse en Europa, en Colombia y en Perú».²²⁶

La desigual concentración de la propiedad de las tierras sigue causando pobreza y exclusión, así como conflictos sociales que afectan a comunidades llabriegas, pueblos indígenas y afrocolombianos.

277. Las iniciativas legislativas del gobierno que cursen en el Congreso de la República sobre propiedad, tenencia y uso de las tierras, lleven a las organizaciones llabriegas y de víctimas, que denuncien que se quiera legalizar la desposesión de millones de hectáreas de tierra, borrar el concepto de Unidad Agrícola Familiar y convertir las zonas de reserva llabriega en zonas de desarrollo empresarial, conforme los planes y intereses de los agroempresarios, narcotraficantes, latifundistas y multinacionales, desapareciendo la economía llabriega.²²⁷

²²⁴ Testimonio en Barranquilla, 4 de marzo de 2011.

²²⁵ STC TPP, Madrid, 14-17 mayo de 2010.

²²⁶ Conclusiones Seminario Internacional «Contextos de aplicación de acuerdos económicos y de garantías de los Derechos Humanos». Uviéu, Asturias, 24-26 de payares de 2010.

²²⁷ Entrevista con el Comité Ejecutivo de FENSUAGRO-CUT. Bogotá, 13 de marzo de 2011.

278. Abonda l'usu de la violencia paramilitar por parte de latifundistes, políticos, empresarios nacionales, empresas multinacionales y narcotraficantes, pa quita-yos a les comunidaes rurales les tierras y territorios sobre los qu'hai planes d' inversión o perspectives de valorización, afectando de manera bultable a los

terrenos baleros y a les finques qu'esfruten les comunidaes con títulos precarios de propiedad.

279. Esti ye'l casu de les finques «Las Pavas» (El Peñón, Sur de Bolívar), «La Europa» (Ovejas-Sucre) y «El Desengaño» (Pital de Megua, Baranoa-Atlánticu).



■ Pueblos indíxenes y afrocolombianos

280. En Colombia existe la discriminación por razones étniques. «En conceyos con población afrocolombiana superior al 30% (108 conceyos de los más de 1.000 del país) l'índiz de desarrollu humanu evidencia grandes atrasos frente a los promedios del país; por exemplu, en cobertures d'acueductu, esperanza de vida y tases de natalidá y mortandá infantil. Los cinco departamentos del país col más altu porcentax de población afrocolombiana son los que viven con mayor probeza y peor calidá de vida: Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó y Nariño».²²⁸

281. La población indíxena foi nel 2010 especialmente atacada y dañable.

282. Reconociós pola Constitución Política y escluyíos na práctica, los pueblos indíxenes son arrastraos a la llende la estinción, al empar que la población afrocolombiana ye desposeyida con violencia de los sos territorios.

283. El Foru Permanente de la ONU pa les Cuestiones Indíxenes señaló que «la situación de los derechos humanos de los pueblos indíxenes de Colombia sigue siendo bien grave, crítica y mui de preocupar, magar de la reconocencia constitucional d'estos derechos».²²⁹

284. El Gobiernu colombianu ta incumpliendo'l mandáu de la Corte Constitucional conteníu nos Autos 004 y 005 del 2009 que-y ordena crear con urxen-

²²⁸ Christian Salazar, representante en Colombia de l'Alta Comisionada de las Naciones Xuníes pa los Derechos Humanos. Comunicáu del 21 de marzu de 2011.

²²⁹ Foru Permanente de la ONU pa les Cuestiones Indíxenes (UNPFII-ONU). Bogotá, 9 de xunetu de 2010.

cia planes de salvaguardia pa los pueblos indíxenes y afrodescendientes.

285. Nel 2010 agravóse la violencia contra los pueblos indíxenes colombianos. Foron asesinaos 122 aboríxenes, 10 más foron desaparecíos y a 1.146 desplazáronlos forzosu. Ente les persones asesinaes hai 5 neños y 17 muyeres.²³⁰

286. «Los indíxenes sufren cada vegada más ataques en Colombia. Ta matándose per ellos y amenazándolos; oblígase-yos a participar nel conflictu armáu y tan echándolos de les sos tierres. Yá ye hora de que'l gobiernu colombianu asuma en serio les sos obligaciones y actúe yá pa protexer a los pueblos indíxenes».²³¹

287. Les violaciones del Derechu Internacional Humanitariu de los pueblos indíxenes son numberoses y por toles partes en conflictu. El CRIC algama en xunetu de 2010 un total de 237 atentaos a la sosistencia de la población civil, 122 atentaos y amenazaos, 96 homicidios, 56 detenciones arbitraries, 28 escorrimientos, 18 firidos por mines antipersones; responsabilidá nun 45% de la fuercia pública, 41% de la guerrilla y el restu de paramilitares y otros actores.²³²

288. También hebio 103 amenaces de muerte, la mayor parte nel Cauca y Nariño y dalgunes d'elles colectives, 69 personas firides, 40 detenciones arbitraries, 10 desapareiciones forzaes, la mayoría miembros del pueblu Awa Cuakier resguardu Pipalta.²³³

289. Sobre l'autoría d'estes violaciones «... los actores estatales siguen siendo los principales respon-

²³⁰ Informe de la ONIC. Bogotá, 15 de xineru de 2011.

²³¹ Marcelo Pollack, investigador d'Amnistía Internacional. Bogotá, 22 de febreru de 2011.

²³² Programa de Derechos Humanos del CRIC. Informe de xunetu de 2010.

²³³ Informe de la ONIC. Bogotá, 15 de xineru de 2011.

sables de les violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Alcontramos que los grupos insurgentes xunto con otros actores ocupen el segundu llugar». ²³⁴

290. Les guerrilles son señalaes pola so responsabilidadá en violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. «Les acciones d'estos grupos insurgentes, que comprometen directamente a les víctimes indígenas per medios ilegales de guerra, son l'usu d'armes o mines prohibies per medios ilegales de guerra; el reclutamentu de menores, l'ataque a oxetivu militar; los ametrallamientos, bombardeos, ataques indiscriminaos por métodos ilegales de guerra; la muerte de non combatiente por combate; les firides de non combatientes por combate; les amenaces colectives por persecución política; ente otros». ²³⁵

291. Los pueblos más afectaos nel 2010 por violaciones de los derechos humanos foron: nasa, awá, zenú, wayúu, sikuani, embera, guayabero, pasto, quillacinga, tucano, u'wa, guambianos, pijao, huitoto, yukpa. ²³⁶

292. «Pa enfrentar los proyectos del capital internacional y pa mostrar les violaciones de los derechos humanos, les comunidaes movilizámonos nun paru departamental el 12 d'ochobre de 2010. Cáfanos que pa facilitar el saquéu a les petroleres, el Ministeriu del Interior certificare que “nun existen pueblos indígenas nel Alto Putumayo”. Soi'l gobernador del pueblu Nasa del Alto Putumayo, existimos y denunciemos el plan IIRSA, y denunciemos a la policía de carreteres qu'ente Puerto Asís y Villagarzón acusósenos de ser el

Frente 42 de les FARC; como toi amenazáu punxérome dos policíes pal “Plan Padrín”, pero díxe-yos que “yo nun acepto la so protección porque son ustedes mesmos los que nos señalen, amenacen y golpeen». ²³⁷

293. El Gobiernu y les empreses nun cumplen el Conveniu 169 de la OIT ratificáu por Colombia, qu'establez la consulta previa a les comunidaes y pueblos pa llograr el so consentimientu previu, llibre ya informáu sobre'l desarrollu de proyectos d'inversión nos territorios colectivos o resguardos indígenas.

294. Sicasí, «Colombia ye reconocida como exemplu mundial en materia de consultes previes pa comunidaes étniques; destacó esti sábadu la Viceministra del Interior, Viviana Manrique, demientres el Conseyu Comunal: Balance de Gobiernu 2002-2010 ‘Trabayu, fechos y corazón’, que se fizo en Florencia (Caquetá)». ²³⁸

295. Munchísimes vegaes los pueblos indígenas desixeron el retiru del personal armáu, llegal o illegal de los sos territorios, lo qu'afecta n'especial al pueblu awá que tien sufrió trés masacres.

296. El 26 d'agostu del 2009 foron asesinaos 14 awás, incluyíos 6 menores d'edá y un bebé d'ocho meses, nel resguardu de Gran Rosario, Nariño.

297. El 4 de febreru les FARC mataron a 15 awás, ente ellos 2 muyeres xestantes, nel conceyu de Barbacoas, Nariño. El 12 de febreru foron asesinaos 10 indígenas awá del resguardu Sandé poles FARC.

298. «A les FARC y l'ELN que nun pongan más en peligru la vida de la población indígena, que respeten

²³⁴ Informe de la ONIC. Estáu de los derechos de los Pueblos Indígenas 2010.

²³⁵ *Ibidem*.

²³⁶ *Ibidem*.

²³⁷ Testimoniu nel V Alcuentru del MOVICE. Bogotá, 10 de marzu de 2011.

²³⁸ Ministeriu d' Interior y Xusticia. Florencia, 22 de mayu de 2010.

la vida y el territorio del nuestro pueblo, que nun nos arreyen a un conflictu armáu que nun ye nuestro y que se retiren del nuestro territorio porque coles sos acciones tan tornando a la nuestra madre nun cemen-teriu. A la fuerza pública que cumpla col so deber constitucional de protexer a la población civil y dema-nera a la población indíxena, sometiéndose siempre al

respetu de les normes del Derechu Internacional Hu-manitario —DIH— y al exerciciu plenu de la nuestra Xurisdicción Especial Indíxena».²³⁹

²³⁹ Comunicáu de les Autoridades Indíxenas Awá-UNIPA. Terri-toriu d'alcuentru, convivencia, diálogu y paz. Nariño, 15 de payares de 2010.



■ Conclusiones

La nueva orientación del Gobierno, presidiu por Juan Manuel Santos Calderón, ye positivu, pero entá nun s'espeya nuna meyora del estáu de los derechos humanos.

Nel marcu del conflictu armáu siguieron los ataques, escorrimientos, amenaces de muerte, asesinatos, desapareiciones forzaes y apresamientos ilegales contra persones arreaes a grupos humanos especialmente vulnerables, como sindicalistes, dirixentes llabradores, población indíxena y afrocolombiana, población LGTB, opositores políticos y polítiques, periodistes, testigos y víctimes que desixen devolver les terres arrampuñaes.

Baxaron les execuciones estraxudiciales, aumentaron les masacres y les amenaces de muerte, asina como los homicidios nes principales ciudaes del país.

Los grupos paramilitares, o BACRIM, delinquen con impunidá en casi tolos departamentos del país onde quedaron intactes les estructures d'apoyu políticu y económicu. Amás de bandes dedicaes al narcotráficu, tamién son una ferramienta de control social y políticu mediante'l terror, tanto en las zonas rurales como nes ciudaes.

Toles partes comprometíes nel conflictu armáu (exércitu, grupos paramilitares y grupos guerrilleros) violen los derechos humanos y el DIH, siendo bien grave la implicación de miembros de la fuerzia pública.

L'Estáu sigue safándose de la entrada de comisiones de derechos humanos nes cárceles del país, dende onde lleguen denuncies que se tipificaríen como tratu cruel, inhumanu y degradante, n'especial contra presos y preses por delitos políticos.

Los pueblos indíxenes y afrocolombianos siguen ensin tener protección efectiva, incumplíendose la orde de la Corte Constitucional y muchos d'ellos tán na llende de la estinción.

La impunidá atapa la enorme mayoría de violaciones de los derechos humanos y del DIH.

El país malapenes entama a conocer la dimensión de la desapareición forzada de persones y los actos de violencia sexual, asina como l'usu de menores d'edá nel conflictu armáu.

Colombia tien un importante crecimientu económicu que nun se compadez de les altes cifres de probeza y esclusión que faen d'ella ún de los países más desiguales del mundu.

Sosprende positivamente el que, magar de les persecuciones, la sociedá colombiana llograre preservar importantes niveles de cohesión y organización social en defensa de los derechos humanos.

Hai empresas tresnacionales que puen tar participando na estratexa narcoparamilitar, n'especial les dedicaes a la minería, el petróleo, la enerxía y el sector agroalimentariu. Toles multinacionales se beneficien de les violaciones de los derechos humanos cometíes contra los y les trabayadores, sindicalistes, comunidaes llabriegues y los pueblos indíxenes y afrocolombianos.

Nel trescursu de los clásique 50 años del conflictu armáu colombianu, la violencia sexual ye emplegada como arma de guerra por tolos grupos armaos (fuerzies militares del Estáu, paramilitares y grupos guerrilleros). L'oxetivu ye semar el mieu nes comunidaes emplegando a les muyeres pa conseguir los sos fines militares. Pero amás emplégase como forma de tortura y de castigu, como control sobre la población, como

mediu pa imponer códigos de conducta durísimos, como ferramieta de venganza y de presión o como preséu pa dañar y amedrentar al enemigo.

L'usu d'esta violencia, lloñe de ser ocasional, convirtióse nuna práctica avezada que pasó dafechu a formar parte del conflictu armáu. Sicasí, la cafiante escondedura y negación d'esti delitu por parte del Estáu colombianu permite que s'éternice un entornu d'impunidá nel que esta clas de delitos nun

s'investiguen, nin s'enxucien, nin se castigue a los responsables. Dientro de los grupos de población, les muyeres afrocolombianes y las muyeres indíxenes son les más dañables ante la violencia sexual dada la triple discriminación que sufren marcada por el so xéneru, pola so etnia y pola so probrítu.²⁴⁰

²⁴⁰ Informe d'Oxfam Internacional. «La violencia sexual en Colombia. Un arma de guerra», 9 de setiembre de 2009.



■ Recomendaciones

Al Gobiernu de Colombia:

- Tresformar la bona orientación n'acciones de gobiernu con impactu positivu nos derechos humanos.
- Solucionar les desigualdaes económiqes qu'anicien la esclusión política y la violencia social.
- Protexer darréu a los pueblos indíxenes y afro-colombianos como tien mandao la Corte Constitucional.
- Ordenar a la fuercia pública el respetu del DIH y l'aplicación del principiu de distinción ente combatiente y población civil.
- Llimpiar los archivos d'intelixencia del estáu de los datos personales y les atribuciones feches contra los y les defensores de los derechos humanos.
- Lluchar escontra los grupos paramilitares como un asuntu de seguridá nacional y esmantelar les sos estructures d'encontu económicu y políticu.
- Fortalecer el sistema xudicial pa finar cola impunidá y dar pasos pa eliminar los conflictos de competencia que plantea la xusticia penal militar énte delitos cometíos por miembros de la fuercia pública.
- Protexer de manera efectiva a les personas en peligru, n'especial a los grupos humanos más dañables; con urxencia a los arreyaos a procesos d'esixencia de devolver les tierres quitaes, asina como a les víctimes y a los testigos.

- Contar cola llexislación internacional y el paecer de les víctimes y de les sos organizaciones no tocante a los elementos de la xusticia transitoria, les lleis d'ígua y de recuperación de tierres, les normes sobre la verdá y la memoria y non discriminar a las víctimes pola calidá del so criminal.
- Aniciar espacios de diálogu coles guerrilles qu'asienten bases pa una solución política al conflictu social y armáu.

Al Gobiernu d'España:

- Vixilar les actividaes de les empreses tresnacionales españoles en Colombia y l'asunción de la so responsabilidá nes violaciones de derechos humanos y desplazamientos forzaos asocediós.
- Respetar el Derechu d'Asilu, permediando la salida de refuxaos y refuxades de Colombia per aciu la concesión de visados y de la protección internacional permanente (Estatutos d'Asilu), asina como el refuerzu y la meyora de los programes de protección temporal pa persones en peligru.
- Nun aprobar alcuerdos como'l Tratáu de Llibre Comerciú de la Xunióu Europea con Colombia y Perú, hasta que'l gobiernu de Colombia garantice na práctica el respetu del derechu a la vida a los y les sindicalistes, el exerciciu de la actividá sindical y la observancia de los derechos fundamentales de los y les trabayadores colombianos.
- Nun vender armes a Colombia, pola mor del so conflictu internu y la responsabilidá del gobiernu y la fuercia pública en graves violaciones de los derechos humanos.

A los grupos armados ilegales:

- Reconocer y respetar el DIH.
- Dejar en libertad a los combatientes menores de edad, a las personas secuestradas, rehenes y prisioneros de guerra.
- Suspender la semilla de minas antipersonas y el atropamiento de menores.

A los gobiernos del mundo:

- No vender armas a Colombia por tener un conflicto armado interno y por los antecedentes de que la fuerza pública está sormorgiada en graves violaciones de los derechos humanos.

- Abstenerse de firmar tratados de comercio con el gobierno y la patronal colombiana hasta tanto se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores y los sindicalistas.
- Abstenerse de hacer cooperación al desarrollo que sea empleada como mecanismo de legitimación por la fuerza pública en zonas donde viola los derechos humanos.
- Estimular procesos de diálogo para una solución política negociada del conflicto social y armado.
- Interesarse por la invisibilidad de la situación de los prisioneros y los prisioneros por delitos políticos.

■ Anexos

Instituciones y organizaciones sociales entrevistadas

► ATLÁNTICO

Fundación Infancia Feliz

FCSP

REDHER

Asociación Llabriega de Baranoa

ASOMUVICA, Asociación de Mujeres víctimas del conflicto armado

AFUSODO, Asociación de familias unidas por un solo dolor

ACEU

FEU

► SUCRE

FENSUAGRO – CUT

IPO

MOVICE Capítulo Sucre

CPDH

Cabildo Vilú/ONIC, pueblo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento

Empresa Comunitaria Finca L'Alemaña de San Onofre

Organización llabriega de la Ciénaga de Cholé, de San Benito Abad

Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Llabriegos de Sucre, ASOTRALDES

Cárcel de Corozal

ACEU Sucre

Asociación Nuevo Porvenir d'Ovejas

Corporación Xusticia y Equidá

► TOLIMA

Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima

Reaniciar

SIMATOL

Asodemuc

CUT Seccional Tolima

PCC Tolima

CPDH

Astracatol

Coordinador Nacional Agrario

Delegaciones llabriegues de Planadas, Rioblanco, Dolores y Chaparral

Colectivo estudiantil Camilo Alberto Zuluaga

ECOTIERRA

Asociación de Defensa de la Cuenca del Anaimé

Mesa Departamental de Derechos Humanos

Delegaciones llabriegues de los concejos de Río Blanco, Planadas, Chaparral, San Antonio, Dolores

► HUILA

Alcalde d'Algeciras

Concejo d'Algeciras

CPDH

Sindicato de Trabajadores Llabriegos del Huila

ANDAS
Defensoría del Pueblo
OACNUDH
OACNUR Huila
PNUD Huila y Caquetá
Corporación de Profesionales del Sur de Colombia
Coordinación Colombia-Europa-EUA

► VALLE DEL CAUCA

Conceyu de Trujillo
ASFAVIT

Sigles emplegaes

ACEU: Asociación d'Estudiantes Universitarios
ACIN: Asociación de Cabildos Indíxenes del Norte del cauca
AFXSODO: Asociación de Familias Xunies por un solo dolor
AFRODES: Asociación de Afrocolombianos Desplazaos
ANTHOC: Asociación Nacional de Trabayadores d'Hospitales y Clínicas de Colombia
ASFAVIT: Asociación de Families Víctimes de la masacre de Trujillo
ASOLAB: Asociación Llabriega de Buenos Aires
ASPU: Asociación de Profesores Universitarios
ASTRALATOL: Asociación de Trabayadores Llabriegos del Tolima
AXC: Autodefenses Xunies de Colombia
BACRIM: Bandas Emerxentes Criminales

BP: British Petroleum Company
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CODHES: Consultoría pa los Derechos Humanos y el Desplazamientu
CODDEHU Colectivu de Defensa de los Derechos Humanos
CRIC: Consejo Regional Indíxena del Norte del Cauca
CTI: Cuerpu Técnico d'Investigación Xudicial de la Fiscalía
CUT: Central Unitaria de Trabayadores
DAABON: Grupo Dávila Abondano
DAS: Departamentu Alministrativu de Seguridá
DIH: Derechu Internacional Humanitariu
ESMAD: Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional
FEU: Federación d'estudiantes Universitarios
FECODE: Federación Colombiana d'Educadores
FCSPP: Fundación Comité de Solidaridá colos Presos Políticos
ELN: Exércitu de Lliberación Nacional
ERPAC: Exércitu Revolucionariu Popular Anticomunista
FARC-EP: Fuerces Armaes GAULA: Grupos d'Acción Unificada pola Llibertá Personal
FENSUAGRO: Federación Sindical Unitaria Agropecuaria
INPEC: Institutu Penitenciariu y carcelariu
INDEPAZ: Institutu d'Estudios pal Desenvolvimientu y la Paz
INCORA: Institutu Colombiano de la Reforma Agraria
INCODER: Institutu Colombianu de Desarrollu Rural
IIRSA: Iniciativa d'Integración Rexonal Sudamericana

LGBT: lesbianas, gais, bisexuales y transexuales
MAP: Mines Antipersones
MAPP/OEA: Misión d'Apoyu al procesu de Paz en Colombia de la Organización de los MUSE: Municiones Sin Esplotar
Estaos Americanos
MOVICE: Movimientu de Víctimes de Crímenes d'Estáu
OIT: Organización Internacional del Trabayu
ONX: Organización de Naciones Xunies
OACNXDH: oficina de l'Alta Comisionada de Naciones Xunies pa los Derechos Humanos
OEA: Organización d'Estaos Americanos
PCC: Partíu Comunista Colombianu

PDA: Polu Democráticu Alternativu
REDHER: Rede d'Hermandá y Solidaridá con Colombia
SINTRABECOLICAS: Sindicatu Nacional de Trabayadores de la Industria de Bebides Alcohóliques
SINTRAGRIM: Sindicatu de Trabayadores Agrícolas del Meta
SIXIN: Serviciu d'Investigación Xudicial de la Policía Nacional
SIMATOL: Sindicatu de Maestros del Tolima
SUTEC: Sindicatu Unitariu de Trabayadores de la Enseñanza del Cauca
TLC: Tratáu de Llibre Comerciú
UIS: Universidá Industrial de Santander

